

Disposición frente al conflicto y el capital social en jóvenes víctimas del conflicto armado de

Tolú Viejo y Sincelejo, Sucre

Rosa Elena Rojas Amaya

Universidad del Norte

Facultad de Ciencias Sociales

Maestría en Desarrollo Social

Barranquilla, Colombia

2019

Disposición frente al conflicto y el capital social en jóvenes víctimas del conflicto armado de
Tolú Viejo y Sincelejo, Sucre

Rosa Elena Rojas Amaya

Tesis presentada como requisito para optar al título de:

Magister en Desarrollo Social

Director:

Dr. Camilo Alberto Madariaga Orozco

Línea de Investigación:

Línea en Desarrollo Social – Grupo Gidham

Universidad del Norte

Facultad de Ciencias Sociales

Maestría en Desarrollo Social

Barranquilla, Colombia

2019

El camino a la excelencia no tiene límite de velocidad.

David Johnson

La presente tesis de grado, la dedico principalmente a Dios, por ser el inspirador y darme la sabiduría divina para alcanzar uno de mis anhelos.

A mis seres queridos, por su apoyo moral a lo largo de esta etapa de mi vida.

Y al coordinador, tutora y a todos los docentes de la maestría en Desarrollo Social, por haber compartido sus conocimientos a lo largo de la preparación de la Maestría.

Resumen

Este trabajo de investigación se centra en la determinación de la correlación de los factores de disposición social frente a procesos de retorno y reubicación, y de capital social de los jóvenes víctimas del conflicto armado en el departamento de Sucre, específicamente, Tolú Viejo y Sincelejo. Se explora la génesis de la situación de conflicto en la región y los impactos psicosociales que han determinado la fractura y rompimiento de redes sociales. Se abordaron procesos de investigación relacionados con los elementos centrales del estudio a través de un diseño metodológico no experimental, con el fin de describir las características de capital social y la disposición psicosocial de la muestra representativa de población. Por supuesto, se proyectó la obtención de información que permitiera posteriores propuestas de programas tendientes al mejoramiento de las relaciones y, en consecuencia, del capital social de la región.

De manera más precisa, se aplican dos cuestionarios a 237 jóvenes de los municipios mencionados: el Barómetro de Capital Social (BARCAS) y el Cuestionario de Disposición Psicosocial frente al Conflicto (CDPC). Posteriormente, se analizaron los datos recolectados a través de software estadístico en búsqueda de variaciones significativas al respecto de las dimensiones que hacen parte de los instrumentos mencionados. En esta medida, se encontraron variaciones significativas positivas en la mayoría de los factores analizados. Esto implica que los sujetos poseen alto grado de confianza en sus redes sociales y en los medios de comunicación. Sin embargo, se halló un nivel de confianza bajo en instituciones como la iglesia y los partidos políticos. En relación con esta última, una consecuencia esperable y visible en los resultados es la baja disposición de los encuestados hacia la participación ciudadana.

A través de los factores Confie (confianza en fuentes de información del Estado) y Fenoval (fuentes de información no válida) se pueden establecer conclusiones que se ajustan a lo encontrado en análisis de capital social llevados a cabo por John Sudarsky; esto es: Sucre es una de las regiones en las que se evidencia un alto grado de solidaridad y mutualidad. Éstas deben ser aprovechadas por los entes gubernamentales para generar planes que potencien el desarrollo económico y social del departamento.

Palabras clave: capital social, reconciliación social, confianza social, conflicto, disposición psicosocial, cuestionario BARCAS, Cuestionario de Disposición Psicosocial frente al Conflicto (CDPC)

Abstract

This research work focuses on determining the correlation between the factors of social willingness towards return and relocation processes, and the ones of social capital on youngsters who have been victims of the armed conflict, in the region of Sucre (Colombia), particularly, Tolú Viejo, and Sincelejo municipalities. The genesis of the conflict in the region and its impacts, that have derived the ruptures and breakthroughs of social networks, were explored. In order to describe the characteristics of social capital and social willingness on a representative sample, the central items of the project were developed by means of non-experimental research design. The results, naturally, were prospected towards programs oriented to enhance social relations and therefore the social capital in the region.

More precisely, the methodological design consisted of applying two kinds of surveys on 237 young people from the aforementioned municipalities: Social Capital Barometer (BARCAS), and the survey of social willingness towards the armed conflicts (CDPC, Spanish acronym). Subsequently, the collected data were analyzed by statistics software trying to find meaningful variations in relation to the factors that the instruments are made up by. Thus, positive meaningful relations were found in most of the analyzed items. These results imply that the subjects have a high degree of confidence in their social networks and mass media. However, a low level of confidence was found regarding clerical institutions and political parties. In terms of the latter, a clear consequence, also visible in the results, is the low level of willingness towards democratic participation.

By means of Confie (confidence into official information sources) and Fenoval (non-valid information sources), it is possible to arrive to conclusions adjusted to what John Sudarsky found in his social capital analysis; this is: the region of Sucre is one of the zones in which a high degree of solidarity and mutuality are found. These should be positively exploited by government agencies in order to empower the economic and social development of the region.

Keywords: social capital, social reconciliation, social confidence, conflict, psico-social willingness, Barcas, survey of social willingness towards the armed conflicts (CDPC, Spanish acronym)

Tabla de contenido

Introducción.....	1
1.1 Hechos.....	4
1.1.1 Génesis del conflicto armado en Sucre.....	4
1.1.2 Génesis del paramilitarismo en el Caribe.....	6
1.1.3 Historia de las AUC en la región.....	7
1.1.4 Conflicto por tenencia de tierras en el departamento.....	8
1.1.5 Fenómeno de desplazamiento armado en la zona.....	9
1.1.6 Los jóvenes afectados.....	10
1.2. Pregunta problema	13
1.3. Objetivos	14
1.3.1. Objetivo general.....	14
1.3.2. Objetivos específicos.....	14
 2. Justificación	15
2.1. Estado del arte	20
2.2. Capital social.....	20
2.2.1. Barómetro de Capital Social (BARCAS).....	25
2.3. Disposición psicosocial frente al conflicto.....	32
2.3.1. Cuestionario de disposición psicosocial frente al conflicto.....	35
 3. Marco teórico.....	37
3.1. Contexto de violencia en Colombia y en el departamento de Sucre.....	39
3.2. Impacto psicosocial del conflicto armado.....	42

3.3. Disposición frente al conflicto armado	53
3.4. Reconciliación social.....	58
3.5. Capital social	60
3.6. Retorno y reubicación	64
3.7. Confianza	68
4. Metodología.....	70
4.1. Tipo y diseño de investigación.....	70
4.2. Muestra.....	70
4.2.1. Criterio de exclusión.....	71
4.3. Técnica de recolección de datos	72
4.4. Instrumentos de medición	72
4.4.1. Cuestionario de Disposición Psicosocial Frente al Conflicto (CDPC) (Alzate et al., 2009).	73
4.4.2. Barómetro de Capital social (BARCAS) (Sudarsky, 2007).	74
4.5. Dimensiones y variables.....	76
4.5.1. Solidaridad y Mutualidad (SOLIMUTU).....	76
4.5.2. Relaciones Horizontales (RELHORZT).....	77
4.5.3. Jerarquía o Articulación Vertical (JERARQUÍA).....	78
4.5.4. Confianza Institucional (CONFINST).....	79
4.5.5. Control Social (CONTROLSOC).....	80
4.5.6. Participación Cívica (PARCIVIC).	81
4.5.7. Participación Política (PARPOL).....	81
4.5.8. Información y Transparencia (INFOTRAN).....	82

4.5.9. Republicanismo Cívico (REPUCIVICO).....	83
4.5.10. Medios (MEDIOS).	

84

4.6. Procedimiento	85
4.7. Consideraciones éticas	86
4.8. Análisis estadístico	87

5. Resultados89

5.1. Análisis factorial	89
5.2. Análisis de normalidad.....	98
5.3. Comparaciones de medianas entre categorías de agrupación	102
5.3.1. Cuestionario de Disposición Psicosocial Frente al Conflicto (CDPC).....	112
5.3.2. Barómetro de Capital Social (BARCAS).	116
5.4. Correlaciones entre dimensiones pertenecientes a la prueba CDPC y el Cuestionario	117
5.5. Correlaciones entre dimensiones pertenecientes a la prueba CDPC y factores principales del Cuestionario Barcas.....	125

6. Discusión y conclusiones.....128

Referencias.....139

Lista de figuras

	Pág.
Figura 1. Medición de capital social en el mundo. Tomada de: Amaya (2015, p.8).....	25
Figura 2. Análisis no lineal del desarrollo. Tomada de: Foliaco-Gamboa (2013, p. 47).....	29
Figura 3. Gráfico de resultados encuesta psicosocial 2002. Tomada de: MPDL y ECHO (2004).	49
Figura 4. Resultados encuesta psicológica. Tomado de: MPDL y ECHO (2004).....	50
Figura 5. Relación entre dimensiones y factores del cuestionario BARCAS. Tomada de: Fundación Antonio Restrepo Barco (2013).	63
Figura 6. Observación del SPSS para el análisis factorial para el cuestionario BARCAS. Fuente: Elaboración propia	90
Figura 7. Histograma y curva normal para la variable edad. Fuente: Elaboración propia a través del software IBM SPSS	98

Lista de tablas

	Pág.
Tabla 1. <i>Metas de atención psicosocial del programa PAPSIVI</i>	46
Tabla 2. <i>Reparación individual en el área psicosocial</i>	48
Tabla 3. <i>Dimensiones y variables del cuestionario BARCAS</i>	75
Tabla 4. <i>Variables de la dimensión Solidaridad y Mutualidad</i>	76
Tabla 5. <i>Variables de la dimensión Relaciones Horizontales</i>	77
Tabla 6. <i>Variables de la dimensión Jerarquía o Articulación Vertical</i>	78
Tabla 7. <i>Variables de la dimensión Confianza Institucional</i>	79
Tabla 8. <i>Variables de la dimensión Control Social</i>	80
Tabla 9. <i>Variables de la dimensión Participación Cívica.</i>	81
Tabla 10. <i>Variables de la dimensión Participación Política</i>	82
Tabla 11. <i>Variables de la dimensión Republicanismo Cívico</i>	83
Tabla 12. <i>Variables de la dimensión Medios</i>	84
Tabla 13. <i>Matriz de componentes principales – Análisis factorial prueba CDPC</i>	91
Tabla 14. <i>Matriz de componentes rotados varimax – Análisis factorial prueba CDPC</i>	94
Tabla 15. <i>Resultados de la prueba K-S para las dimensiones correspondientes a la prueba CPDC</i>	99
Tabla 16. <i>Resultados de la prueba K-S para los elementos pertenecientes al cuestionario BARCAS</i>	101
Tabla 17. <i>Resultados de la comparación de puntajes en razón del sexo de los participantes ...</i>	103

Tabla 18. <i>Diferencias en los puntajes obtenidos en el cuestionario BARCAS en razón del sexo de los participantes</i>	106
Tabla 19. <i>Diferencias presentadas en las dimensiones de la prueba CDPC en razón de la escolaridad de los participantes</i>	107
Tabla 20. <i>Diferencias en las variables del cuestionario BARCAS en razón de la escolaridad de los participantes</i>	108
Tabla 21. <i>Diferencias en los puntajes de los elementos constituyentes de las pruebas CDPC y cuestionario BARCAS, en razón de la situación laboral de los participantes</i>	110
Tabla 22. <i>Diferencias en presentadas en los elementos del cuestionario BARCAS en razón del estado civil de los participantes</i>	112
Tabla 23. <i>Correlaciones entre las dimensiones del factor K-social y las dimensiones constituyentes del CDPC</i>	118
Tabla 24. <i>Correlaciones entre las dimensiones del factor Confíe y las dimensiones constituyentes del CDPC</i>	121
Tabla 25. <i>Correlaciones entre las dimensiones del factor Fenoval y las dimensiones constituyentes del CDPC</i>	124
Tabla 26. <i>Correlaciones entre el factor K-social y las dimensiones de CDPC</i>	125
Tabla 27. <i>Correlaciones entre el factor Confíe y las dimensiones de CDPC</i>	126
Tabla 28. <i>Correlaciones entre el factor Fenoval y las dimensiones de CDPC</i>	126

Lista de gráficas

Pág.

Gráfica 1. Relación de promedio de resultados por dimensión para la prueba CDPC. Fuente:

Elaboración propia 113

Gráfica 2. Relación de promedio de resultados por dimensión para la prueba BARCAS. Fuente:

Elaboración propia 116

Gráfica 3. Relación de promedio de resultados por factor para la prueba BARCAS. Fuente:

Elaboración propia 117

Introducción

Colombia ha atravesado por situaciones de violencia desde hace más de 50 años. Este conflicto armado ha dejado secuelas en los habitantes de las regiones afectadas, que impiden que se establezcan relaciones interpersonales e interculturales tendientes al mejoramiento de la situación social que viven al momento de reubicarse en sus parcelas y viviendas abandonadas a causa del miedo y la desesperanza. Dos de las regiones que más han padecido estas circunstancias son la zona de la Mojana y los Montes de María en el departamento de Sucre, las cuales fueron ocupadas por grupos paramilitares y por varias facciones de la guerrilla.

Las condiciones de violencia ejercidas por estos grupos armados ilegales, que infligieron tortura, desaparición y muerte, dejaron a los habitantes con prevenciones, temores y huellas de dolor que se resumen en efectos psicosociales que han desestabilizado económica, social y políticamente dicha región. Efectivamente, las redes sociales que se habían conformado, tradicionalmente, a través de generaciones de campesinos y habitantes de los pueblos del departamento, se rompen y generan desestabilidad en varios niveles de relación social; se han perdido los lazos familiares y cívicos que, antaño, cohesionaban la región y el país, lo cual ha producido aislamiento social, que no aporta para el desarrollo territorial y nacional. Esto produce estancamiento económico y, por ende, subdesarrollo y pobreza social y económica, enraizados en habitantes con poca educación y sin ánimo para superar los infortunios y consecuencias dejadas por la violencia.

Por otro lado, una población de especial interés son las víctimas jóvenes, puesto que, en estos contextos, si no se ha logrado establecer un trabajo diferenciado para las víctimas en situación de retorno, menos se ha hecho con respecto a aquellos en este determinado grupo etario. Además, por las dinámicas en las que se encuentran esta población, suponen un nexo entre las tradiciones de la infancia y la transformación de la adolescencia en el camino hacia la adultez.

Estos aspectos son los que se abordan en este trabajo de investigación, a saber: por medio de la correlación entre las variables de la disposición social de los afectados por el conflicto y la calidad de capital social que se establece luego de los procesos de retorno y reubicación en el periodo del posacuerdo. Es importante determinar en qué estado se encuentra el primero de los aspectos y medir el capital social que ha quedado después de lo vivido con el fin de promover y generar herramientas o programas gubernamentales que permitan recuperar las zonas y comunidades afectadas.

Para lograr lo anterior, se presentará una síntesis de las causas que originaron el conflicto en el departamento de Sucre, la formación de los grupos armados ilegales, las consecuencias de desplazamiento y desintegración de redes sociales, por un lado. Por otro, se realizará un recuento de algunas investigaciones realizadas a propósito de la medición de capital social y disposición frente al conflicto y a los procesos de reubicación y retorno. Se presentará una conceptualización sobre el Barómetro de Capital Social (BARCAS), herramienta de medición del capital social, y se relacionarán las variables a medir en el proceso investigativo de disposición social llevado a cabo por Alzate, Durán y Sabucedo (2009), quienes propusieron las variables a tener en cuenta en el estudio que se llevará a cabo. Posteriormente, se abordarán algunas de las nociones relacionadas con los procesos de retorno y reubicación, con el fin de establecer un marco para la región bajo

estudio. Finalmente, se expondrá la metodología utilizada para la investigación, en cuanto a la descripción del diseño de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de información y se ilustrará el procedimiento de análisis realizado.

Todo lo anterior para acercarse a la respuesta del interrogante que guía la investigación:
¿Cuál es la correlación entre los factores de disposición frente al conflicto y de capital social en los procesos de retorno y/o reubicación de jóvenes víctimas del conflicto armado de Tolú Viejo y Sincelejo, Sucre?

Esto, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos a perseguir, en su orden: caracterizar los factores de disposición social frente al conflicto armado en jóvenes víctimas del conflicto armado en situación de retorno y/o reubicación, caracterizar los factores de capital social actual en jóvenes víctimas del conflicto armado en situación de retorno y/o reubicación y establecer el en el cual se pueden correlacionar los factores de disposición social con los factores de capital social.

1. Planteamiento del problema

1.1 Hechos

1.1.1 Génesis del conflicto armado en Sucre.

La configuración del conflicto armado en los Montes de María se basó, principalmente, en la tenencia de la tierra y el control sobre las vías de acceso de la zona, en torno de lo cual se agruparon diferentes grupos armados ilegales en esta región, tanto de guerrillas como de paramilitares. Entre estas, se incluyen las FARC–EP, el ELN, el EPL, las AUC y el ERP (disidencia del ELN).

Aunque la zona, siempre, ha presentado algún tipo de violencia, antes del conflicto, esta violencia se limitaba a formas de delincuencia común y a disputas entre los pobladores (Duncan, 2006, citado en Cubillos y De la Ossa, 2012). En las décadas de los sesenta y los setenta, a raíz de la expansión de las haciendas y el sistema latifundista, comenzaron las tensiones en torno al control de la tierra, lo cual fue un factor importante en la consolidación del conflicto armado.

En la década de los ochenta, se dieron los primeros atisbos de presencia guerrillera y paramilitar en la región. Para esta época, se había dado la desmovilización del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Movimiento de Renovación Socialista, de los

cuales algunos miembros, por el incumplimiento de acuerdos por parte del Estado, se unieron con grupos armados que incursionarían luego en la zona (Cubillos y De la Ossa, 2012).

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contaban con presencia en la zona durante esta década con el Frente 35, cuyo accionar se concentraba en el departamento de Sucre, al mando de alias ‘Martín Caballero’. En este mismo periodo, en 1989, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) incursionó en los Montes de María por vía del departamento de Sucre (Narváez, 2018) por medio del frente Jaime Bateman Cayón, “conformado por 130 guerrilleros aproximadamente” (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario [DIH], 2003, p. 5), y el frente Alfredo Gómez Quiñones, los cuales aprovecharon el vacío que dejó el PRT luego de su desmovilización (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2014).

Es de destacar la presencia del Ejército Popular de Liberación (EPL) en la región. En un comienzo, en la década de los sesenta, con la colaboración de algunas organizaciones locales, cometió acciones de limitado alcance en la región para así desestabilizar la institucionalidad de la zona (Narváez, 2018). Este grupo se comenzó a retirar con la desmovilización del grueso del EPL en 1991, consecuencia de las negociaciones de paz con el Gobierno nacional. Ciertas disidencias han permanecido en los Montes de María, posteriormente; sin embargo, ha ido decreciendo en número y en influencia. Cabe resaltar que, por medio de estas negociaciones, el Estado les abrió una posibilidad a los dos grupos mencionados anteriormente—las FARC y el ELN—“no por su precariedad ni por su debilidad (...) sino por todo lo contrario: por su éxito (...) y por el logro, poco reconocido, de haber llevado a la mesa de negociaciones, y a la paz, al EPL” (Salazar y

Castillo, 2001, p. 10). Estos grupos aprovecharon, tanto esta situación, como la baja presencia del Estado en la región, para consolidarse (Garzón y Valencia, 2018).

Dicho estado de cosas se mantuvo relativamente estable y, de hecho, hubo una baja incidencia de las acciones de estos grupos guerrilleros desde 1992 hasta 1995. En esta época, por disputas internas dentro del ELN, se formó la disidencia denominada el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el cual no tiene la misma capacidad militar que el ELN y, poco a poco, se debilitó hasta su desintegración (Narváez, 2018).

1.1.2 Génesis del paramilitarismo en el Caribe.

En 1996, hubo un aumento considerable de las acciones de estos grupos y, además, incursionó el paramilitarismo en la zona, en este mismo año, con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales entraron en disputa con las FARC en una confrontación que resultó en afectaciones para la población civil (Narváez, 2018).

El fenómeno del paramilitarismo, sin embargo, no aparece con la incursión de la AUC, ya que tenía presencia en la región desde los ochenta. En este periodo, aparecieron los primeros grupos, los cuales buscaron la confianza de la élite política de la región, cuyos miembros “en su afán de resistir a los cambios democráticos en el nivel nacional y a los intentos de negociación con las guerrillas, también [tuvieron] necesidad de apoyarse en el actor armado ilegal” (Valencia, 2007, p. 12), y de los hacendados, que buscaban combatir a los grupos locales dedicados a la delincuencia

común (Garzón y Valencia, 2018). Esta situación se vio exacerbada con la implementación del Decreto Ley 356 de 1994, el cual sancionó la creación de grupos de seguridad privada (Convivir), y la contratación de estos grupos por partes de grandes empresas con intereses de inversión en la región de los Montes de María (Garzón y Valencia, 2018).

1.1.3 Historia de las AUC en la región.

Estos hechos sirvieron de trasfondo para la aparición de las AUC en la región (por medio del Bloque Héroes de Montes de María), cuya consolidación—hacia el año 2000—y pugna contra las FARC provocaron un recrudecimiento del conflicto (Narváez, 2018).

Posteriormente, por los avances de las Fuerzas Militares en la región y la negociación con el Gobierno, las estructuras de las AUC se desmovilizaron en 2005. La acción de la fuerza pública en esta región evitó que se expandiera de forma notable el poderío de las guerrillas, las cuales asediaba de forma constante. En medio de estas conflagraciones, en el 2007, cayó muerto alias ‘Martín Caballero’—cabecilla del Frente 37 en los Montes de María—como resultado de la Operación Alcatraz; lo anterior logró el retiro progresivo de las FARC de esta zona, el abandono del ELN de la región y una mayor presencia del Estado en el territorio (Narváez, 2018).

Desde el 2010, no se ha detectado presencia de las FARC, gracias a las negociaciones de paz entre esta guerrilla y el Gobierno nacional.

1.1.4 Conflicto por tenencia de tierras en el departamento.

Como ya se indicó, un factor de interés en la región era la tenencia de la tierra, lo cual se evidenció en las primeras luchas entre los campesinos y los hacendados; posteriormente, la región cobró interés para los grupos armados ilegales por el narcotráfico. Esta zona tiene acceso al golfo de Morrosquillo, desde el cual se logra transportar cocaína hasta otros países del Caribe, como Panamá y Nicaragua (Cubillos y De la Ossa, 2012). El dominio del narcotráfico en la región lo ejercieron, primero, los grupos paramilitares que aunaron fuerzas con los grandes terratenientes de la zona. Por medio de estos, lograron adquirir parcelas de tierras en municipios como San Onofre y Tolú Viejo.

Las disputas entre paramilitares y guerrilleros, más allá de basarse en lo ideológico, tuvieron una base importante en el control sobre la zona y de los corredores naturales. Esta búsqueda de la tenencia de la tierra, aunado con las diferentes acciones de los grupos armados (masacres, asesinatos) y con la intimidación de la población civil, provocó un abandono masivo de las tierras y el desplazamiento forzado en masa de personas (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2017), y el despojo de las tierras por parte de estos grupos.

Para ilustrar las diferentes consecuencias de este conflicto, se mencionan algunas cifras relevantes: entre 1987 y 1997, el 2,5 % de los secuestros cometidos en el país tomaron lugar en el departamento de Sucre, el cual se ubica entre los trece departamentos en los que se dieron más secuestros en este periodo de tiempo. En este departamento, la tasa de secuestros sobrepasó el promedio nacional. La región de los Montes de María concentra el mayor número de municipios

afectados por los secuestros y, entre 1993 y 1995, Sincelejo y Tolú Viejo registraron índices superiores al promedio nacional (Echandía, 1998).

Por otro lado, en cuanto al despojo de tierras, hay datos que muestran que, entre 2011 y 2017, se presentaron 307 solicitudes de restitución de tierras en Tolú Viejo y 154 en Sincelejo durante el mismo periodo (Garzón y Valencia, 2018).

1.1.5 Fenómeno de desplazamiento armado en la zona.

Estas circunstancias han provocado que Sucre haya sido uno de los departamentos más afectados por el conflicto interno, lo cual ha provocado un fenómeno de desplazamiento forzado masivo. Este desplazamiento sirve muchas veces a los intereses de los grupos armados, ya que “el desplazamiento constituye con frecuencia un medio para adquirir tierras en beneficio de los grandes terratenientes, narcotraficantes y empresas privadas que desarrollan proyectos en gran escala para la explotación de los recursos naturales” (Navarro, 2008, p. 51).

En efecto, en el periodo comprendido entre 1996 y 2005, 71 407 personas fueron desplazados de los diferentes municipios de Sucre, mientras que este departamento recibió 106 451 desplazados de otras partes del país en el mismo período. En ambos casos, la mayor parte de estos grupos de víctimas del desplazamiento forzado llegan a la capital del departamento, Sincelejo (Navarro, 2008).

El mayor número de población desplazada se presenta en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2002. A partir de este último año, las tasas de desplazados bajan hasta un 75 % (Navarro, 2008). Las altas cifras registradas entre 2000 y 2002 se habrían relacionado con las tasas de homicidio durante este periodo y con el número de masacres cometidos por los diferentes grupos armados presentes en la zona (Observatorio del Programa Presidencial de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario [DIH], 2004). Es de notar, sin embargo, que, a pesar de esta disminución en las tasas de desplazamientos forzados, aún continuó presentándose un preocupante número de desplazados individuales (Navarro, 2008).

1.1.6 Los jóvenes afectados.

En la Ley 1448 de 2011, se garantiza el “derecho [de las víctimas del conflicto] a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional” (art. 28). En este sentido, el *retorno* está inherentemente relacionado con el conflicto armado y se puede definir

En primer lugar, como un componente dentro del proceso de restitución, en la medida en que busca restituir a las víctimas a una situación similar a la existente, previa ocurrencia de los hechos [del conflicto]. Esto significa que el retorno es un proceso que contribuye a la reparación de las víctimas [...]. En segundo lugar, el proceso de retorno se ve como una

solución duradera [..., lo cual] no implica que los hogares consideren que el desplazamiento ha finalizado, lo que sugiere es que la cesación del desplazamiento forzado se valore en términos de condiciones y procesos. (Acosta, 2016, p. 18)

Por lo tanto, no es adecuado concebir el retorno como un resultado final y determinante de un proceso, sino como un componente de dicho proceso. En este sentido, cualquier estudio y propuesta sobre el retorno ha de tener en cuenta que las situaciones particulares son susceptibles de cambio y los actores implicados aún se encuentran en un estado de transición.

En la región de los Montes de María, los procesos de retorno y reubicación han provocado que la población en esta situación entre en una relación de cercanía con el Estado y se logre una participación amplia desde ambos sectores (Hernández, 2010), lo cual no significa que sea un hecho positivo ni que exista confianza plena en las instituciones estatales.

Adicionalmente, con base en las cifras del Registro Único de Víctimas (RUV, 2018), las víctimas registradas en el municipio de Tolú Viejo, en comparación con el número de víctimas de todo el departamento de Sucre, corresponde al 6,34 %, mientras que a nivel nacional este municipio tiene el 0,21 % de víctimas. En cuanto al municipio de Sincelejo, se registran 4,9 % de víctimas en comparación con el total de víctimas del departamento. Finalmente, en comparación con el total nacional de víctimas registradas, Sincelejo representa sólo el 0,16%.

En el 2014, la Unidad Nacional de Víctimas indicó que, en Tolú Viejo, se habían recibido un total de 1253 solicitudes de registro e identificación de víctimas. En total, un total de 8113 personas se han declarado como víctimas en Tolú Viejo. El segundo mayor grupo etario registrado

en estas solicitudes es el de los jóvenes, i.e., las personas entre 14 y 26 años. Según el Plan de Desarrollo Municipal de Tolú Viejo (2016), en total, este grupo está conformado por 1880 personas, el 19,78 %. Es de notar, sin embargo, que, en cuanto a la población víctima de este municipio, no hay una caracterización plena aún.

Ahora bien, en lo que respecta a los procesos de retorno, según el Plan de Desarrollo de Tolú Viejo (2016), entre el 2000 y el 2003, 7898 personas en zona urbana y zona rural abandonaron el municipio por la presencia de grupos paramilitares. Sin embargo, según cifras de la Red Nacional de Información (RNI, 2018) cuyos datos se empezaron a recolectar desde el 2014, sólo 176 personas han retornado. Entre las razones para no retornar, está el inicio de una vida en otro lugar, la recaída emocional a causa del desplazamiento, la inseguridad y la delincuencia común, la poca acogida de sus antiguos vecinos, y las dificultades económicas. Sin embargo, según el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 de Tolú Viejo (2016), “en la actualidad no existe una caracterización de la población víctima en el Municipio” (p. 73).

En Sincelejo, según el Plan de Desarrollo Municipal (2016), más de la mitad de la población es víctima del conflicto armado: 165 742, lo cual representa el 57,7 % de la población de la ciudad. De estos, hay 32 471 víctimas del conflicto armado que se encuentran entre las edades de 18 y 28. En este municipio, como en Tolú Viejo, los jóvenes componen el segundo grupo más numeroso de víctimas del conflicto armado interno.

En el momento en que se realizó este estudio, no se hallaron datos concretos acerca de la población víctima en situación de retorno general en Sincelejo, ni en los documentos del municipio ni en la Red Nacional de Información (RNI).

Ninguno de los dos municipios cuenta con un plan de atención para las víctimas de carácter diferenciado con respecto a esta población; esto se debe, en gran parte, a que el grueso de la población en situación de retorno no se ha caracterizado aún. La población de víctimas jóvenes en situación de retorno es de especial interés, ya que, cuando los jóvenes se trasladan a sus territorios originarios, lo suelen hacer con un pensamiento transformado, “lo hacen con un universo sociocultural e identitario que conjuga lo aprendido en los lugares de asentamiento temporal, con la tradición inculcada por sus padres” (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2015, p. 449). La misma situación de retorno genera una influencia en el modo en el que los jóvenes perciben el futuro (Bonilla, 2015) a partir de su pasado.

Con base en lo anterior, este trabajo aportaría datos para caracterizar a la población entre 18 y 28 años víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado en Tolú Viejo, algo que posibilita conocer los motivos por los cuales no vuelven a sus sitios de origen ni acuden a instituciones que aseguren su reubicación, aunque se dispongan de todas las garantías para que esto se dé.

1.2. Pregunta problema

¿Cuál es la correlación entre los factores de disposición frente al conflicto y de capital social en los procesos de retorno y/o reubicación de jóvenes víctimas del conflicto armado de Tolú Viejo y Sincelejo, Sucre?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general.

Establecer la correlación entre los factores de disposición social frente al conflicto armado y los de capital social en jóvenes víctimas en situación de retorno y/o reubicación

1.3.2. Objetivos específicos.

- Caracterizar los factores de disposición social frente al conflicto armado en jóvenes víctimas del conflicto armado en situación de retorno y/o reubicación
- Caracterizar los factores de capital social actual en jóvenes víctimas del conflicto armado en situación de retorno y/o reubicación
- Establecer el modo en el cual los factores de disposición social se pueden correlacionar con los factores de capital social

2. Justificación

El conflicto armado vivido en el territorio colombiano tuvo lugar por falencias, tanto del Estado, como de la misma población; por ello, es necesario analizar los factores detonantes de esta problemática y las consecuencias que esto produjo en la sociedad en términos de desplazamiento y retorno. Así las cosas, se hace necesario medir el capital social porque, sólo en la medida en que las víctimas construyan relaciones verticales—refiriéndose a personas entre grupos vulnerables y con mayor poder adquisitivo—existen mayores probabilidades de sobreponerse a la pobreza y a las condiciones precarias en las que viven (Caicedo, 2011).

Al respecto, es necesario precisar—como ya se mencionó en el párrafo anterior—que, para evaluar el capital social en el marco del conflicto armado, la medida de desigualdad (coeficiente de Gini) se convierte en una variable a tener en cuenta, ya que un mayor poder adquisitivo puede garantizar que la inequidad no sea un factor determinante para las víctimas durante el conflicto e indica que pueden tener más posibilidades de sobreponerse a este. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018), en la región Caribe, se registra un coeficiente de Gini (medida de desigualdad económica vertical) de 0,457 en el 2017, en comparación con un coeficiente de 0,508 a nivel nacional. Así las cosas, este estado de desigualdad puede generar un estado de rezago en los habitantes, por el cual les es difícil acceder a atención social y mejores oportunidades, algo que tiene estrecha relación con el conflicto armado.

Ahora bien, en lo que respecta a los procesos de retorno de jóvenes entre 18 y 28 años, se tienen los siguientes datos de la RNI (2018): en el 2010, sólo un joven estaba en proceso de retorno y 41 se encuentran en el Registro Único de Víctimas (RUV); en el 2013, un joven estaba en proceso de retorno y 17 se encontraban en el RUV; en el 2014, dos jóvenes estaban en proceso de retorno y 23 estaban en el RUV y, finalmente, en el 2016, un único joven estaba en proceso de retorno y 26 se encontraban en el RUV.

Entre las razones para no retornar están el inicio de una vida en otro lugar, la recaída emocional a causa del desplazamiento, la inseguridad y la delincuencia común, la poca acogida de sus antiguos vecinos, y las dificultades económicas. Sin embargo, según el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 de Tolú Viejo (2016), “(...) en la actualidad no existe una caracterización de la población víctima en el Municipio” (p. 73).

Con base en lo anterior, este trabajo aportaría datos para caracterizar a la población entre 18 y 28 años víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado en Tolú Viejo, algo que posibilita conocer los motivos por los cuales no vuelven a sus sitios de origen ni acuden a instituciones que aseguren su reubicación, aunque se dispongan de todas las garantías para que esto se dé.

En el caso de Sincelejo—de acuerdo con los datos de la RNI (2018)—en el 2010, sólo dos jóvenes entre 18 y 28 años estaban en proceso de retorno y 36 se encontraban registrados como víctimas de desplazamiento forzado; en el 2011, cuatro jóvenes estaban en proceso de retorno y 49 estaban en el RUV; en el 2012 retornó un joven y 44 estaba registrados; en el 2013 cinco

estaban en proceso de retorno y 56 aparecían en el RUV y, finalmente, a 2016, sólo un joven retornó y 94 se encontraban en proceso de retorno.

A partir de los datos anteriores, se considera que el conocimiento de la situación y el reconocimiento de los parámetros en los cuales el capital social se aleja de lo deseado permitirán establecer vías de acción en aras de mejoramiento de relaciones sociales en la región.

En el mismo sentido, es necesario evaluar la disposición frente al conflicto armado y las secuelas psicológicas en los afectados. Por ejemplo, en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado *Una nación desplazada. Informe nacional del desplazamiento forzado* (2015), un hombre que vivió el conflicto siendo un niño dice lo siguiente: “bueno, yo perdí tanto, perdí desde 12 a 21, 9 año, se pierde mucho. Yo pienso que en lo familiar uno pierde mucho” (p. 385). Además, se ha afirmado que situaciones como “(...) el secuestro, la pérdida de los padres y el desplazamiento, entre otras (...) han atentado contra su seguridad, estabilidad mental y emocional” (Hewitt et al., 2016). Igualmente, se han observado “(...) procesos de pérdidas dolorosas, ruptura con la red de apoyo social y el sentido de pertenencia a un territorio, esto sumado a los recuerdos de la crueldad de la violencia y el terror de lo vivido” (Villegas, 2011, p. 32).

Estos hechos, además de provocar que los individuos no vean con objetividad la realidad en la que están inmersos, pueden igualmente avocarlos a no observarse a sí mismos (Martín-Baró, 1988), lo cual ocasiona que el capital social no tenga unos buenos indicios.

Ahora bien, en lo que respecta al proceso de reubicación, las familias deben adecuarse a la nueva estructura de su hogar, dado que, en muchos casos, falta el padre, la madre o ambos. En este tipo de situaciones, puede suceder que “[...] es mamá quien debe ir a buscar la comida, mientras

los hijos puede que vayan o no a estudiar, porque tal vez deban ayudar con la economía del hogar” (Henaó, Martínez y Martínez, 2017, p. 61).

Por lo anterior, es necesario conocer las percepciones que detentan los jóvenes de la región bajo estudio, con el fin de determinar la calidad de capital social de la sociedad respecto a las entidades nacionales y territoriales que se encargan de las situaciones de retorno y reubicación. Con base en estudios sobre capital social como el de Forni y Nardone (2007) en Buenos Aires, López (2012) en Nicaragua y Sudarsky (2007) en Colombia, se puede afirmar que los datos que se obtienen al estudiar el capital social permiten establecer políticas públicas en ámbitos como la educación y la economía, así como en la relación entre los ciudadanos y los entes gubernamentales. Por esto, estudios como el que se realiza en este trabajo aportan datos importantes a tener en cuenta por las entidades estatales y privadas.

A modo de breve esbozo en este apartado, nos encontramos con un estudio de caso realizado por Lunecke y Ruiz (2006, citados en Echeverri, Meneses, Restrepo y Marín, 2014) en el que se habla de la relación entre violencia, vulnerabilidad y capital social, y se identifica que, en barrios donde habitan jóvenes con estas problemáticas, se produce un debilitamiento del capital social comunitario. De ese estudio, se derivan elementos que permiten llegar a un análisis comprensivo de la situación con miras a producir un proceso de transformación social.

El aporte de este estudio será, en primer lugar, identificar los elementos personales y colectivos de los jóvenes entre 18 y 30 años que se deben trabajar para lograr la retorno, y la reubicación a sus territorios de origen. Además, estos datos permitirán establecer estrategias de enseñanza que estén dirigidas, espacialmente, a aquellos que han sido objeto de violación de

derechos humanos y establecer procesos de reparación psicosocial que, además del beneficio que esto conlleva para cada víctima, permiten acrecentar el capital social de las regiones afectadas por el conflicto armado.

Sumado a lo anterior, se podrán realizar ejercicios que involucren a la comunidad con el fin de restablecer relaciones civiles, sin perder de vista los procesos de reparación que promueven la convivencia pacífica y la integración de los actores involucrados en el conflicto (Bueno, 2006). Además, se contribuirá a ampliar el conocimiento que se tiene sobre la disposición frente al conflicto armado y la reinserción a la vida civil, con el fin de fomentar el fortalecimiento de las instituciones, los bienes públicos y la sociedad civil (Guerra y Plata, 2005).

A nivel educativo, con los resultados que aporta este estudio, es posible realizar proyectos educativos que tengan como foco el posacuerdo y el posconflicto, y que estén fundamentados en la experiencia de los jóvenes que contribuyeron en este proyecto de investigación, todo esto con el fin de realizar procesos de reconciliación social y de incremento del capital social.

Por otro lado, este estudio aportará elementos conceptuales y teóricos sobre los factores que afectan el retorno y la reubicación a los lugares de origen en el marco del conflicto armado, lo cual permitirá ampliar el conocimiento sobre la manera en que la sociedad modifica sus prácticas cotidianas, su relación con el territorio, sus núcleos familiares y su relación con las entidades estatales y territoriales en el marco del conflicto armado. De hecho, en lo que respecta al retorno y a la reubicación, sólo se cuenta con las cifras del RUV y de la RNI, pero no se hallaron estudios sobre el retorno y la reubicación de jóvenes entre 18 y 30 años a los municipios de Sincelejo y Tolú Viejo ni análisis de los datos disponibles con lo que se pueda caracterizar y conocer este

fenómeno. En este sentido, al identificar esta ausencia de estudios, este proyecto contribuye al análisis y la comprensión del retorno, dado que se trata de situaciones que, en el marco de posacuerdo, deben contar con estrategias y mecanismo diferentes, con herramientas de intervención y un enfoque diferencial que permita comprender la situación de cada población.

2.1. Estado del arte

2.2. Capital social.

Para reconocer y clarificar la relación existente entre el capital social y los jóvenes analizados en la presente investigación es importante observar qué otros estudios e investigaciones se han realizado, bien sobre el capital social y su relación en otros ámbitos, o bien sobre el capital social y las relaciones que se tejen entre poblaciones marcadas por el conflicto. La primera definición sobre este concepto fue la entregada por el economista estadounidense Lyda Hanifan: En su artículo sobre la comunidad rural escolar, afirma que el capital social se puede entender como

[...] esas sustancias tangibles con que cuentan la mayoría de las personas en la vida diaria, es decir, la buena voluntad, el compañerismo, la simpatía mutua y las relaciones sociales entre un grupo de individuos y familias que forman una unidad social [...] En la

construcción de la comunidad, así como en la organización empresarial debe haber una acumulación de capital de un gran número de personas. (Hanifan, 1916, p. 130, traducción propia).

Evidentemente, este concepto se ha explicado, desde sus inicios, como las relaciones que se establecen formando una unidad social entre sus miembros. Además, se plantea que la acumulación de capital va ligada con la cantidad de personas relacionadas en las redes constituidas.

En ese sentido, Pierre Bourdieu reflexionó sobre el término y definió el capital social de la siguiente forma:

[...] un conjunto de recursos que están vinculados a la tenencia de una red duradera de vínculos que pueden o no estar en relaciones institucionalizadas de interconocimiento y de interreconocimiento, o, en otras palabras, con la pertenencia a un grupo [...] Esas relaciones pueden existir solo como prácticas, en intercambios materiales y/o simbólicos que ayudan a que se mantengan. También, pueden ser instituidas socialmente y garantizadas por la aplicación de un nombre común (familia, clase, tribu, escuela, fiesta, etc.). (Bourdieu, 1986, pp. 248-249, traducción propia).

Allí se establece la pertenencia a un grupo y la clase de relaciones sociales que pueden existir. Ese planteamiento deja en claro la clasificación de redes que se pueden establecer y que no

solo se dan en un sentido básico de un intercambio, hay otras interacciones que contribuyen al capital social.

Del estudio de las definiciones presentadas y de la aplicación de ese concepto, se entiende el capital social como “una serie de recursos disponibles para los individuos derivados de su participación en redes sociales” (García-Valdecasas, 2011, p. 137).

Estas definiciones dejan un punto de partida que nos permite delimitar una serie de trabajos que han evaluado y revisado el capital social en diversas poblaciones.

Un estudio realizado por Portela y Neira (2002) sobre el capital social en España arroja algunas cuestiones interesantes y de gran aporte para la presente tesis. Primero, allí se revisa la confianza como uno de los ejes principales en la medición del capital social: “Son numerosos los estudios que demuestran que un alto grado de confianza social reduce los costes de cualquier tipo de transacción y facilita el flujo de información” (Portela y Neira, 2002, p. 34). Este planteamiento es de gran importancia, puesto que, al tratar con personas afectadas por conflicto armado, se evidencia que pueden presentar daño social como polarización, desconfianza, ruptura de redes, entre otros (Villagrán, 2016). Por otro lado, en dicho estudio, se habla de la confianza en instituciones legales, gubernamentales y sociales, y la diferencia establecida entre España y Europa, pero no se habla a gran escala de la confianza entre unos y otros como individuos.

Esto último permite reflexionar sobre la importancia del análisis del capital social de manera contextualizada, es decir, lo que para algunos países puede ser irrelevante o poco importante, para otros es de gran relevancia. Por ejemplo, en el caso de Colombia, resulta de gran importancia preguntar y hablar sobre la confianza en algunos pobladores de la misma zona afectada

por el conflicto o en las personas reinsertadas, que en algún momento pertenecieron a un grupo ilegal. Esto se presenta como una reflexión pertinente para realizar el análisis.

En el ámbito latinoamericano se encuentran diversos estudios. Uno de ellos es el titulado *¿Qué es el Capital Social y cómo analizarlo en contextos de exclusión social y pobreza? Estudios de Caso en Buenos Aires, Argentina*. En él, Forni, Siles y Barreiro (2004) presentan un matiz interesante, puesto que se limita a zonas de vulnerabilidad de Buenos Aires y ofrece una reflexión importante sobre algunas condiciones que podrían presentarse en el análisis planteado en este documento. Es necesario tener en cuenta que, aunque este ejercicio propone un estudio a víctimas de conflicto armado en Sucre, esa noción de víctimas debe entenderse como lo proponen Varela y Godoy (2018):

Víctima, socialmente, se entiende como una decisión o posicionamiento subjetivo que cada persona toma como respuesta a alguna situación que ha atravesado, y que, a partir de esta nominación del propio sujeto desvinculado, se podría comprender y resignificar la forma de afrontar el proceso de retorno a la vida civil. (p. 5)

La definición presentada anteriormente tiene en cuenta que, cuando una persona deja de ser afectada por una mala situación y quiere retornar a un estado habitual beneficioso, ello trae consigo la sensación de exclusión, de no formar parte de un grupo social, de la zona donde vive o de sentirse apartado por el resto de la población.

Lo que presenta el estudio realizado por Forni et al. (2004) es la relación entre diversos tópicos o temas cruciales para comprender cómo se construye el capital social en personas bajo exclusión social o pobreza. Por ejemplo, se establece la importancia de hablar de redes sociales, apoyo social, reciprocidad y confianza local, y compromiso cívico, debido a que, aunque en los estudios de capital social se tienen en cuenta estas variables, no resultan de gran importancia para los investigadores. Respecto a la importancia de esas variables, afirman: “La conjugación de los aportes teóricos presentados aquí, nos permite comprender y abordar el análisis del capital social en contextos de exclusión al nivel de la complejidad que esta tarea advierte” (Forni et al., 2004, p. 14).

En Nicaragua, se llevó a cabo un estudio de análisis denominado *El capital social en la resolución de conflictos y creación de desarrollo: el caso nicaragüense* (López, 2012), caso en el que, además de realizarse una revisión teórica y un estudio específico al respecto, se formula de forma crítica cómo la medición de capital social puede contribuir a la realización de proyectos para mejorar las condiciones de la población. En ese estudio, se plantea que los vínculos sociales favorecen el incremento de la cohesión social y el intercambio de recursos materiales e inmateriales; cuando esas dos variables se ven favorecidas por el capital social, se puede trabajar en resolución de conflictos y en la mejora de los niveles de desarrollo (López, 2012). Ese trabajo es de gran relevancia, porque se enfoca en el capital social en pro de la comunidad; plantea un contexto similar al de Colombia: una población que ha padecido conflicto armado interno y con niveles de desigualdad muy grande. Por último, ofrece una reflexión sobre el trasfondo que debe tener la medición del capital social: ir más allá y buscar soluciones. Sin lugar a dudas, es uno de los trabajos que más se acerca a la situación y al contexto colombiano.

2.2.1. Barómetro de Capital Social (BARCAS).

Indagar por este instrumento es casi que referirnos exclusivamente a Colombia. Las herramientas para medir el capital social son diferentes en otros países.

Banco Mundial	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	Encuesta Mundial de Valores	Reino Unido	Estados Unidos
<ul style="list-style-type: none">•Herramientas de medición del capital social (SOCAT)•Perfil y mapeo de Activos Comunitarios•Cuestionario Comunitario•Cuestionario de Hogares•Guías para la Entrevista de Perfil Organizacional•Encuesta integrada de capital social (SOCAP-IQ)•Grupos y Redes•Confianza y Solidaridad•Acción Colectiva y Cooperación•Información y Comunicación•Cohesión Social e Inclusión•Empoderamiento y Acción Política	<ul style="list-style-type: none">•Iniciativa de Capital Social: Focalizada en países desarrollados•Participación cívica•Redes sociales y apoyo•Participación social•Reciprocidad y confianza•Visiones sobre el área de residencia.	<ul style="list-style-type: none">•Realizada en 65 países•Confianza entre individuos y hacia las instituciones•Membresía en organizaciones civiles•Asociaciones•Voluntariado•Uso del tiempo dedicado a la familia y a los amigos	<ul style="list-style-type: none">•Encuesta Social: Oficina Nacional de Estadística (ONS)•Participación y Compromiso Social•Percepciones relativas al medio de vida;•Interacciones sociales, Redes sociales y apoyo social y Confianza,•Reciprocidad y cohesión social.	<ul style="list-style-type: none">•Seminario Saguario: Putnam•Confianza (social e inter-Racial)•Diversidad de amistades•Participación política (convencional y en protestas)•Liderazgo cívico e involucramiento en asociaciones•Socialización Informal, Donaciones y Voluntariado•Compromiso basado en la Fe•Igualdad del compromiso cívico entre la comunidad

Figura 1. Medición de capital social en el mundo. Tomada de: Amaya (2015, p.8).

En la Figura 1, se observan cinco herramientas diferentes con las que el capital social es medido en el mundo. Hay algunas, como la del Banco Mundial, que son integradas por dos o más herramientas. Las que son de una sola herramienta son la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) usada como se observa en la figura, en países desarrollados o

la Encuesta Mundial de Valores (EMV) realizada en los cinco continentes y en algunos países de cada uno. Luego se encuentran las herramientas usadas por dos países en específico: Estados Unidos y Reino Unido.

2.2.1.1 Barómetro de Capital Social en Colombia.

Encontrar información sobre mediciones realizadas con el BARCAS resulta complejo, puesto que todas las referencias encontradas apuntan a Colombia. Sin embargo, en el país también se usan herramientas de la Figura 1; tal es el caso de la EMV. Vale la pena revisar todos los estudios realizados con el BARCAS en Colombia y, así, estudiar qué resultados ha arrojado y la importancia de ellos para el presente análisis.

El Barómetro de Capital Social (BARCAS) fue creado en los años 1995-1997, años en los que se hizo su primera aplicación. A partir de esa primera medición, se hicieron otras tres: una en 2005, otra en 2011, y la más reciente, realizada en el mes de octubre de 2018. A continuación, se realiza una síntesis sobre cada medición, esto con el fin de evaluar su alcance, los cambios que han presentado y el aporte de dichas mediciones para el análisis que acá se plantea. La última medición no será tomada en cuenta puesto que se encuentra sobre el tiempo establecido para la realización del presente análisis.

2.2.1.2 BARCAS 1997, 2005 y 2011.

En la medición del año 1997, se realizó la primera aplicación de la herramienta. Previamente se había realizado un *pretest* más sencillo y que incluía menor muestra poblacional; de allí, se derivó el instrumento final que tomó como referencia algunos aspectos de la EMV y se crearon nuevos ítems para la medición en la sociedad colombiana. Sudarsky (2007) determina, en la medición de 1997, la confianza interpersonal y la corrupción como elementos principales y sujetos a comparación de la medición de capital social en Colombia. “Colombia era baja en confianza (9% confía en los demás) y alta percepción de la corrupción (7,3 en promedio de una escala de uno a diez)” (Sudarsky, 2007, p. 28). Para la presente tesis, resulta de gran importancia la relación y medición sobre la confianza, puesto que es un factor que, además de ser fundamental para el capital social, es uno de los que se ve afectado en poblaciones que han vivido situaciones de conflicto. De otro lado, la percepción de la corrupción, aunque no es un tema transversal en la presente tesis, puede manifestar algunas sensaciones y experiencias de los jóvenes estudiados y su confiabilidad en las instituciones del Estado.

Evidentemente, para Sudarsky (2007, p. 28), “se encontró que el Capital Social de Colombia estaba en un rango muy bajo”, lo cual lleva a pensar los resultados de las otras mediciones y genera dudas sobre lo que puede encontrarse en este análisis, ya que, al tratar una población específica, estos pueden cambiar respecto a la población completa; por ejemplo, puede que la medición de capital social en Colombia sea media alta y el estudio presente una medición baja; o puede ocurrir que sea una muestra de lo que sucede en el país: una medición nacional media o baja y que el análisis aquí presentado arroje lo mismo.

En lo que respecta a la medición del año 2005, se encuentra la inclusión de factores contextuales, cuyo análisis “enfatisa en la interacción entre logro, civismo y modernización como factores esenciales en la transformación de una sociedad comunal donde prevalecen relaciones naturales, individualismo, exclusión y conflicto” (Foliaco-Gamboa, 2013, p. 47).

A partir de la medición de ese año se reconoce y se expresa la realidad colombiana: vivimos en un país con conflicto y problemas de exclusión. Precisamente, el análisis de esos factores es lo que permitiría actividades para que el país se desarrolle y tenga mayor confiabilidad (Foliaco-Gamboa, 2013). De esa inclusión y del análisis realizado en ese año, se deriva lo siguiente: “Sucre es el área que más aumenta en Solidaridad y Mutualidad y Relaciones Horizontales a la vez que es la segunda que más cree en Participación Cívica y la tercera que más aumenta en Jerarquía y Medios” (Sudarsky, 2007, p. 257). Esa solidaridad y mutualidad se comprenden como la capacidad para recibir ayuda por parte de otros, a partir de la reciprocidad, sin caer en el oportunismo (Sudarsky, 2007), por lo que esa medición permite observar el desarrollo y avance en la región respecto a la realidad colombiana, que es, precisamente, lo que se buscó en ese año al añadir elementos contextuales; de otro lado, se expresa lo que, idealmente, un poblador de la zona viviría en su cotidianidad. Aunque es un rasgo importante, sería necesario ver lo que sucede con población afectada por desplazamiento y que no vive en su región de origen.

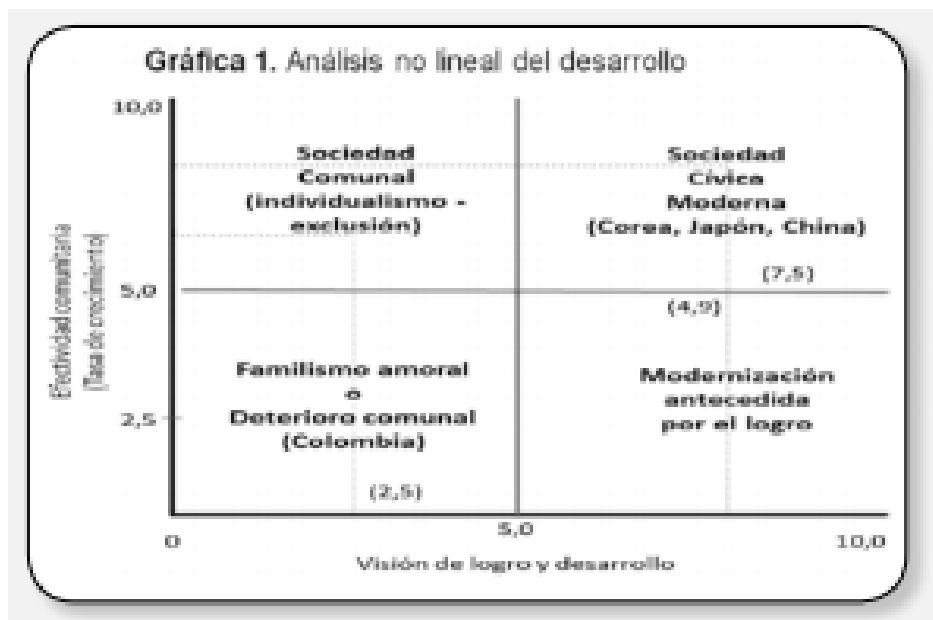


Figura 2. Análisis no lineal del desarrollo. Tomada de: Foliaco-Gamboa (2013, p. 47).

La medición del año 2011 presenta un apunte concreto sobre la relación entre la participación ciudadana y el bajo desarrollo económico de las regiones. En el caso de la región pacífica y atlántica, se encuentra alta participación ciudadana y bajo desarrollo económico en comparación con otras regiones (Foliaco-Gamboa, 2013). Esto quiere decir que, incluso, cuando los pobladores de una zona o región quieren y participan activamente de mecanismos ciudadanos que podrían mejorar su calidad de vida, ello no influye en el desarrollo económico de la región. En el presente análisis, se podría presentar a modo de hipótesis que varios jóvenes sean participantes ciudadanos, pero no quieran volver a sus regiones, debido al poco desarrollo económico de la región en contraste con la región en la que ahora residen. Esto sería respuesta a lo mismo que se encontró en la medición de 2011: alto grado de corrupción, con una medición del

7,4 % (Foliaco-Gamboa, 2013). Esa sería otra de las percepciones que se tiene sobre el manejo de los recursos en el país y que puede influir en las percepciones de la población estudiada en el presente documento.

2.2.1.3. BARCAS en población bajo situación de conflicto.

En Colombia, se hallan dos estudios relacionados con conflicto armado que incluyen el capital social: uno en Barranquilla y el otro en Bogotá. El primero se llevó a cabo en población víctima de conflicto armado y población en situación de pobreza; en él, se hizo uso de diversos medidores de capital social, entre ellos el BARCAS. La población y el sitio de análisis fue la ciudad de Barranquilla. En esa investigación, se busca reconocer el bienestar y la felicidad del individuo en relación con las situaciones conflictivas o de pobreza que ha vivido (Cardozo, Cortés-Peña y Castro, 2018); de ahí, según el autor, la importancia de realizar el análisis. Dicho estudio, aunque relaciona capital social y salud mental, presenta ideas y tesis sobre el capital social: confianza, cooperación, solidaridad y los sucesos vividos por estas personas, y cómo ello se relaciona y afecta su diario vivir. Al respecto, Hurtado, García y Copete (2013) aseguran lo siguiente:

En un contexto de violencia y de pobreza extrema es evidente que tanto la salud mental como el capital social serán variables fuertemente afectadas por la vulnerabilidad generada

por estas condiciones, impactando la capacidad de las personas, grupos y comunidades de confiar en los otros y en las instituciones. (p. 240)

Es el aspecto de la confiabilidad lo que entra a revisar el capital social, de ahí la importancia de la interdisciplinariedad entre el capital social y los aspectos psicológicos que influyen en la calidad de vida, y en las relaciones sociales para, con base en ello, buscar posibles soluciones.

El segundo estudio de este apartado fue realizado en la ciudad de Bogotá y, en él, se revisó la acumulación de capital social en población desplazada. En este trabajo, se reconoce la importancia del BARCAS para la medición de capital social y la relación que, a partir de él, se pueda realizar con aspectos sociales. A este respecto, Méndez (2012, citado en Marciales, 2013) reconoce que el capital social permite cuantificar los niveles de confianza, lo que resulta fundamental cuando se trabaja con población víctima de conflicto, puesto que este es un tema clave e importante para su recuperación. Esa información permite determinar indicadores sobre los cuales actuar y se comprende de mejor forma la población en cuestión.

El estudio destaca el poco sesgo que puede tener el BARCAS y que, por el contrario, permite analizar cualquier tipo de población y establecer comparaciones entre varias de ellas (Marciales, 2013). Por otro lado, ofrece una serie de interrogantes sobre la acumulación de capital social en población vulnerable. Por ejemplo, plantea los siguientes interrogantes: ¿Cómo las situaciones hacen que el capital social vuelva a aumentar en situaciones violentas?, ¿qué mecanismos del Estado posibilitan la acumulación de capital social en población desplazada?

(Marciales, 2013). Dichas inquietudes pueden arrojar diversas reflexiones que pueden ser pertinentes para este documento.

2.3. Disposición psicosocial frente al conflicto

Para comprender este asunto, es necesario empezar a definir el aspecto psicosocial a nivel general y centrado en el conflicto armado. A partir de esas nociones, se revisan los estudios que incluyen ese aspecto y muestran la disposición que existe frente al conflicto. Posteriormente, se revisa el cuestionario de disposición psicosocial frente al conflicto armado para conocer las investigaciones que se han realizado teniendo en cuenta ese instrumento.

Respecto al aspecto psicosocial, este se vincula con hechos traumáticos, afirmación realizada por Freud y que, consecutivamente, Eric Erikson interpretó para develarlo. Para Erikson, el aspecto psicosocial se debe desarrollar en toda una teoría en la que sobresale la conexión entre lo individual y colectivo y en el que, de acuerdo a cada etapa, se establecen ajustes (Medina, Layne, Galeano y Lozada, 2007). Bajo esa perspectiva, se entiende el aspecto como la correlación entre lo subjetivo y lo colectivo. Es decir, si se toman como base los hechos traumáticos, esto repercute, tanto a nivel personal, como social.

De otro lado, en Latinoamérica, se habla del enfoque psicosocial para

[...] explicar y abordar la situación de las personas y comunidades enfrentadas a contextos de violencia [...] propiciando el replanteamiento de teorías desde las cuales se comprendían o explicaban los padecimientos emocionales que se generan en las víctimas, y que comúnmente se restringían a una mirada reduccionista o de clasificación en trastornos de acuerdo a determinados signos y síntomas identificados. (Anacona, 2014, p. 9).

Esta perspectiva, permite comprender y dimensionar la importancia del enfoque psicosocial en países que han sido atravesados por el conflicto. Así mismo, se reconoce el cambio de las teorías previamente manejadas y que solo introducían una visión física y limitada del trauma o daño que dejaba el conflicto.

Teniendo en cuenta las definiciones realizadas sobre el aspecto psicosocial, es pertinente resumirlas en la siguiente noción:

Lo psicosocial entonces, en su aspecto más básico de la composición morfológica del término, alude a ese espacio de encuentro entre lo subjetivo y lo colectivo, pero sin perder de vista la experiencia personal del sujeto. (Bello y Chaparro, 2010, p. 13).

Se establecen las relaciones entre lo que sucede a nivel personal y cómo, sin perder de vista esa afectación que dejó un hecho de violencia en el individuo, esto configura las relaciones sociales establecidas por el sujeto. Evidentemente, eso implica una disposición desde el punto de vista

psicosocial hacia el conflicto. Es decir, implica que hay un modo particular para responder o reaccionar luego del trauma.

Para aclarar las distinciones entre la disposición frente al conflicto y otros conceptos como impacto psicosocial frente al conflicto, es pertinente entender lo que se entiende como disposición frente al conflicto. Para Alzate et al. (2009), la disposición puede entenderse como la actitud que adopta la población ante la violencia, luego de lo sucedido. Esa actitud representa una orientación constructiva, rechazando la violencia o, por el contrario, escalando esa violencia e imponiéndose sobre el otro.

Teniendo en cuenta lo anterior, son pocos los estudios que tienen en cuenta plenamente la disposición psicosocial frente al conflicto. Sin embargo, hay un estudio que considera la actitud frente al conflicto en términos de estrategias de afrontamiento. Ese análisis fue realizado a población de un municipio lejano de una ciudad y que fue desplazada a causa del conflicto armado. Así mismo, su edad se encontraba entre los 10 y los 76 años de edad. En ese estudio, vale la pena destacar que el 85 % de la población manifiesta el sentimiento de que alguien pretende herirle o hacerle daño (Hewitt et al., 2016). Esto podría afectar, en última instancia, las redes y relaciones que establecen las víctimas de desplazamiento con otras personas. De allí, se derivaría una afectación en los aspectos de confianza que, como más adelante se observará, hacen parte importante del capital social.

2.3.1. Cuestionario de disposición psicosocial frente al conflicto.

Esta herramienta busca evaluar, a través de trece variables, algunos procesos psicosociales que enfrenta la población civil que ha estado expuesta al conflicto y cómo están dispuestos a la transformación constructiva de lo sucedido (Alzate et al., 2009).

Este instrumento fue creado en el marco de la realización de un proyecto de investigación, bajo el cual se analizaron las respuestas de 378 personas víctimas de conflicto y pertenecientes a diversas organizaciones (ONGs, juntas de acción comunal, asociaciones de estudiantes, etc.). El objetivo era estudiar la violencia en relación con variables de amenaza, confianza, actitud etnocéntrica, imposición autoritaria, entre otras. Lo arrojado por el estudio indica que está en cada persona la disposición que tiene frente al conflicto y que, para modificar las disposiciones no constructivas o negativas, es necesario cambiar la visión sobre lo sucedido y relacionarse con otros para conocer sus atributos positivos y para mejorar la perspectiva sobre las consecuencias del daño (Alzate et al., 2009).

Lo anterior manifiesta la importancia del adecuado establecimiento de redes sociales y de relaciones entre individuos o grupos. En esa medida, gran parte de la disposición y de la reconstrucción adecuada o no adecuada de lo sucedido se ven influenciadas por las relaciones que se logran establecer. De ahí, deriva la importancia de estudiar esos tejidos e interacciones sociales y cómo influyen la disposición y el adecuado proceso de reconstrucción del conflicto.

Para finalizar, es relevante hablar sobre la relación existente entre el Cuestionario de Disposición frente al Conflicto (CDPC) y el capital social. De la búsqueda realizada sobre estos dos elementos, no se presentan estudios. Es decir, no hay planteamientos que consideren el uso del

cuestionario relacionado con el capital social. No obstante, es necesario tener en cuenta que este instrumento es muy reciente y que no se ha planteado esa duda investigativa.

Sería de gran relevancia contar con antecedentes que hubieran vinculado la disposición frente al conflicto con el capital social. En esa medida, las variables de capital social podrían explicar que tan dispuestas están los sujetos a un cambio frente a lo ocurrido, y viceversa. Ahí radica la importancia del estudio presentado en este documento, puesto que relaciona dos aspectos importantes en la situación de jóvenes víctimas de desplazamiento a causa del conflicto armado: sus relaciones con otros y con las instituciones, definido por el BARCAS, y su disposición al cambio frente a la violencia, definido por el CPDC.

3. Marco teórico

Los conflictos armados alrededor del mundo han dejado a su paso poblaciones desplazadas, desestabilización social y económica de pueblos y regiones—bien dónde residen los afectados, o bien adónde llegan en casos de desplazamiento—, alteración en la salud mental y física de los afectados que experimentan sentimientos de desesperanza, odio e impotencia, o quedan con discapacidades por mutilaciones y torturas sufridas a manos de los perpetradores de la violencia. Colombia no ha sido la excepción. Ha vivido más de 50 años de violencia (o 70, para quienes ubican el inicio de la guerra en el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán). Actualmente, se lleva a cabo un proceso de paz que evidencia el esfuerzo del Estado y de los grupos armados de finalizar con el conflicto. En este escenario, las víctimas requieren el resarcimiento de lo vivido durante el conflicto; a este respecto, Acevedo y Rojas (2016) sostienen lo siguiente:

El acuerdo de paz permite que se superen las diferencias y la escalada de violencia que da origen al conflicto, al mismo tiempo se busca la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado, quienes han sufrido violaciones de derechos humanos y requieren ser reparadas a través de una justicia transicional. (p. 36)

En efecto, los procesos de justicia transicional buscan que sean reconocidos los derechos de las víctimas con el fin de lograr su incorporación a la sociedad para conformar comunidades que reflejen el mejoramiento de las condiciones de vida. Como lo explican las autoras,

En cuanto a la justicia transicional, se puede afirmar que es una concepción democrática de justicia cuya finalidad es analizar la forma como sociedades que son afectadas por actos violatorios de derechos humanos originados por una guerra civil, un conflicto violento o por regímenes dictatoriales, logran hacer tránsito a regímenes democráticos que garantizan estabilidad y paz en la sociedad (Morales, 2011, p.4). Así las cosas, la justicia transicional pretende equilibrar el tema de paz y justicia, a través del reconocimiento de derechos a las víctimas de crímenes atroces, como a la reparación y el logro de la verdad, y por otro lado que los responsables de estos crímenes dejen las armas y respondan por las violaciones realizadas. (Acevedo y Rojas, 2016, p. 37)

Sin embargo, para que dicho tránsito se dé de manera adecuada es necesario examinar, no sólo la situación vivida, sino la disposición de las víctimas frente al conflicto con el fin de determinar su posición en relación con los procesos de restitución y reparación que se llevan a cabo en el marco del proceso de paz, lo cual redundará en la calidad de capital social que entrará a engrosar la población de las regiones donde han ocurrido los hechos de violencia.

3.1. Contexto de violencia en Colombia y en el departamento de Sucre

El conflicto armado en Colombia, de carácter político y social, ha expuesto a la población de manera determinante a afectaciones del tejido social que generan directamente malestar social en la población. Sin embargo, existen diferentes mecanismos que el Estado ha planteado para poder conceptualizar y contextualizar el conflicto; uno de ellos es la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, la cual permite contextualizar el conflicto desde la perspectiva legal, y cuyo objeto especifica lo siguiente:

La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. (art. 1)

El conflicto armado en Colombia ha dejado un número importante de víctimas fatales; según el *Informe general* del Grupo de Memoria Histórica las muertes ascienden a 220 000, de las cuales el 81,5 % corresponde a la población civil y el 18,5 %, a combatientes nacionales (GMH,

2013). Los actores civiles se han visto enfrentados a torturas, secuestros, masacres, extorsiones, minas antipersonales, ataques a poblaciones, sabotajes, entre muchas otras formas de manifestaciones violentas. La violencia sistemática en Colombia se ha convertido en una problemática que afecta el tejido social, dado que deja de ser una acción aislada para estructurarse como una condición cotidiana de los habitantes (Moser, 1998, citado por Villagrán, 2016). Esta situación ha generado una crisis humanitaria de grandes proporciones, producto de procesos de desplazamiento de individuos y poblaciones enteras.

Por esta razón, Colombia se ha “convertido en el país con mayor número de desplazados internos a nivel mundial (...) y el octavo con mayor tasa de refugiados en otros países” (Villagrán, 2016, p. 39), en lo cual concuerdan instituciones como el Instituto de Derechos Humanos (INDH, 2011), el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC, 2017) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2011). Efectivamente, los actores enfrentados en el conflicto armado—Estado: Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional; grupos guerrilleros: FARC, ELN y EPL, entre otros; y grupos paramilitares—han generado un proceso de desplazamiento forzado, uno de los grandes flagelos que ha provocado pérdida de identidad regional y social, pues las víctimas deben abandonar sus bienes, propiedades y actividades habituales, y salir de su región en busca de lugares donde puedan preservar su vida, dadas las amenazas o vulneración a su integridad física que de manera directa o indirecta imponen los grupos mencionados. Así, ante este panorama desolador y violento las personas, sin importar etnia o condición económica, se ven obligados a huir ante la incertidumbre y el miedo que ocasionan las condiciones vivenciadas en su cotidianidad (Sánchez y Jaramillo, 1999; Palacio, Correa, Díaz y Jiménez, 2003, citados por Villagrán, 2016).

Además de los datos aportados sobre muertes resultantes del conflicto armado y situación de violencia, el periódico Portafolio referencia el RUV, el cual menciona que las víctimas del conflicto, a nivel nacional, ascienden a 8 376 463 y, de ellas, las víctimas de desplazamiento se elevan a 7 395 268 (Portafolio, abril de 2017). Los hechos victimizantes que más han ocurrido en Colombia, hasta la actualidad, son desplazamiento, homicidio, amenazas, pérdida de bienes inmobiliarios, delitos sexuales, y reclutamiento de menores, entre otros. La cifra de niños, niñas y adolescentes reclutados por los grupos al margen de la ley corresponde a 6421 (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2014).

El departamento de Sucre no es ajeno a este panorama; su población ha sufrido los embates del conflicto armado, sobre todo en las regiones de la Mojana y Montes de María. La primera, ubicada al sur del departamento, comprende los municipios de San Marcos, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Benito y Sucre. En esta zona, se ubicaron, principalmente, grupos de las AUC (Misión de Observación Electoral [MOE], s.f.); pero también hicieron presencia el ELN—con los frentes Alfredo Gómez Quiñónez y Jaime Bateman Cayón—y las FARC (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario [DIH], 2006, p. 5).

Entre tanto, la región de Montes de María abarca los municipios de San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Chalán, Colosó, Ovejas, San Antonio de Palmito y Tolú Viejo (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2010, p. 5) y fue ocupada por las FARC, el ELN y las AUC. Todos estos grupos al margen de la ley se dedicaban sobre todo al narcotráfico y llevaban a cabo enfrentamientos por el control de tierras. En su rivalidad, llevaron a cabo masacres,

asesinatos selectivos, torturas, violencia sexual, reclutamientos ilícitos y secuestros que desencadenaron procesos de desplazamiento, y afectaron psicológica y socialmente a la población.

Como vemos, la situación de guerra en Colombia ha creado un ambiente desnaturalizado, lo cual ha generado que, en algunas zonas del país—como en el departamento de Sucre—muchos de sus pobladores se hayan acostumbrado a vivir en guerra; es por ello que el trauma psicosocial como consecuencia de la violencia que genera el desplazamiento que históricamente ha sufrido la comunidad sucreña impacta de manera directa en las relaciones comportamentales y sociales.

3.2. Impacto psicosocial del conflicto armado

En el contexto de la guerra, el impacto psicosocial es definido como el “efecto que tiene la violencia y la violación de los derechos humanos en la integridad emocional individual, originando dolor y sufrimiento, así como los cambios que afectan la estabilidad, integridad y funcionamiento de las redes sociales y comunitarias” (Arroyo, 2013, p. 16). Las vidas de quienes se ven inmersos en las acciones violentas y situaciones de guerra se ven afectadas psicológica y socialmente, pues no pueden desarrollar sus actividades cotidianas de manera normal, sino que se llenan de incertidumbre de lo que pueda pasar con su integridad física y con el futuro que les espera; se afecta su proyecto de vida, su identidad, su autonomía, su entorno, entre otros (Arroyo, 2013).

El GMH (2013) realizó un estudio en el que clasificó los tipos de daños ocasionados por el conflicto armado en emocionales y psicológicos, morales, políticos y socioculturales. Entre los

primeros, el miedo es el sentimiento más frecuentemente relatado por las víctimas. Junto con él, los afectados experimentan emociones de angustia por no saber en qué momento podían llegar los malhechores y lo que les pudieran hacer, nostalgia y desarraigo por tener que abandonar sus tierras y enseres, y tristeza por la pérdida de parientes y amigos cercanos (GMH, 2013). Además, las humillaciones y la injusticia vividas en su momento y en los procesos de postconflicto generan sentimientos de odio y desesperanza, pues sienten que aquellos que les hicieron daño son de cierto modo “premiados” con remuneraciones económicas, reconocimiento y libertad, a pesar de todo el daño que infligieron (GMH, 2013). Estos sentimientos despiertan, a su vez, culpa y vergüenza, ya que se supone que las víctimas deben “perdonar y reconciliar”. Además, quienes sufrieron violencia sexual o no fueron capaces de proteger su núcleo familiar son embargados por estos sentimientos. Todo el daño psicológico desencadena enfermedades y desórdenes del sueño, de la alimentación y la concentración para realizar cualquier actividad; hay víctimas que han entrado en estados depresivos intensos que las han llevado a la locura y, muchas veces, a la muerte.

Por su parte, los daños morales ocasionados por todo lo vivido corresponden al menoscabo de la dignidad, de las creencias y de los valores que manejaban como individuos y como comunidad. Las víctimas fueron estigmatizadas y degradadas por sus victimarios y, muchas veces, fueron tildados de paramilitares o guerrilleros, según el bando acusador, en los procesos posconflicto. También eran acusados de drogadictos y humillados por su color de piel, sus creencias religiosas o prácticas culturales, de manera que se vieron afectados en su honra y en su identidad cultural. Estos daños morales también repercutieron en depresión, incapacidad para rehacer la vida en otros lugares, donde también eran estigmatizados por sus vivencias y situaciones experimentadas. Desde el punto de vista del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(Unicef, 2006), los niños utilizados en el conflicto quedan predispuestos a la violencia y las niñas que han tenido embarazos indeseados quedan marcadas psicológicamente.

En relación con la afectación social, el GMH sostiene que las “lógicas de la guerra impusieron la desconfianza, el silencio y el aislamiento, y deterioraron valores sociales fundamentales como la solidaridad, la participación y la reciprocidad” (2013, p. 274). Los vecinos se convirtieron en extraños; dejaron de reunirse para practicar deportes o celebrar ocasiones especiales o fiestas del pueblo; se vieron obligados a dejar de cultivar sus tierras. Todo esto llevó a la desintegración de la comunidad. En el mismo sentido, Henao et al. (2017) consideran que las acciones de guerra provocan la desintegración familiar, la disgregación de la identidad cultural y la disociación de los vínculos familiares y afectivos.

En suma, el conflicto armado introduce cambios abruptos en términos de quehaceres, saberes y relaciones cotidianas; cambios que deterioran la autoimagen y la identidad personal y colectiva, y que obligan a ingresar en lenguajes y prácticas desconocidas, signadas por la dependencia, la inactividad, la tragedia y la desesperanza” (Bello y Lancheros, 2005, citados por Arroyo, 2013, p. 42). Es en este escenario que surge la atención en el ámbito psicosocial, con el fin de apoyar a la población a disminuir los efectos “subjetivos y colectivos” del conflicto armado (Jaramillo, 2004, citado por Arroyo, 2013, p. 42).

Se encuentra también el estudio presentado por Camargo y Rojas (2016), en el que se evidencia, por ejemplo, que los jóvenes afectados por conflicto crean un distanciamiento social con quienes desean ayudarlos, pero, por otro lado, se refugian en actividades lúdicas o deportivas para enfrentar su realidad. Esto manifiesta que hay influencia en el capital social y que, además,

se pueden ir pensando en estrategias que deriven del estudio para tratar el impacto psicosocial de los jóvenes.

Todas las afectaciones anteriormente relacionadas influyen en la disposición que adoptan las víctimas ante el conflicto y los procesos posteriores, y su tratamiento determina la relación que se establece con el capital social. Por esto, se han implementado programas para atender a las víctimas del conflicto armado, en el marco de la Ley 1448 de 2011, constitutiva de la política nacional de reparación. En este sentido, se han generado programas de atención en aras de restablecer el estado de salud, tanto físico, como mental, de quienes han sido objeto de violencia y desplazamiento. De acuerdo con la cartilla *Mi derecho al retorno y a la reubicación como víctima del desplazamiento forzado* de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se puede definir la atención psicosocial de la siguiente manera:

[...] los procesos articulados de servicios que buscan mitigar, superar y prevenir los daños e impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y la vida en relación, generados a las víctimas, sus familias y comunidades por las graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. (UARIV, 2015a, p. 24)

Uno de los planes corresponde al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) el cual busca, precisamente, asegurar la atención de aquellos que han sido víctimas de la violación de sus derechos, en el marco del conflicto, con el fin de mitigar el daño causado y coadyuvar en la reconstrucción y restablecimiento de la salud de los afectados. Este

proyecto aborda la situación desde tres perspectivas: individual, familiar y comunitaria, y, para el caso específico de investigación, para la zona norte del país, se tenían las metas de atención que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. *Metas de atención psicosocial del programa PAPSIVI*

Año	Departamentos y municipios	Número aproximado víctimas a atender
2012	Bolívar (Carmen de Bolívar, María la baja, San Juan de Nepomuceno) Cartagena D.T. Sucre (Los Palmitos, Sincelejo). Atlántico (Soledad) Barranquilla Antioquia y 7 departamentos más, de acuerdo a la focalización a partir del inicio de la ruta de reparación individual a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Víctimas –UAERIV.	9.388
2013	Bolívar (Carmen de Bolívar, María la baja, San Juan de Nepomuceno) Cartagena D.T.	74.323, corresponde a la mitad del número

	Sucre (Los Palmitos, Sincelejo).	de víctimas a
	Atlántico (Soledad)	noviembre 2011 en
	Barranquilla	los municipios y
	Antioquia y otros departamentos, de acuerdo a la focalización a	distritos con el
	partir del inicio de la ruta de reparación individual a cargo de la	Programa.
	Unidad Administrativa Especial de Víctimas –UAERIV.	
2014	Bolívar (Carmen de Bolívar, María la baja, San Juan de	139.258,
	Nepomuceno)	corresponde total
	Cartagena D.T.	víctimas a
	Sucre (Los Palmitos, Sincelejo).	noviembre 2011 en
	Atlántico (Soledad)	los municipios y
	Barranquilla	distritos con el
	Antioquia y otros departamentos, de acuerdo a la focalización a	Programa.
	partir del inicio de la ruta de reparación individual a cargo de la	
	Unidad Administrativa Especial de Víctimas –UAERIV.	

Entre tanto, el *Informe regional* de 2016, en el marco de rendición de cuentas específico para el área del departamento de Sucre, reporta las siguientes cifras de acompañamiento y atención psicosocial realizada (ver Tabla 2).

Tabla 2. *Reparación individual en el área psicosocial*

Vigencia	Estrategia de recuperación
2012	0
2013	662
2014	1051
2015	1363
2016	660
TOTAL	3.736

Fuente: UARIV (2016).

La atención está dirigida a realizar una valoración de la salud mental y física de las víctimas para caracterizar el estado psicosocial de los afectados con el fin de emprender acciones de atención en salud. Esta atención, dentro del PAPSIVI, se llevó a cabo por un equipo conformado por “un psicólogo, un trabajador social o sociólogo y un enfermero” (Gutiérrez, 2015, p. 68), pero su ámbito se redujo a la atención individual, dado que la renuencia de la población en participar obstaculizó el proceso (Gutiérrez, 2015).

Entre tanto, un estudio realizado por el Movimiento por la Paz, el Desarrollo y la Libertad (MPDL) y la Oficina Humanitaria de la Unión Europea (ECHO, por sus siglas en inglés) realizó una caracterización de la afectación de los desplazados, en el marco de su programa de ayuda comunitaria en Colombia, el cual intervino población infantil y adulta en el norte del país, incluidas las regiones de los Montes de María y el sur de Bolívar. En el estudio, se evaluaron parámetros como “agresividad, ansiedad, depresión, pasividad y habilidades sociales”, en una primera fase, y, actualmente, se miden aspectos relacionados con “expectativas de retorno de la comunidad, la valoración de ofertas, los porcentajes de autonomía, autosuficiencia, responsabilidad, ansiedad, depresión, agresividad y conducta pasiva en la población adulta e inhibida en la Infantil” (MPDL y ECHO, 2004). Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 3 y 4.

Cuadro de la Encuesta Psicológica - Porcentajes			Cuadro de la Encuesta - No. de Casos		
	Pre Interv	Post Interv		Pre Interv	Post interv
Ansiedad	57.1	20	Ansiedad	20	7
Depresión	45.7	20	Depresión	16	7
Agresividad	31.4	17.1	Agresividad	11	6
Pasividad	20	8.5	Pasividad	7	3
Habilidades Sociales	65.7	91.4	Habilidades sociales	23	32

Figura 3. Gráfico de resultados encuesta psicosocial 2002. Tomada de: MPDL y ECHO (2004).



Figura 4. Resultados encuesta psicológica. Tomado de: MPDL y ECHO (2004).

Como se puede observar, los índices de los parámetros reportados disminuyen significativamente después de la intervención realizada por el programa. Dicha intervención, para la población adulta, consistió en la realización de reuniones comunales, de talleres de organización comunal, de grupos de encuentro de mujeres, de jornadas de integración, de actividades ocupacionales y deportivas, y de visitas a domicilios (MPDL y ECHO, 2004). Dichas estrategias promovían el interés por aspectos que se relacionaban con el bien común.

Por su parte, Puertas, Ríos y Del Valle (2006) llevaron a cabo un estudio denominado *Prevalencia de trastornos mentales comunes en barrios marginales urbanos con población desplazada en Colombia*, que involucró población de familias desplazadas que habitan barrios de zonas marginales en Sincelejo (Sucre). La investigación arrojó los resultados que se describen a continuación:

Se encontró una prevalencia de 27,2% (intervalo de confianza de 95% [IC95%]: 24,0% a 30,0%) de trastornos mentales comunes en la población adulta de los barrios estudiados. En general, 13,6% (IC95%: 11,4% a 16,1%) de la población encuestada reconoció tener problemas de consumo excesivo de alcohol. Se encontró una asociación entre la prevalencia de trastornos mentales comunes y el tipo de carné usado para acceder a la atención de salud (razón de posibilidades [RP]: 1,66 para el carné de desplazado frente a cualquiera de los otros dos) y el sexo (RP: 1,78 para mujeres frente a hombres); dicha asociación persistió aun después del ajuste en función de las demás variables explicativas. (Puertas et al., 2006, p. 324)

El estudio se realizó sobre una población total de 904 víctimas de desplazamiento, de las cuales el 68 % eran mujeres y el restante 32 % eran hombres. Muchos de ellos manifestaron haber pensado en el suicidio y evidenciaban trastornos mentales relacionados con depresión, ansiedad y trastornos psicosomáticos, que comprenden trastornos neuróticos, estrés y trastornos del estado de ánimo (Puertas et al., 2006, p. 325).

En suma, es importante realizar un estudio como el que se propone en este trabajo, para identificar los elementos que pueden apoyar planes de atención en esta área de la salud de la población bajo estudio.

Sin lugar a dudas, el impacto psicosocial que deja el conflicto armado en la población joven es muy fuerte. De ese modo, a la población muestra de estudio de este análisis, le concierne, también, lo que se entiende por impacto social en el marco del conflicto armado, “efecto que tiene la violencia y la violación de los derechos humanos en la integridad emocional individual, originando dolor y sufrimiento, así como los cambios que afectan la estabilidad, integridad y funcionamiento de las redes sociales y comunitarias.” (Arroyo, 2013, p. 16). En ese sentido, hay una serie de secuelas que no se pueden dejar de lado y que involucran el rompimiento con estructuras sociales determinadas.

Evidentemente, lo anterior lleva a plantear que las consecuencias del conflicto armado, en el caso de la población víctima de desplazamiento forzado, no se puede ni se debe dejar de lado. Por otro lado, de lo anterior se infiere que para que se dé una situación adecuada de reubicación o retorno, deben superarse las repercusiones psicosociales que el conflicto pudo haber dejado. Esto implica una adecuada actitud hacia una reconstrucción favorable de las consecuencias que dejó la violencia.

Por otro lado, aun cuando hay una actitud favorable y, en efecto, existe una reconstrucción positiva sobre lo ocurrido, hay jóvenes que deciden no retornar al lugar de donde fueron despojados. Lo anterior puede explicarse en relación con la llegada a sitios urbanos y que, en medio de todo, cuando transcurre mucho tiempo desde el despojo, puede que sus condiciones psicosociales, así como su calidad de vida, mejoren. En ese sentido, incluso si el Estado garantiza medidas de seguridad en las regiones afectadas, muchos jóvenes no confían y ven mayores oportunidades en los lugares adonde migraron.

[...] los jóvenes luego del desplazamiento pueden tener un proyecto de vida más a largo plazo y hay mejores garantías a pesar de las adversidades, y obviamente no van a querer estar avocados a un nuevo enfrentamiento, o bombardeo, o a una nueva masacre. Prefieren redireccionar sus vidas porque saben que pueden conseguir algo, tienen capacidad productiva y están estudiando. (Hernández, 2010, pp. 108-109)

3.3. Disposición frente al conflicto armado

Como hemos visto, los efectos de la guerra interna se sienten a nivel social, económico, ambiental, educativo y de salud, entre otros. Díaz y Sánchez (2005, p. 14) sostienen que el conflicto armado cobra muchas vidas, lo cual representa un costo social muy alto; además, la educación se ve afectada, pues crece la tasa de deserción escolar. El costo económico se incrementa por la destrucción de infraestructura y la falta de inversión tanto estatal como de fuera. Por lo tanto, la recuperación de estos aspectos debe contemplar el mejoramiento del capital social de cada región afectada, lo cual se relaciona directamente con la disposición que tengan las víctimas hacia el conflicto y los procesos de retorno y reubicación.

En cuanto a lo que significa el término disposición, según la Real Academia Española (RAE, 2018), tiene varias acepciones, entre ellas, (a) “Aptitud (adecuación para algún fin)” y (b) como locución verbal, “estar, o hallarse, en disposición alguien o algo”, significa “hallarse apto y

listo para algún fin”. Es decir que, en los procesos de retorno y reubicación, las víctimas deben tener la aptitud para llevar a cabo las acciones encaminadas a resolver los inconvenientes que se les presente. Sin embargo, las afectaciones sufridas durante el conflicto inciden en la disposición que puedan tener las víctimas en posteriores procesos de reubicación y retorno, por lo cual, es necesario que el Estado implemente procesos de atención psicosocial a las víctimas.

Al respecto, el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, ha generado cartillas pedagógicas y el PAPSIVI, en el marco del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y en atención a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448, 2011). Este programa tiene como objetivos la recuperación o mitigación de los daños psicológicos y sociales causados por la guerra, además de fomentar la elaboración del duelo y la reconstrucción del tejido social dañado por la desintegración familiar y comunal, a través de mecanismos de afrontamiento ante lo sucedido. Estos procesos permiten modificar la disposición de las víctimas hacia el conflicto y los procesos posconflicto de manera que repercutirán en la formación de capital social de las diferentes comunidades y regiones afectadas por la violencia, lo cual permitirá la reconstrucción del tejido social para reactivar el desarrollo regional.

Aunque se han incrementado los estudios sobre estos aspectos, generalmente, se centran en la determinación de sus causas o su evolución; son escasos los que se centran en las consecuencias económicas y muchos menos los que abarcan los aspectos del desarrollo social (Sánchez et al., 2012; Echandía, 1998; y Rangel, 2005, citados por Díaz y Sánchez, 2005).

Uno de los estudios sobre el particular es el realizado por Alzate et al. (2009), quienes estipulan una serie de variables relacionadas con la disposición de las víctimas hacia el conflicto

y su correlación para el logro de una “transformación constructiva”. Dichas variables “corresponden a creencias sobre los actores del conflicto; percepciones de amenaza, confianza y costes; actitudes etnocéntricas; y preferencias de interacción con los adversarios” (p. 1).

En relación con el grupo de variables referentes a las percepciones, la confianza de las víctimas está determinada por lo que han sufrido durante el conflicto y por las condiciones que se les presentan en los procesos de posconflicto; en efecto, la impunidad, la dificultad para acceder a la justicia y el poco apoyo del Estado generan, al contrario, desconfianza en las personas y en las instituciones. Por esto, es importante tener en cuenta esta variable que, de manera directa o indirecta, está relacionada con la variable referente a amenazas que pueden percibir desde sus victimarios o desde sus propios vecinos, los cuales pueden asimilarse al exogrupo y al endogrupo, respectivamente, según los autores (Alzate et al., 2009). Esta variable se trabaja, desde el programa PAPSIVI, según los elementos de “protección y seguridad”, bajo la categoría de “vida en relación”. Según Alzate et al. (2009), los costos económicos y en vidas humanas se deben considerar en la disposición de las víctimas hacia los procesos de transformación del conflicto. En efecto, las regiones en conflicto se ven afectadas económicamente por delitos como el secuestro y la extorsión, lo cual provoca la huida de capitales de inversión y desplazamiento de comerciantes temerosos de represalias por parte de los violentos (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas [CHCV], 2015).

El factor étnico, íntimamente, relacionado con la cultura de la población afectada, según los autores, debe contemplarse en el establecimiento de la transformación constructiva del conflicto, pues se convierte en un factor de disposición negativa hacia quienes no pertenecen a un mismo grupo (Alzate et al., 2009). Es importante tener en cuenta que este factor es considerado en

los procesos de acompañamiento psicosocial desde el concepto de enfoque diferencial, el cual involucra elementos de multiculturalidad (multiplicidad de culturas de una región), pluriculturalidad (convivencia de culturas de diferentes etnias) e interculturalidad (relaciones interpersonales e intercambios de conocimientos y prácticas de individuos de diferentes etnias) (Walsh, 2000, citada por Melo y Castro, 2013). Melo y Castro (2013) consideran que es necesario reconocer la pertenencia de los sujetos a diferentes etnias para lograr avances en la reconstrucción de colectivos dispersos a causa de los conflictos armados.

En los conflictos se evidencia la polarización de los diferentes grupos participantes. En el caso colombiano, las víctimas, aunque no pertenecientes a ninguno de los bandos en disputa, corresponden a una de las partes en los procesos postconflicto. La disposición que adopten hacia la situación juega un papel en el aumento o disminución de la polarización de los grupos participantes del proceso. Por esto, se debe considerar la actitud competitiva que puedan llegar a adoptar los individuos involucrados en procesos de retorno y reubicación, y, dentro de este enfoque, se debe contemplar como variable la visión que tenga cada parte sobre la legitimidad de los intereses de la otra; es decir, si un grupo considera que los intereses y pretensiones del otro grupo no son acordes a los de su comunidad, establecerá un proceso de competitividad que no aporta a la transformación del conflicto (Alzate et al., 2009).

Aparte de la percepción que tengan los individuos participantes en la reconstrucción de contextos, se deben considerar, como variables de disposición social, los procesos internos que llevan a cabo en relación con la imagen que se forman de las otras partes del proceso y de los procesos mismos. A este respecto, los autores trabajan variables relativas a tres aspectos: la imagen que se forman las víctimas del otro (victimarios) como colectividad, la imagen que se forman de

los entes gubernamentales que lideran los procesos de paz y los tipos de interacción que se llevan a cabo en los procesos postconflicto (Alzate et al., 2009).

En cuanto al primer aspecto, la imagen que tienen las víctimas respecto a sus victimarios suele ser negativa y es necesario realizar un proceso de conocimiento y reconocimiento de las razones y necesidades del otro para generar procesos de cambio y reconstrucción; Kanyangara, Rimé, Philippot e Yzerbyt (2007, citados por Alzate et al., 2009), aseguran que “el conocimiento de los miembros del exogrupo permite la configuración de una imagen menos distorsionada de éste”, lo cual redundará en el mejoramiento de relaciones postconflicto. Entre tanto, en la visión que tienen del gobierno, intervienen variables relacionadas con la satisfacción de los agravios recibidos y las necesidades a que los lanzaron, y los privilegios que conceden a los victimarios. Efectivamente, la reconstrucción de contextos y tejidos social se logra cuando se evidencia el interés real de reparar los daños y pérdidas sufridos durante la guerra, por lo cual, el Gobierno debe emprender acciones que reflejen el empeño por reparar a las víctimas y satisfacer sus necesidades básicas: alimentación, vivienda y trabajo (CHCV, 2015).

Además, la garantía de no repetición que debe garantizar el gobierno coadyuvará al mejoramiento de la percepción de amenaza de las víctimas y subsecuente repercusión en la reconstrucción de la paz. En relación con las interacciones de las partes en los procesos de retorno y reubicación, se debe tener en cuenta que es necesario contrarrestar las situaciones autoritarias y agresivas vividas mediante procesos de negociación y reconciliación; el Gobierno debe establecer mecanismos de diálogo con el fin de alcanzar objetivos comunes a las partes a través del cambio de actitudes y comportamientos para generar vínculos de confianza y cooperación, es decir, para

lograr la reconciliación, que, según los autores, es la variable que más aporta al proceso de reconstrucción del conflicto (Alzate et al., 2009).

3.4. Reconciliación social

La reconciliación social es definida como un proceso de aceptación del otro que involucra, no sólo los distintos aspectos planteados con anterioridad como la convivencia y el restablecimiento de relaciones interpersonales, sino también un sin número de factores que deben cumplirse para lograr un proceso efectivo. Según Bar-Tal y Bennink (2004), la reconciliación social es un proceso constructivo donde reconocer el otro como un ser y aceptarlo permite cambiar intereses y metas con la finalidad de crear relaciones pacíficas, actitudes positivas, respeto, intereses y confianza. Esta conceptualización describe una serie de modificaciones relacionales actitudinales y cognitivas para una posible finalización de conflictos violentos. Aunque esta conceptualización presentada toma en cuenta dimensiones de extrema importancia, deja de lado la parte emocional que en muchos casos se ve afectada en las víctimas del conflicto. En este sentido Shnabel y Nadler (2010) plantean un concepto de reconciliación social que busca minimizar o reestructurar barreras emocionales que bloquean el camino hacia la finalización del conflicto.

De igual forma, Rouhana (2011) plantea que la reconciliación social se instaura, no sólo con aspectos psicosociales, sino también con estructuras políticas y una fundamentación psicológica en miras a un éxito en su mantenimiento. Hay que entender que el proceso de reconciliación trae consigo cambios, tanto en las víctimas, como en los agresores, los cuales no

deben permitir que los hechos pasados definan las relaciones futuras; de esta manera, los afectados comienzan a ver a los perpetradores desde un sentido humanístico, haciendo o posibilitando construir nuevas relaciones armónicas y de bienestar (Staub, 2005, citado por Cortés, Torres, López-López, Pérez y Pineda-Marín, 2015). Este autor también considera que la reconciliación puede darse, tanto en un proceso colectivo, como en un proceso individual, y es necesario que exista compromiso entre las dos partes y garantía de no repetición, a diferencia del perdón que puede darse de manera unilateral.

En el entorno específico de Colombia, el concepto de reconciliación está determinado por el proceso de transición de un momento de conflicto hacia un momento de paz, mediados por el reconocimiento de las agresiones, de una parte, y el perdón, de la otra. En este sentido, Gali y Acevedo (2004, citados por Cortés y Torres, 2013) consideran que la reconciliación corresponde a los mecanismos legales que se aplican a situaciones concretas y hechos específicos, teniendo en cuenta los derechos humanos, políticos y civiles; es decir, se enmarca en los procesos de justicia transicional. En todo caso, la reconciliación involucra diversas condiciones para que se lleve a buen término el proceso; autores como Cortés y Torres (2013) consideran las propuestas por Kelman (2008), a saber: el “reconocimiento de la nacionalidad y humanidad del otro” en contraposición con los hechos deshumanizantes perpetrados por los violentos, compromiso moral hacia la paz, confrontación de los hechos, reconocimiento de la responsabilidad (que debe conllevar a acciones de reparación del daño y restitución) y la institución de herramientas de cooperación (pp. 28-29). Aparte de estas condiciones, con las que también concuerda, Bueno (2006) incluye la verdad, la memoria, el perdón, la justicia, la amnistía, la reparación y la restitución; esta autora considera que el perdón es un facilitador de la reconciliación (Cortés y

Torres, 2013). La reconciliación social, también, se entiende como una tregua temporal en las relaciones dañadas (Domínguez de la Ossa, 2014).

3.5. Capital social

Hemos visto cómo el trauma psicosocial en poblaciones afectadas por conflicto armado influye en su disposición en los procesos de retorno. Se hace necesario, entonces, que se den elementos de adaptación social a partir de la implementación de acciones afirmativas por parte de las instituciones, tanto del Estado, como de la sociedad civil, para el desarrollo y el empoderamiento de las comunidades en este proceso, poniendo en práctica el capital social que detentan dichas colectividades. Pero ¿qué es el capital social?

Como se observaba en un apartado anterior, para hablar de capital social, se tienen en cuenta varias definiciones, entre ellas, las de Hanifan (1916), Bourdieu (1986) y Medina (2011). Sin embargo, en este apartado, se revisarán otras definiciones dadas por otros autores.

En términos sencillos, el capital, desde una perspectiva económica, hace referencia a los recursos que posee una persona o sociedad; estos, al ser invertidos, reportan ganancias. Desde la perspectiva de Marx, el capital se genera en relaciones entre trabajador y jefe o dueño. Sin embargo, cuando este capital incluye las habilidades y conocimientos que poseen los individuos, se refiere al capital humano, según Adam Smith (García-Valdecasas, 2011). Pero cuando esos individuos con capacidades, conocimientos y habilidades conforman redes sociales, se está

hablando de “recursos que se invierten en *relaciones sociales* con la esperanza de adquirir ciertas ventajas” (García-Valdecasas, 2011); esto es el capital social.

Retomando lo hablado sobre Bourdieu (1986), quien estableció una de las primeras definiciones de capital social, este autor lo entiende como “el agregado de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo” (Forni et al., 2004, p. 6). Más adelante, Coleman (1988) introdujo los conceptos de obligaciones y expectativas de quienes intervienen en las redes en pro de un objetivo en común; es decir, el beneficio no es individual, sino que todos los participantes de la red disfrutan de las ganancias (Forni et al., 2004). Así, se fomenta el desarrollo espontáneo de redes de relaciones de confianza y cooperación y, a su vez, se generan sistemas de obligaciones, es decir, normas sociales que, con su cumplimiento, permiten acceso a recursos. Por su parte, Putnam, Leonardo y Nonetti (1993) llevaron el concepto de capital social a nivel macro al aplicarlo ya no a redes pequeñas, sino a comunidades enteras, y lo define como “aspectos de la organización social tales como confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la acción coordinada” (Forni et al., 2004, p. 8).

El concepto de capital social ha tomado relevancia por el impacto que genera en el desarrollo de las regiones. Su aplicación involucra aspectos como la “amistad, las habilidades sociales, la creación de redes, la confianza, la cultura, la participación social, las normas compartidas y el sentido de obligación hacia los demás” (López y De la Torre, 2004, citados por Portales y García, 2009, p. 1). Para Putnam et al. (1993), el capital social se basa en el compromiso cívico de quienes conforman las asociaciones, las cuales no deben estar jerarquizadas, sino que deben ser horizontales (Urteaga, 2013).

Diversos estudios relacionados con el capital social en regiones del país han tomado como variables o indicadores de medición del capital social aspectos como la confianza, la cooperación y las normas sociales (Barreto et al., 2016). Uno de los instrumentos usados a nivel nacional para la medición del capital social es el BARCAS, el cual consiste en una encuesta que se lleva a cabo en diversas regiones del país que contempla tres factores: el capital social (que determina el tejido social de la región), la confianza institucional y el control indirecto del Estado (se refiere a la contraposición de la institucionalidad y la sociedad civil), y la fe en las fuentes de información no válidas (contrapone las creencias en la suficiencia de la información y los ideales de la ciudadanía). Estos factores se determinan a través de 10 dimensiones: solidaridad y mutualidad, relaciones horizontales, jerarquía o articulación vertical, confianza institucional, control social, participación cívica, participación política, información y transparencia, republicanismo cívico y medios. Dichas dimensiones se calculan a partir de 50 variables, que, a su vez, se dividen en 325 ítems (Fundación Antonio Restrepo Barco, 2013).

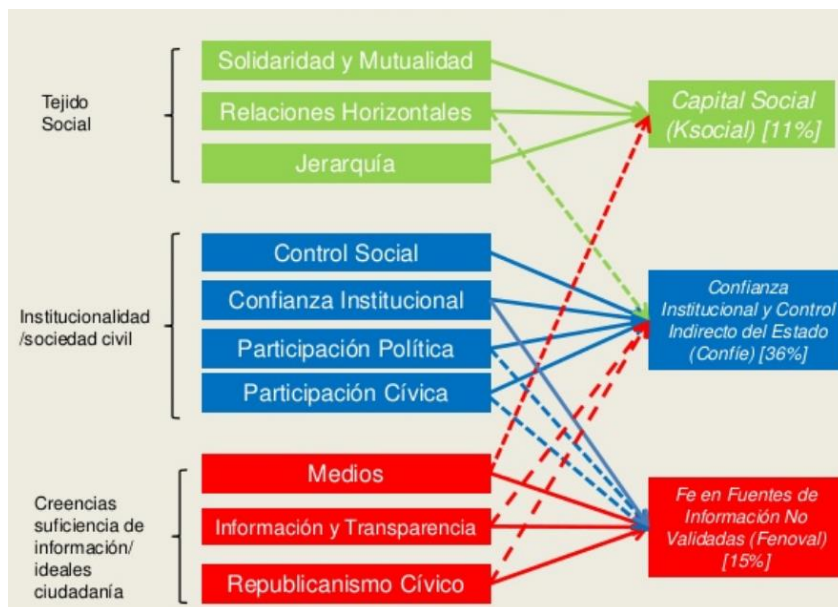


Figura 5. Relación entre dimensiones y factores del cuestionario BARCAS. Tomada de: Fundación Antonio Restrepo Barco (2013).

Los resultados que se obtienen al aplicar el instrumento BARCAS se utilizan para la formulación de políticas tendientes al mejoramiento institucional y democrático, pues permite determinar las percepciones que tienen los individuos sobre los elementos contemplados en los factores que se miden. Es a partir de estas cifras que surgen interrogantes para intentar comprender la manera en que la reconciliación social y el capital social juegan un papel importante en la reconstrucción integral del tejido social en jóvenes víctimas del conflicto armado en calidad de retorno.

3.6. Retorno y reubicación

El Estado define estos conceptos en la cartilla informativa para funcionarios de entidades con responsabilidades en procesos de retorno y reubicación de la siguiente manera:

El retorno es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado decide regresar al sitio del cual fueron desplazados con el fin de asentarse indefinidamente. La reubicación es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado decide asentarse en un lugar distinto del que se vieron forzados a salir, que puede ser el lugar receptor de su desplazamiento con el fin de asentarse indefinidamente en él. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas [UARIV], 2015a, p. 17)

A nivel estatal, se han expedido normas que propenden por el restablecimiento de derechos de los afectados por el conflicto armado; entre ellas, cabe destacar la Ley 387 de 1997, la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 1480 de 2014. La jurisprudencia también ha contemplado lo relacionado con retorno y reubicación en varias sentencias, a saber: Sentencia T-1115 de 2008, en la que se estipula que no se debe coaccionar el retorno, pero tampoco impedir que los desplazados regresen a su lugar habitual de residencia, además de dar toda la información a los afectados sobre las condiciones de seguridad del territorio al que desean regresar y a no poner en riesgo a los afectados en caso de que no existan garantías en el lugar de retorno (Polo, 2017, p. 36). La Sentencia T-881

de 2002 trata el tema de la dignidad humana. Por su parte, la Sentencia C-715 de 2012 acota que existe el “derecho de todos los refugiados y desplazados a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal independiente e imparcial” (Polo, 2017, p. 38).

En el derecho internacional, también, se contemplan los principios rectores que definen las condiciones que determinan el derecho al retorno y reubicación de los afectados por el conflicto:

Principio 28:

1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.

2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración.

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1998)

De acuerdo con la cartilla informativa para funcionarios de entidades con responsabilidades en procesos de retorno y reubicación, una de las medidas de reparación a que tiene derecho las víctimas de desplazamiento forzado es el acompañamiento al proceso de retorno o reubicación de las comunidades, que son reconocidas como sujeto colectivo (UARIV, 2015a, p. 15). De esta manera, el Estado garantiza la restitución de los derechos alienados por el conflicto, bien sea a nivel individual, bien sea a nivel colectivo, para lo cual se ha creado el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) con el fin de realizar un acompañamiento que permita la reconstrucción de las comunidades e individuos que regresan a sus lugares habituales de vivienda.

La cartilla contempla las siguientes modalidades de retorno y reubicación:

- Retornos o reubicaciones acompañados: individuos, hogares, o comunidades que estando en situación de desplazamiento solicitan de manera voluntaria acompañamiento a las entidades del SNARIV
- Retornos o reubicaciones no acompañados: individuos, hogares o comunidades que por sus propios medios han regresado a sus lugares de origen o se han reubicado en otro lugar distinto
- Retornos o reubicaciones efectuados: hogares o comunidades que ya surtieron el proceso del traslado tanto de las personas como de los enseres a los sitios de retorno o reubicación
- Retornos o reubicaciones por efectuar: hogares o comunidades que están en proceso de surtir el traslado tanto de las personas como de los enseres a los sitios de retorno o reubicación

Además, según la cartilla, estos tipos de retorno y reubicación se pueden diferenciar por cuatro variables distintas, a saber:

- La Ruta Integral de Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas de desplazamiento forzado
- La oportunidad
- La ubicación de la víctima
- El sitio de llegada de la población

Es importante precisar que, según la cartilla, cada municipio debe elaborar un Plan de Retorno y Reubicación, pues depende de las circunstancias específicas que se han dado en las situaciones de conflicto y desplazamiento. Por esto, es necesario tener en cuenta lo ocurrido en el departamento de Sucre para poder determinar de qué manera se afecta el capital social en estos procesos.

3.7. Confianza

Unos de los aspectos más importantes que intervienen en la formación de capital social es la confianza, por lo cual merece un breve apartado con el fin de conceptualizar sobre el particular, máxime al evidenciar que se atraviesa por un momento de descubrimientos de corrupción administrativa a nivel regional y nacional. Desde el punto de vista social, la confianza se define como las expectativas que tiene un individuo de que el otro (llámese persona, entidad o sociedad) va a cumplir con lo que ha prometido o determinado (Rotter, 1980, citado por Yáñez, Ahumada y Cova, 2006). Según los autores, las experiencias que vivencian los individuos y la socialización que se realiza de dichas vivencias son determinantes en definir la confianza que experimentarán ante las situaciones a las que se enfrenten.

De acuerdo con Martínez-Cárdenas, Ayala-Gaytán y Aguayo-Téllez (2015), la confianza está íntimamente ligada al capital social y ambos son determinantes en el desarrollo económico de una región. Según vimos antes, la confianza en uno de los factores que se contemplan en la medición de capital social y se mide a partir de encuestas que giran en torno al control social, la confianza institucional, la participación política y la participación cívica. Es decir, es concomitante con las redes de cooperación y relaciones interpersonales (horizontales) y cívicas, esto es, relaciones con las instituciones estatales y privadas (verticales). En palabras de Sara Gordon,

la norma de reciprocidad basada en la confianza, al lado de diversas normas sociales que favorecen determinadas conductas y constriñen otras, ayuda a resolver problemas relacionados con los bienes públicos en una comunidad, de ahí que el

capital social también pueda beneficiar a colectividades y esté, por ello, dotado de una naturaleza colectiva. (2005, p. 46)

De acuerdo con lo anterior, la base de las relaciones sociales es la confianza y, a partir de ella, se establecen relaciones de reciprocidad tanto interindividuales como colectivas que acrecientan la posibilidad de desarrollo social, económico, ambiental y educativo, entre otros, de una región. Por lo tanto, es necesario medir esta variable en los estudios de disposición y capital sociales.

4. Metodología

4.1. Tipo y diseño de investigación

La presente investigación corresponde a una de diseño no experimental, puesto que se llevó a cabo sin la manipulación de variables, realizando una observación del fenómeno para su posterior análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), asimismo, al proponerse describir las relaciones de las variables en un momento determinado, se ubica dentro de los estudios de corte transversal.

Del mismo modo, es de tipo correlacional, debido a que, acorde con los objetivos, esta investigación se propuso determinar el grado de relación y semejanza que pueda existir entre el capital social y la disposición psicosocial, es decir, no establece relaciones causa-efecto, pero estudia la forma en que una variable varía concomitantemente con otra.

4.2. Muestra

La población objeto de estudio fueron 237 jóvenes víctimas del conflicto armado de manera directa o indirecta, en condición de desplazamiento, ubicados en los municipios de Tolú Viejo y Sincelejo, Sucre, que habían retornado o se encontraban en proceso de retorno a su lugar de origen.

Los jóvenes se ubicaron entre los 18 y 30 años de edad con una media de 22,7 (DE= 3,53). El lugar de origen de los participantes fue variado, destacándose los municipios de Sincelejo con un 37,1 %, Tolú Viejo con un 21,9 % y Carmen de Bolívar con un 3,8 %. En cuanto al género, la mayoría se vio representada con un 63,3 % de mujeres.

Con respecto a la situación socioeconómica, un 93,2 % pertenecían al estrato 1 y el 26,2 % se encontraba laborando. La escolaridad de los participantes era, en su mayoría educación secundaria, representando un 48,1 % del total.

El muestreo fue no probabilístico intencional, puesto que la selección de los participantes se ajustó al criterio de la investigadora, tomando como base el reporte de víctimas de desplazamiento forzado del RUV, seleccionando a aquellos jóvenes entre 18 y 30 años que se encontraban en proceso de retorno y reubicación y desearan participar de manera voluntaria.

4.2.1. Criterio de exclusión.

Con respecto a los criterios de exclusión, se estableció que los participantes no padecieran de afectaciones mentales que impidieran una debida interpretación cognitiva de los instrumentos y la participación voluntaria e informada en la investigación.

4.3. Técnica de recolección de datos

La técnica de recolección de datos cuantitativa empleada para el presente estudio, fue la encuesta, la cual cobra pertinencia en esta investigación, debido a que “permite obtener información de muestras de individuos, facilita su uso y su posterior interpretación. Además, puede aplicar a unidades de medidas determinadas, que facilitan describir poblaciones demasiado grandes en fracciones de muestras” (Gallardo y Moreno, 1999, p. 78).

Las encuestas se caracterizan por la recogida información de poblaciones de interés dependiente de la muestra estadística o la población de interés. La encuesta empleada fue de tipo cerrada, la cual determina respuestas precisas y específicas a las preguntas formuladas. Entre las ventajas de esta técnica, se encuentran su facilidad de comprensión, rapidez de aplicación, objetividad, enfoque en el tema a investigar y la posibilidad de medición estadística de los resultados en términos de fiabilidad.

4.4. Instrumentos de medición

Para esta investigación, se emplearon dos instrumentos de recolección de información: el CDPC y el BARCAS.

4.4.1. Cuestionario de Disposición Psicosocial Frente al Conflicto (CDPC) (Alzate et al., 2009).

Evalúa procesos psicosociales en la población civil que ha sido expuesta a conflictos sociales de carácter violento; estos procesos corresponden a las variables que intervienen en la disposición de las personas para facilitar u obstaculizar la transformación constructiva del conflicto. El CDPC es un cuestionario que se compone de 46 ítems, con cinco opciones probables de respuesta: total acuerdo, muy de acuerdo, parcial acuerdo, muy en desacuerdo y total desacuerdo; cada opción tiene un valor numérico de 1 a 5 donde la puntuación menor es 1 y la mayor es 5.

Las dimensiones que evalúa la escala son: (a) percepciones, (b) actitud etnocéntrica, (c) enfoque competitivo, (d) procesos cognitivos sobre el exogrupo, (e) procesos cognitivos sobre el líder, (f) interacciones para la transformación del conflicto y (g) preferencia por la reconciliación; para este último aspecto, “se utilizaron los ítems 31 a 36, basados en la propuesta de Wilder” (1986, citado por Alzate et al., 2009, p. 709). La fiabilidad del instrumento es de 0,68.

4.4.2. Barómetro de Capital social (BARCAS) (Sudarsky, 2007).

Este instrumento fue empleado para medir el capital social. Sudarsky basó este cuestionario en las investigaciones de Putnam et al. (1993) y Coleman (1988) y en la EMV, usada en varios países a nivel mundial (Foliaco-Gamboa, 2013). Se calcula a través de 100 preguntas con un total de 325 ítems, correspondientes a 10 dimensiones: Solidaridad y Mutualidad, Relaciones Horizontales, Jerarquía o Articulación Vertical, Confianza Institucional, Control Social, Participación Cívica, Participación Política, Información y Transparencia, Republicanismo Cívico y Medios, como se aprecia en la Tabla 3.

Dichas dimensiones corresponden a tres factores principales: K-social (capital social en sí mismo), Confíe (confianza en Fuentes de Información del Estado) y Fenoval (fe en fuentes de información no validadas).

Tabla 3. Dimensiones y variables del cuestionario BARCAS

DIMENSIONES	VARIABLES
SOLIDARIDAD Y MUTUALIDAD	Solidaridad Manejo del Conflicto Reciprocidad
	Atomización (-)
	Oportunismo (-) Alienación (control interno vs externo) (-)
RELACIONES HORIZONTALES	Solidaridad en las relaciones horizontales
	Actividades sociales con los del trabajo Actividades sociales con los del vecindario
	Solución horizontales a problemas colectivos
	Aplicación por agente externo (-)
JERARQUÍA O ARTICULACIÓN VERTICAL	Pertenencia a organizaciones de interés Solidaridad vertical
	Solución vertical a problemas colectivos Hace mediación Iglesia
	Hace mediación Gremios o Asociaciones profesionales Hace mediación Sindicatos
	Hace mediación Partidos Políticos
CONFIANZA INSTITUCIONAL	Confianza en el Gobierno Confianza en los Movimientos
	Confianza en los Medios
	Confianza en las Fuerzas Armadas Confianza en los grupos
	Confianza legal Confianza política
	Confianza en la Iglesia
	Confianza en la Educación Confianza en la Policía
	Confianza en las grandes compañías
	Honestidad y cumplimiento de la Ley Corrupción (-)
CONTROL SOCIAL	Confianza en las instituciones que controlan el Estado
	Mecanismos de participación de control de la sociedad al Estado Rendición de cuentas (accountability)
PARTICIPACIÓN CÍVICA	Pertenencia a organizaciones Voluntarias Seculares
	Actividades Localidad
	Actividades Cívicas Actividades Medios
	Trabajo Voluntario
PARTICIPACIÓN POLÍTICA	Habilidades Políticas Mecanismo de participación
	Partidos
	Votación Eslabonamiento legislativo
	Actividades políticas Eslabonamiento ejecutivo
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA	Los colombianos no saben para dónde va el país porque nadie les informa (-)
	La gente tiene quien le explique los problemas públicos
	El Estado se esfuerza por informar a los ciudadanos
	Los medios de comunicación explican a fondo los problemas Los ciudadanos se informan para poder participar
	Sabe en qué se van a invertir los recursos de su localidad/comuna
REPUBLICANISMO CÍVICO	Educación Política
	Politización
	Responsabilidad de lo público
	Particularismo (-)
	Clientelismo (-)
MEDIOS	Confianza en los medios
	Actividad en los medios
	Los medios de comunicación explican a fondo los problemas

Fuente: Foliaco-Gamboa (2013. pp. 46–47)

4.5. Dimensiones y variables

4.5.1. Solidaridad y Mutualidad (SOLIMUTU).

Esta dimensión busca determinar el nivel actual de la solidaridad o la expectativa de ayuda de varios grupos sociales [...] en reciprocidad o mutualidad”. Del mismo modo, buscar determinar la “ausencia en la socialización de varios contextos”. Por medio de ella, se puede determinar “las fuentes de ayuda disponibles en la sociedad y [...] las normas de reciprocidad, tratando de establecer si la gente se comporta de manera cooperativa o mutualista o, por el contrario, oportunista, tratando de sacar ventaja sobre los demás” (Hurtado et al., 2013, p. 146).

Tabla 4. *Variables de la dimensión Solidaridad y Mutualidad*

Etiqueta	Variable
SOLIDAR	Solidaridad
RECIPRO	Reciprocidad
CONFLIC	Manejo del Conflicto
ATOMIZA	Atomización (-)
OPORTUN	Oportunismo (-)
ALIENAC	Alienación (-)

Fuente: Hurtado et al. (2013, p. 147).

4.5.2. Relaciones Horizontales (RELHORZT).

Esta dimensión mide “la solidaridad esperada por los vecinos, amigos, compañeros de trabajo y compadres”, así como “las actividades sociales con vecinos y con los compañeros de trabajo” y la forma de “resolver problemas colectivos” (Hurtado et al., 2013, p. 157).

La base de esta dimensión se basa en la acumulación de capital social más allá del núcleo familiar. Su importancia radica en “la conexión y la integración social con grupos, como los vecinos o los compañeros de trabajo, e inclusive los parientes” y en que permite “cementa[r] la consolidación de relaciones en los círculos sociales cercanos a las personas” (Hurtado et al., 2013, p. 157).

Tabla 5. *Variables de la dimensión Relaciones Horizontales*

Etiqueta	Variable
AYHORTZ	Solidaridad en las Relaciones Horizontales
ACTIVECI	Actividades Sociales con los del Vecindario
ACTTRABA	Actividades Sociales con los del Trabajo
CLHORIZ	Solución Horizontal a Problemas Colectivos
AAGEXTE	Aplicación por Agente Externo (-)

Fuente: Hurtado et al. (2013, p. 158)

4.5.3. Jerarquía o Articulación Vertical (JERARQUÍA).

Esta dimensión busca establecer la “contribución al capital social de las organizaciones de articulación vertical (gremios, sindicatos, partidos políticos e iglesia)” (Hurtado et al., 2013, p. 170), así como la expectativa de ayuda de los ciudadanos y su pertenencia frente a ellas. La importancia de estas organizaciones radica en la manera en que “vinculan el centro y la periferia de la sociedad” (p. 171).

Tabla 6. *Variables de la dimensión Jerarquía o Articulación Vertical*

Etiqueta	Variable
ORIPERT	Pertenencia a Organizaciones Voluntarias de Interés
CLJQUIA	Solución Vertical a Problemas Colectivos
HMEGREM	Organizaciones que Hacen Mediación: Gremios
HMESIND	Organización que Hacen Mediación: Sindicatos
HMEPTID	Organización que Hacen Mediación: Partidos Políticos
HMEIGLES	Organización que Hacen Mediación: Iglesia

Fuente: Hurtado et al. (2013, p. 172)

4.5.4. Confianza Institucional (CONFINST).

La importancia de esta dimensión radica en que “[l]a confianza en las instituciones, es uno de los indicadores directos del éxito y la eficacia del Estado, de la administración pública y de las organizaciones de la sociedad civil”. En este sentido, esta dimensión permite medir “el nivel de confianza en varias instituciones pública y de la sociedad civil” (Hurtado et al., 2013, p. 205).

Tabla 7. *Variables de la dimensión Confianza Institucional*

Etiqueta	Variable
CFVLEGA	Confianza Legal
CFVGOBI	Confianza en el Gobierno
CFVPOLT	Confianza en la Política
CFVGRUP	Confianza en los Grupos
CFVMOVI	Confianza en los Movimientos
CFIGLE	Confianza en la Iglesia
CFVEDUC	Confianza en la Educación
CFVPOLI	Confianza en la Policía
CFVCOMP	Confianza en las Grandes Compañías
CFFARM	Confianza en las Fuerzas Armadas
CFVMEDI	Confianza en los Medios
HONLEY	Honestidad y Cumplimiento

CORRUP Corrupción (-)

Fuente: Hurtado et al. (2013, p. 206)

4.5.5. Control Social (CONTROLSOC).

Esta dimensión se basa en el hecho de que, desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, la soberanía “pasa de una nación abstracta al pueblo, que debe ejercer control sobre el Estado”. Busca inferir el control social de la sociedad al Estado, por medio de la confianza en instituciones que controlan al Estado”.

Tabla 8. *Variables de la dimensión Control Social*

Etiqueta	Variable
CFVCENTRE	Confianza en las instituciones que ejercen control sobre el Estado
CFVLEGA	Confianza Legal
CFVPOLT	Confianza en la Política
CFVGRUP	Confianza en los Grupos
CFVMEDI	Confianza en los Medios

Fuente: Hurtado et al. (2013, p. 214).

4.5.6. Participación Cívica (PARCIVIC).

Esta dimensión se refiere a la medida del capital social en el ámbito de la sociedad civil y a la esfera por fuera de lo público, es decir, lo no estatal. Principalmente, hace referencia a la pertenencia activa y no activa en diferentes organizaciones y actividades (Hurtado et al., 2013, p. 221).

Tabla 9. *Variables de la dimensión Participación Cívica.*

Etiqueta	Variable
OVTOT	Pertenencia a organizaciones voluntarias (OV) seculares
ACTVLOC	Actividades Localidad
ACTVCIV	Actividades Cívicas
ACTVMED	Actividades Medios
TRAVOLUN	Trabajo Voluntario

Fuente: Hurtado et al. (2013, p. 222).

4.5.7. Participación Política (PARPOL).

Esta dimensión contempla “aspectos centrales del ejercicio de la democracia participativa [...] y la representativa”; así mismo, considera las actividades relacionadas con la política (votar,

protestar, ser elegido para ejercer un cargo público, etc.) y permite medir “la confianza en los partidos políticos, la pertenencia a un partido como organización voluntaria, actividades con partidos políticos [...] y las razones de voto referidas a partido” (Hurtado et al., 2013, pp. 237–238).

Tabla 10. *Variables de la dimensión Participación Política*

Etiqueta	Variable
HAPBOL	Habilidades Políticas
MECATOT	Mecanismos de Participación
VUTOTAL	Votación en los Últimos Cuatro Años
ESLABON	Eslabonamiento Legislativo
EJESLAB	Eslabonamiento Ejecutivo
ACTPOL	Actividades Políticas
PARTIDO	Partido

Fuente: Hurtado et al. (2013, p. 238).

4.5.8. Información y Transparencia (INFOTRAN).

Esta dimensión busca “identificar las creencias y opiniones asociadas a las fuentes y a la información con la que se cuentan para poder participar”. Se basa en el supuesto de que “para

participar se requiere de información válida y transparente, pues una ciudadanía mal informada o un Estado en el que la información es secreta, ambigua y confusa, son impedimento para generar racionalidad colectiva” (Hurtado et al., 2013, p. 264).

4.5.9. Republicanismo Cívico (REPUCIVICO).

Esta dimensión sirve como contraparte a la dimensión de Clientelismo. Por medio de ella, se puede relevar la “inconsistencia entre lo que [la ciudadanía] dice y lo que realmente [...] hace”, por lo cual se interpreta como el “mito de la ciudadanía”. En este sentido, busca establecer la brecha en la que “la gente se dice responsable de lo público y educado políticamente [...], pero no participa ni cívica ni políticamente” (Hurtado et al., 2013, p. 270).

Tabla 11. *Variables de la dimensión Republicanismo Cívico*

Etiqueta	Variable
EDUPOLIT	Educación Política
RESPPUB	Responsabilidad por lo Público
POLITCIUD	Politización de la Ciudadanía
PARTICUL	Particularismo (-)
CLIENT	Clientelismo (-)

Fuente: Hurtado et al. (2013, pp. 271–272).

4.5.10. Medios (MEDIOS).

Esta dimensión se enfoca hacia las “actividades, opiniones y confianza de la ciudadanía con respecto a los medios de comunicación”. Se considera que los medios de comunicación son “uno de los elementos más importante[s] para el éxito de las democracias modernas” y, además, que la “libertad de expresión debe siempre fomentarse y apoyarse”. Por otro lado, “[e]l carácter informativo es fundamental, por ejemplo, para aumentar la transparencia en la Administración Pública, para la formación de opinión y para llamar a cuenta a representantes y funcionarios de las ramas de poder” (Hurtado et al., 2013, p. 285).

Tabla 12. *Variables de la dimensión Medios*

Etiqueta	Variable
CFVMEDI	Confianza en los Medios
ACTMEDI	Actividad Medios
ACTLEER	Actividad Leer

Fuente: Hurtado et al. (2013, p. 285).

4.6. Procedimiento

La presente investigación contó con tres fases: En la Fase 1, se estableció contacto con líderes o gestores de paz de los municipios de Sincelejo y Tolú Viejo, donde, por medio de una reunión consensuada con la comunidad, los líderes y algunos jóvenes, se realizó la socialización del propósito de la investigación y se obtuvo la autorización comunitaria para la recolección de datos con esta población. Dichas reuniones tuvieron lugar en la “casa comunal” de cada municipio.

Posteriormente, en la Fase 2, se identificó a aquellos jóvenes residentes de los municipios seleccionados que tuviesen la característica de ser reconocidos como víctimas de desplazamiento por el RUV y haber retornado a su lugar de origen o encontrarse en proceso de retorno.

En la Fase 3, que tuvo una duración aproximada de cuatro semanas, se recolectaron los datos; esta recolección se realizó puerta a puerta en los hogares de los jóvenes mediante el empleo de dos cuestionarios heteroaplicados de lápiz y papel. La aplicación de los instrumentos estuvo a cargo de un grupo de profesionales en el área de ciencias sociales y humanísticas y el tiempo de aplicación total aproximado fue de tres horas.

Por último, la cuarta fase consistió en el análisis de los resultados a la luz del cumplimiento de supuestos como la normalidad, lo cual definió el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas. Luego, se realizaron comparaciones en razón de diferentes categorías de agrupación como el sexo o el estado civil. Del mismo modo, se buscó dar cuenta de las interrelaciones e intrarelaciones existentes entre los resultados de la muestra en las diferentes dimensiones que componen el cuestionario BARCAS y la prueba CDPC. Así, se dio cuenta de la interacción entre los constructos

de conflicto social y disposición psicosocial al conflicto por medio del uso del software de análisis estadístico de datos cuantitativos SPSS versión 23.

4.7. Consideraciones éticas

Siguiendo lo contemplado para la investigación con participantes humanos en el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo (Ley 1090 de 2006), la presente investigación propendió por el respeto a la dignidad y el bienestar de los participantes, que actuaron en pleno conocimiento de los objetivos y las implicaciones de la investigación, fundamentado en los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad.

Los sujetos firmaron un consentimiento informado, donde aceptaban su participación, teniendo presente su voluntariedad y la posibilidad de conocer los resultados del estudio en un futuro.

4.8. Análisis estadístico

Para llevar a cabo el análisis de los datos recolectados, se procedió a utilizar el software estadístico IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versión 23. Así, en primera instancia, se procedió a realizar un análisis factorial exploratorio para corroborar los factores propuestos por los respectivos autores en planteamientos previos. Luego, se realizó un análisis descriptivo de los resultados respecto a los constructos evaluados y se finalizó con la aplicación de un análisis basado en correlaciones existentes para dar cuenta de la relación entre los constructos que componen el capital social y la disposición psicosocial frente al conflicto.

Inicialmente se realizó la calificación de los cuestionarios BARCAS, convirtiendo los puntajes brutos a puntajes calificadorios, de acuerdo con lo que está consignado en el manual de la prueba de Hurtado et al. (2013).

Entonces, se ejecutó un análisis factorial de componentes principales teniendo en cuenta los puntajes brutos de los ítems de ambos instrumentos, así permitiendo comparar los resultados de estos con las postulaciones iniciales de los autores. Por otro lado, con los datos de las calificaciones de las pruebas, se procedió a realizar una serie de análisis básicos entre los cuales están la comprobación de la normalidad, el cálculo de los puntajes totales de las pruebas (dividiendo por variables, dimensiones y factores para la correspondiente prueba), comparación de resultados en razón de variables de agrupación, y, por último, la realización de correlaciones en función de dar cuenta de las relaciones teóricas entre elementos pertenecientes al capital social

dado por los puntajes del cuestionario BARCAS, y la disposición psicosocial al post conflicto dado por los resultados de la prueba CDPC.

Cabe mencionar que, para el caso del CDPC, el análisis factorial buscó dar cuenta de los factores planteados por medio del método de análisis de componentes principales, de igual manera se realizó un segundo análisis con rotación varimax, tal cual como lo hacen los autores originales de la prueba. Para este, se seleccionaron los factores con auto valores superiores a 1, permitiéndonos ver los pesos factoriales de cada ítem a un factor.

Los análisis de normalidad dieron cuenta de que la gran mayoría de las variables no se distribuyeron de manera normal, lo que implicó el análisis mediante pruebas no paramétricas. Por ello, para las comparaciones se utilizaron los estadísticos W de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. Por otro lado, para las correlaciones se utilizó el coeficiente Rho de Spearman junto con su correspondiente prueba de significación, esto para evitar las correlaciones espurias.

5. Resultados

5.1. Análisis factorial

En primera medida, se realizó un análisis factorial para dar cuenta de agrupaciones o factores subyacentes en el cuestionario BARCAS, esto debido a que no se evidencia la realización previa de este tipo de análisis en el manual de calificación del mismo. De igual manera, ejecutamos esta prueba a los ítems de la prueba CDPC, en función de corroborar la existencia de los trece factores propuestos por Álzate et al. (2009).

En el caso del cuestionario Barcas fue imposible ejecutar dicho análisis factorial, debido a que el software IBM SPSS versión 23 reconoce como casos aquellas pruebas respondidas a totalidad; lastimosamente, en nuestro caso, todos los cuestionarios diligenciados contaban con ítems faltantes o sin responder. Por ende, el programa no pudo ejecutar dicho análisis dado que no contaba con un número de casos insuficiente para ello.

Hay menos de dos casos, como mínimo, una de las variables tiene una varianza cero, sólo hay una variable en el análisis, o los coeficientes de correlación no se han podido calcular para todas las parejas de variables. No se calcularán estadísticos adicionales.

Figura 6. Observación del SPSS para el análisis factorial para el cuestionario BARCAS.

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, para la prueba CDPC, se buscó realizar un análisis similar, pero, en función de corroborar la existencia de los trece factores que le componen, tal como se indicó previamente. Para ello, se intentó realizar el cálculo del índice KMO o Kaiser-Meyer-Olkin, un estadístico que se utiliza para comparar magnitudes de coeficientes de correlación parcial, permitiéndonos afirmar si es o no recomendable la realización de un análisis factorial (De la Fuente, 2011). Pudo observarse que el número de casos afectó dicho análisis, así como en el caso anterior, lo cual impidió el cálculo del índice KMO. De igual manera, fue posible ejecutar un análisis factorial muy básico con los 28 casos con los cuales se contó.

Dicho análisis factorial realizado a través de un análisis de componentes principales nos permite evidenciar la existencia de los 12 factores, así contradiciendo el planteamiento inicial de Álzate et al. (2009), en el cual se da cuenta de 13 factores que componen la prueba. Cabe resaltar que este hecho se mantiene de igual manera al aplicar a los datos la rotación varimax, tal como, lo hacen los autores principales del instrumento.

Tabla 13. *Matriz de componentes principales – Análisis factorial prueba CDPC*

	Componente											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REC_21	,837	,036	-,095	-,135	,125	-,086	-,100	,267	-,016	,053	-,172	,177
REC_27	,834	-,056	-,081	,002	-,247	-,079	,010	-,025	-,206	-,109	,172	-,009
REC_36	,829	-,004	-,092	,133	-,026	-,040	-,101	,078	,093	-,139	,160	,007
REC_7	,796	,231	,007	,188	,170	-,181	-,025	-,261	-,104	,250	,085	-,045
REC_38	,791	,124	,083	-,165	,111	,217	-,022	-,199	-,094	-,136	,056	-,009
REC_6	,782	,245	,003	-,225	-,063	-,081	-,105	,181	-,185	,161	,124	-,008
REC_23	,776	-,150	-,266	-,159	,087	,237	,262	-,150	,046	,069	-,099	,104
REC_25	,758	-,012	-,026	,406	,134	,074	,164	,029	-,182	,174	-,157	-,094
REC_33	,751	-,191	,353	-,059	,120	,004	,107	-,237	-,113	-,158	,201	-,068
REC_5	,709	,269	-,100	-,312	,246	-,243	,136	-,212	-,024	,184	,059	,092
REC_1	-,697	-,206	,246	,217	-,032	-,051	-,356	,117	,035	,112	,099	,019
REC_14	,684	,255	,081	,182	,109	-,406	-,092	,024	-,107	,081	,171	,131

REC_19	,683	-,374	,015	-,019	,121	,186	-,350	,013	,173	-,021	,115	-,115
REC_39	,679	,249	-,388	,243	-,068	,159	-,306	-,126	,108	,124	-,072	,018
REC_47	-,661	,210	-,003	,120	-,306	,107	,188	,146	,175	,122	,210	,111
REC_16	,655	,167	,298	-,115	,208	-,177	-,081	-,137	,258	-,075	,004	-,029
REC_11	,636	,153	,217	-,284	-,073	,306	-,103	,308	-,127	-,201	,008	,324
REC_20	,625	,049	,242	-,259	-,180	,105	-,247	,378	-,049	,076	-,126	-,151
REC_2	-,564	,269	-,169	-,433	-,379	-,118	-,154	-,108	-,258	,055	,101	,022
REC_15	,533	-,095	,175	,446	-,372	,069	,003	,204	,078	,244	,021	,169
REC_8	,523	-,474	-,114	,435	,125	,115	,021	,213	-,191	,096	-,016	,189
REC_10	,051	,704	,485	,072	-,040	-,008	-,197	-,156	,032	,079	-,017	,100
REC_22	,321	,625	-,177	,144	,089	,287	,435	,043	,084	-,164	,116	-,171
REC_32	,289	-,615	,148	-,200	-,042	,030	,124	-,311	,318	,167	-,033	-,019
REC_13	,288	,607	,385	,253	,226	,151	,184	,128	-,002	-,047	-,362	,078
REC_43	-,469	,599	,387	,136	,266	-,092	,042	,051	-,032	,058	,075	-,034
REC_24	,517	,549	-,176	,123	-,095	,223	-,008	-,156	,257	-,161	,121	-,029
REC_46	-,382	,539	,451	-,358	,197	-,192	,020	,002	-,065	,097	,041	,180

REC_9	,209	,492	,232	-,451	-,324	-,234	,125	-,278	-,053	-,249	-,218	-,035
REC_31	,141	-,416	,679	,025	-,054	-,139	-,107	-,029	,188	,022	,098	-,231
REC_37	,043	-,273	,610	-,254	-,244	-,009	-,227	-,241	-,096	,200	-,022	,206
REC_12	,364	,155	,579	-,371	,051	,082	,241	,279	,056	-,023	-,064	-,238
REC_30	-,035	,222	,561	,391	-,237	-,124	,081	-,214	,185	,134	,168	,214
REC_34	,106	-,488	,537	-,231	-,058	,169	,068	-,024	,361	-,139	,045	,103
REC_3	-,411	,353	-,517	,033	,317	,109	-,082	-,213	,424	-,063	,086	,147
REC_29	,066	,361	,176	,774	-,070	,051	-,076	-,165	,051	,176	,073	-,029
REC_17	,290	-,286	,353	,466	-,052	-,130	,027	-,071	,231	-,429	-,317	-,015
REC_26	,310	,084	-,093	-,432	-,259	,320	,411	,107	,151	,354	,043	,048
REC_35	,407	-,467	,231	-,042	,543	,010	-,016	-,085	-,196	,042	,175	-,023
REC_4	-,486	,094	,116	,074	,501	,341	-,379	-,018	-,202	-,180	-,063	,164
REC_42	-,431	,001	,260	-,318	,447	,346	,031	,207	,209	,017	,306	,220
REC_41	-,183	,010	-,022	-,021	,319	-,704	,165	,310	,106	-,173	-,001	-,010
REC_44	,313	-,130	-,205	,060	,084	-,451	,172	,410	,350	,195	-,033	,171
REC_40	-,365	-,282	,235	,279	,125	,054	,516	-,042	-,317	,024	,347	-,129

REC_28	-,357	-,278	,324	,259	-,057	,112	,397	-,132	-,247	-,069	-,278	,343
REC_45	-,405	,266	,398	,063	,197	,263	-,106	,147	,051	,421	-,231	-,376
REC_18	,173	,278	,236	,288	-,352	,087	-,058	,359	-,051	-,390	,311	-,054

Nota: Análisis de componentes principales. Se ha encontrado la existencia de 12 componentes extraídos.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. *Matriz de componentes rotados varimax – Análisis factorial prueba CDPC*

	Componente											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REC_7	,857	,108	-,072	,330	,067	-,201	-,115	,025	,010	,049	,018	-,111
REC_5	,848	-,195	-,073	,009	,077	,011	-,201	,248	,074	-,057	,171	-,066
REC_38	,794	-,011	,164	-,044	,174	,010	,140	,084	,099	-,042	-,275	,024
REC_33	,762	,043	,456	,028	-,004	-,057	,142	-,014	-,229	-,099	-,127	,030
REC_6	,760	-,019	-,124	,003	-,086	-,085	,321	,274	,162	,063	,053	-,178
REC_21	,749	,216	-,012	-,133	-,031	-,044	,192	,167	,379	,023	,227	,090

REC_14	,735	,036	-,115	,347	-,050	-,102	,157	-,078	,048	-,070	,299	-,084
REC_47	-,718	-,125	-,179	,291	,088	,146	,076	,237	-,121	-,042	,029	-,052
REC_27	,703	,137	,053	-,011	-,002	-,345	,332	,150	,012	-,284	-,063	-,074
REC_16	,671	-,151	,371	,167	,120	,031	,023	-,053	,204	,078	,148	-,069
REC_23	,667	,272	,128	-,219	,224	-,102	-,142	,400	,123	-,166	-,116	,151
REC_36	,666	,280	,138	,072	,183	-,165	,280	,026	,193	-,197	,074	-,140
REC_25	,660	,472	-,037	,150	,157	-,313	,045	,069	-,055	,192	-,006	,187
REC_1	-,660	,087	,037	,191	-,387	,189	-,003	-,319	-,062	,110	,004	-,145
REC_35	,552	,326	,318	-,190	-,214	,245	-,130	-,183	-,325	,047	,002	,000
REC_39	,533	,317	-,209	,193	,250	-,235	-,019	,053	,493	-,077	-,199	-,171
REC_19	,529	,443	,412	-,142	-,040	-,001	,101	-,045	,243	-,048	-,144	-,272
REC_9	,279	-,821	,061	,026	,065	-,252	,132	,120	,159	-,020	-,057	,158
REC_8	,368	,787	,028	-,014	-,116	-,105	,110	-,008	-,067	-,112	,050	,211
REC_46	-,071	-,684	-,139	,220	-,166	,461	-,007	-,005	-,067	,278	,151	,081
REC_2	-,417	-,578	-,414	-,120	-,281	-,007	,003	,111	,012	-,147	-,177	-,205
REC_15	,239	,468	,138	,460	-,105	-,277	,328	,268	,135	-,020	,028	,094

REC_34	-,033	,027	,819	-,050	-,164	,201	,098	,136	-,003	-,068	-,044	,117
REC_31	,063	,033	,733	,161	-,323	-,074	,127	-,122	-,165	,182	,053	-,125
REC_32	,165	,178	,664	-,120	-,182	-,114	-,339	,259	-,015	-,151	-,055	-,022
REC_17	,089	,206	,560	,189	,132	-,334	,141	-,397	,091	-,048	,119	,375
REC_30	-,063	-,143	,232	,808	-,072	-,009	,074	,011	-,110	-,012	,015	,114
REC_29	,016	,220	-,141	,787	,206	-,170	,023	-,204	-,038	,163	-,127	,002
REC_10	,177	-,461	-,078	,613	,025	,154	,146	-,089	,191	,292	-,134	,043
REC_43	-,223	-,403	-,224	,418	,113	,341	,025	-,222	-,193	,416	,120	,036
REC_22	,284	-,086	-,228	,146	,795	,010	,181	,220	-,092	,122	-,059	,040
REC_37	,077	-,196	,424	,182	-,657	,055	,020	,088	,024	,004	-,253	,096
REC_24	,408	-,074	-,076	,289	,591	-,060	,151	,116	,302	-,101	-,189	-,134
REC_3	-,308	-,079	-,303	,054	,497	,367	-,453	-,120	,269	-,189	,022	-,186
REC_42	-,274	-,063	,154	-,093	,019	,867	-,012	,085	-,122	,129	,008	-,040
REC_4	-,239	,027	-,195	-,067	-,049	,585	-,069	-,528	,036	,191	-,298	,155
REC_18	-,003	-,005	,011	,281	,207	-,064	,785	-,096	-,040	-,066	-,028	-,069
REC_11	,547	,000	,083	-,091	-,035	,251	,577	,230	,298	-,037	-,140	,219

REC_20	,467	,043	,173	-,130	-,180	-,115	,487	,219	,328	,311	-,032	-,100
REC_26	,166	-,045	,053	-,113	,113	,024	,029	,854	,054	,045	-,085	-,008
REC_40	-,256	,144	,056	,079	-,010	,070	-,016	-,022	-,867	,014	-,026	,128
REC_45	-,319	-,065	-,013	,180	-,045	,165	-,097	-,008	-,021	,843	-,138	-,071
REC_13	,324	-,124	-,074	,373	,347	,097	,193	-,043	,135	,497	,044	,474
REC_12	,343	-,285	,406	-,086	,046	,098	,367	,272	-,084	,473	,100	,084
REC_41	-,062	-,175	-,045	-,120	,012	,037	-,034	-,271	-,143	-,006	,805	-,006
REC_44	,168	,278	,035	,010	,011	-,078	-,031	,232	,180	-,083	,742	-,039
REC_28	-,331	,064	,111	,128	-,182	,000	-,086	-,031	-,339	-,052	-,102	,718

Nota: Análisis de componentes principales con rotación varimax y normalización de Kaiser. Se ha encontrado la existencia de 12 componentes extraídos.

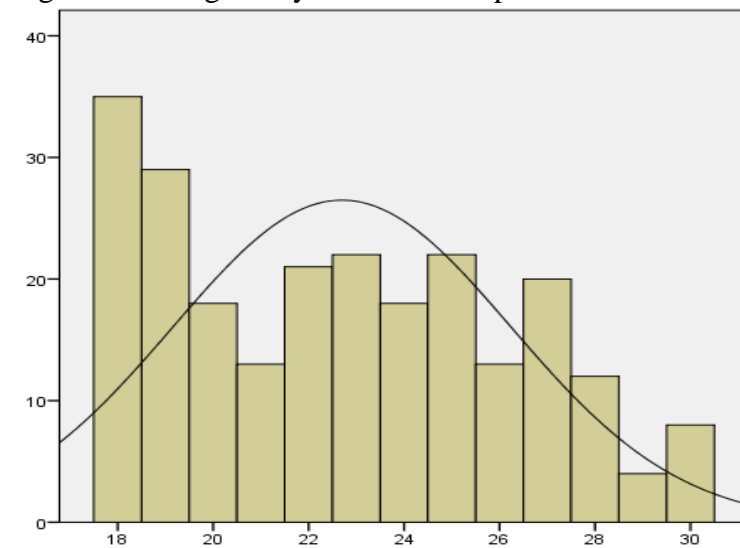
Fuente: Elaboración propia

5.2. Análisis de normalidad

Dada la naturaleza y cantidad de los datos recolectados, para determinar si los mismos presentaban distribuciones similares a la normal, se hizo uso de la prueba K-S o Kolmogorov-Smirnov y sus respectivas graficas generadas mediante el software IBM SPSS Statistics.

La primera variable analizada fue la edad, la cual—se halló—no se distribuye de manera normal, esto afirmado en base al valor de significancia obtenido en la prueba K-S ($p < 0.05$), así como en la información aportada por las gráficas de apoyo, las cuales permiten evidenciar gran parte de los datos agrupados a un lado de la curva correspondiendo a una mayor cantidad de individuos con edades entre 18 y 20 años; dicha información puede verse reflejada en la Figura 7.

Figura 7. Histograma y curva normal para la variable edad. Fuente: Elaboración propia a través



del software IBM SPSS

Continuando, para aquellas variables correspondientes a la prueba CDPC, pudo observarse que ninguna de sus dimensiones presentó una distribución normal ($p < 0,05$); esto acorde con lo evidenciado por los resultados de la prueba K-S ejecutada, los cuales son presentados en la Tabla 15.

Tabla 15. *Resultados de la prueba K-S para las dimensiones correspondientes a la prueba CPDC*

	ESTADÍSTICO	SIGNIFICANCIA
RECONCILIACIÓN SOCIAL	,199	,000
COSTES DEL CONFLICTO	,148	,000
ACTITUD ETNOCENTRICA	,114	,000
ACTITUD NEGOCIADORA	,131	,000
DIFERENCIAS INTERGRUPALES	,180	,000
AMENAZA PERCIBIDA	,167	,000
VENTAJA PARA LOS VIOLENTOS	,136	,000
CONFIANZA	,100	,000
IMPOSICIÓN AUTORITARIA	,156	,000

LEGITIMIDAD	,191	,000
IMAGEN NEGATIVA	,119	,000
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES	,205	,000
CONOCIMIENTO DEL OTRO	,240	,000

Fuente: Elaboración propia a través del software IBM SPSS Statistics

Por último, para las variables, dimensiones y factores principales derivados del cuestionario BARCAS, pudo observarse que, a excepción del factor K-social ($p > 0,05$), todos los elementos constituyentes de dicha prueba presentaron valores de significancia menores al valor crítico, por ende, permitiéndonos afirmar que los ya mencionados elementos no presentan una distribución normal o similar ($p < 0,05$). Lo expuesto anteriormente puede verse a través de la Tabla 16.

Tabla 16. *Resultados de la prueba K-S para los elementos pertenecientes al cuestionario**BARCAS*

	ESTADÍSTICO	SIG.
SOLIDARIDAD Y MUTUALIDAD	,069	,009
RELACIONES HORIZONTALES	,104	,000
JERARQUIA	,069	,008
CONFIANZA INSTITUCIONAL	,102	,000
CONTROL SOCIAL	,084	,000
PARTICIPACIÓN CÍVICA	,298	,000
PARTICIPACIÓN POLÍTICA	,086	,000
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA	,106	,000
REPUBLICANISMO CÍVICO	,118	,000
MEDIOS	,191	,000
KSOCIAL (TOTAL)	,053	,200*
CONFÍE (TOTAL)	,082	,001

FENOVAL (TOTAL)	,086	,000
-----------------	------	------

Nota: * Valores en base a un alfa establecido de 0,05

Fuente: Elaboración propia

5.3. Comparaciones de medianas entre categorías de agrupación

A partir de la información extraída del anterior análisis, puede asumirse que los datos recolectados no cumplen con el supuesto de normalidad, claro está, exceptuando el factor K-social del cuestionario BARCAS. Es por ello que para la realización de las pruebas de contraste de hipótesis debe acudir al uso de pruebas no paramétricas, dado que estas no dependen del supuesto de normalidad para su correcta ejecución; sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas son sensibles a los diferentes tamaños de los grupos que conforman la muestra, asimismo, no nos permiten hacer hallazgos tan profundos como sí lo permiten las pruebas paramétricas.

Con el fin de comparar y hallar diferencias significativas entre los puntajes observados en razón de las categorías o agrupaciones que caracterizaron a la muestra, se hizo uso de dos pruebas no paramétricas. Inicialmente, se compararon los resultados de las diferentes pruebas buscando hallar diferencias entre aquellos puntajes presentados por hombres y mujeres, para ello se hizo uso de la prueba W de Mann-Whitney; dicha prueba tiene como función establecer si dos agrupaciones

proviene de poblaciones con medianas similares, así determinando la existencia de diferencias entre grupos en razón de la mediana de estos.

Los resultados derivados de la prueba anteriormente mencionada nos permiten afirmar que para la segmentación de resultados por sexo de los participantes, pueden hallarse diferencias significativas de medianas para elementos como, la dimensión de Imagen Negativa perteneciente al CDPC y para las variables Atomización, Alienación, Actividades con los Compañeros de Trabajo, Actividades con los Vecinos, Confianza en el gobierno, Honestidad y Cumplimiento, Confianza en el Sistema Legal, Confianza en las Instituciones que Hacen Control al Estado, Mecanismos de Control de la Sociedad, Pertenencia a Organizaciones Voluntarias Seculares, Actividades Locales, Actividades Cívicas, Habilidades Políticas, Mecanismos de Participación, Actividades Políticas, Politización de la Ciudadanía y Clientelismo, pertenecientes al cuestionario de BARCAS; esto conforme a los valores p menores al valor crítico ($p < 0,05$).

Tabla 17. *Resultados de la comparación de puntajes en razón del sexo de los participantes*

	U DE MANN- WHITNEY	SIG. ASINTÓTICA (BILATERAL)
IMAGEN NEGATIVA	5443,000	,045
ATOMIZACIÓN (-)	5316,000	,024
ALIENACIÓN (-)	5170,500	,009

ACTIVIDADES CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO	3695,000	,000*
ACTIVIDADES CON LOS VECINOS	5619,000	,025
CONFIANZA EN EL GOBIERNO	5209,500	,011
HONESTIDAD Y CUMPLIMIENTO	5491,000	,031
CONFIANZA EN EL SISTEMA LEGAL	4825,000	,001*
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES QUE HACEN CONTROL AL ESTADO	5152,000	,010
MECANISMOS DE CONTROL DE LA SOCIEDAD	4242,500	,000
PERTENENCIA A ORGANIZACIONES VOLUNTARIAS SECULARES	4767,500	,001*
ACTIVIDADES LOCALES	5349,000	,016
ACTIVIDADES CÍVICAS	5632,500	,050

HABILIDADES POLÍTICAS	4915,500	,002
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	4294,000	,000*
ACTIVIDADES POLÍTICAS	5304,500	,019
POLITIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA	5076,000	,006
CLIENTELISMO (-)	5323,500	,022

Nota: *Valores significativos a un alfa establecido de 0,001

Fuente: Elaboración propia

De manera similar, pudo observarse que, al comparar los puntajes obtenidos en las pruebas, en razón del sexo de los participantes, hay presencia de diferencias significativas para las dimensiones Relaciones Horizontales, Confianza Institucional, Control Social, Participación Cívica y Participación Política pertenecientes al cuestionario BARCAS, así mismo, en los factores principales K-social y Confíe.

Tabla 18. *Diferencias en los puntajes obtenidos en el cuestionario BARCAS en razón del sexo de los participantes*

	U DE MANN- WHITNEY	SIG. ASINTÓTICA (BILATERAL)
(KSOCIAL)RELACIONES HORIZONTALES	4694,000	,000*
(CONFÍE)CONFIANZA INSTITUCIONAL	4849,000	,001*
(CONFÍE)CONTROL SOCIAL	4246,000	,000*
(CONFÍE)PARTICIPACIÓN CÍVICA	4639,500	,000*
(CONFÍE)PARTICIPACIÓN POLÍTICA	4850,000	,002
KSOCIAL	5108,500	,008
CONFÍE	4235,500	,000*

Nota: * Valores significativos con un alfa establecido de 0,001

Fuente: Elaboración propia

Para las diferencias presentadas por agrupaciones con más de dos categorías fue necesaria la aplicación de la prueba Kruskal-Wallis, la cual parte de una premisa similar a la anterior, pero

permite realizar dichos análisis a más de dos grupos. Así, valiéndonos de dicha prueba, logramos observar que, para categorías derivadas del grado de escolaridad de los participantes se presentan diferencias significativas en las dimensiones Reconciliación Social, Costes del Conflicto, Actitud Negociadora y Ventaja para los Violentos pertenecientes al CDPC.

Tabla 19. *Diferencias presentadas en las dimensiones de la prueba CDPC en razón de la escolaridad de los participantes*

	RECONCILIACIÓN SOCIAL	COSTES DEL CONFLICTO	ACTITUD NEGOCIADORA	VENTAJA PARA LOS VIOLENTOS
SIG. ASINTÓTICA	,000*	,031	,006	,037

Nota: *Valores significativos a un alfa establecido de 0,001

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las variables pertenecientes al cuestionario BARCAS, para estas agrupaciones pudieron encontrarse diferencias significativas en Manejo del Conflicto, Confianza en la iglesia, Confianza en Grandes Compañías, Mecanismos de Control de la Sociedad, Habilidades políticas,

Mecanismos de participación, Particularismo, Responsabilidad por el Éxito de lo Público y Actividad Leer.

Tabla 20. *Diferencias en las variables del cuestionario BARCAS en razón de la escolaridad de los participantes*

	SIG. ASINTÓTICA
MANEJO DEL CONFLICTO	,000*
CONFIANZA EN LA IGLESIA	,004
CONFIANZA EN GRANDES COMPAÑÍAS	,039
MECANISMOS DE CONTROL DE LA SOCIEDAD	,040
HABILIDADES POLÍTICAS	,001*
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	,008
PARTICULARISMO (-)	,007
RESPONSABILIDAD POR EL ÉXITO DE LO PÚBLICO	,042
ACTIVIDAD LEER	,005

Nota: *Valores significativos con un alfa establecido de 0,001

Fuente: Elaboración propia

Así, en razón de la escolaridad pudieron verse otras diferencias, por ejemplo, en la dimensión de Participación Política del cuestionario BARCAS ($P=0,019$); siendo esta la última diferencia observada entre este tipo de categorías, dado que contrario a esta dimensión, el resto de las dimensiones e inclusive los factores principales del cuestionario BARCAS no presentaron diferencias significativas.

Por otro lado, para las agrupaciones por situación laboral, pudieron encontrarse diferencias significativas para las dimensiones Reconciliación Social e Imagen Negativa, pertenecientes al CDPC, mientras que para el cuestionario BARCAS, se hallaron diferencias significativas en las variables Alienación, Actividades con los Compañeros de Trabajo, Corrupción, Confianza en Grandes Compañías, Rendición de Cuentas, Mecanismos de Control de la Sociedad, Mecanismos de Participación, Votación, Eslabonamiento Legislativo, Eslabonamiento Ejecutivo, Actividades Políticas, Politización de la Ciudadanía y Actividad Leer, asimismo, para las dimensiones Control Social y Participación Política y para los factores principales K-social y Confíe.

Tabla 21. *Diferencias en los puntajes de los elementos constituyentes de las pruebas CDPC y cuestionario BARCAS, en razón de la situación laboral de los participantes*

	SIG. ASINTÓTICA
RECONCILIACIÓN SOCIAL	,049
IMAGEN NEGATIVA	,037
ALIENACIÓN (-)	,000
ACTIVIDADES CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO	,000
CORRUPCIÓN (-)	,037
CONFIANZA EN GRANDES COMPAÑÍAS	,003
RENDICIÓN DE CUENTAS	,003
MECANISMOS DE CONTROL DE LA SOCIEDAD	,011
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	,005
VOTACIÓN	,000
ESLABONAMIENTO LEGISLATIVO	,000

ESLABONAMIENTO EJECUTIVO	,000
ACTIVIDADES POLÍTICAS	,013
POLITIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA	,033
ACTIVIDAD LEER	,001
(CONFÍE)CONTROL SOCIAL	,023
(CONFÍE)PARTICIPACIÓN POLÍTICA	,001
KSOCIAL	,035
CONFÍE	,008

Nota: *Valores significativos a un alfa establecido de 0,001

Fuente: Elaboración propia

Por último, otras agrupaciones como las relacionadas al estado civil y el estrato socio económico no presentaron diferencias con respecto a las dimensiones de la prueba CDPC, de las dimensiones del cuestionario BARCAS o los factores principales del mismo. Siendo las únicas diferencias presentadas para estas agrupaciones, las halladas en razón del estado civil para las variables Actividades con los Vecinos, Rendición de Cuentas, Habilidades Políticas, Votación, Eslabonamiento Legislativo y Eslabonamiento Ejecutivo, pertenecientes al cuestionario BARCAS.

Tabla 22. *Diferencias en presentadas en los elementos del cuestionario BARCAS en razón del estado civil de los participantes*

ACTIVIDAD	RENDIMIENTO	HABILIDADES	VOTACIÓN	ESLABONAMIENTO LEGISLATIVO	ESLABONAMIENTO EJECUTIVO
ADES CON LOS VECINOS	IÓN DE CUENTAS	ADES POLÍTICAS			
SIG.					
ASINTÓTICA	,004	,019	,007	,000*	,000*
ICA					

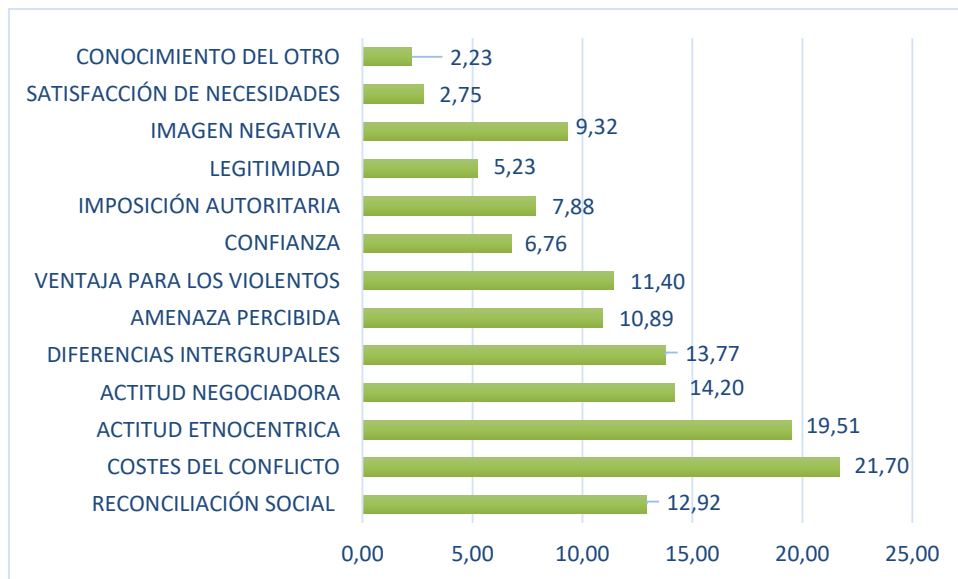
Nota: *Valores significativos a un alfa establecido de 0,001

Fuente: Elaboración propia

5.3.1. Cuestionario de Disposición Psicosocial Frente al Conflicto (CDPC).

Tal como se puede observar en la siguiente gráfica, en la muestra de jóvenes se encuentran puntuaciones altas en las dimensiones: Costes del Conflicto, Actitud Etnocéntrica, Actitud Negociadora y Diferencias Intergrupales. Mientras que las puntuaciones más bajas, se

observan en las dimensiones Conocimiento del Otro, Satisfacción de Necesidades, Legitimidad y Confianza.



Gráfica 1. Relación de promedio de resultados por dimensión para la prueba CDPC. Fuente:

Elaboración propia

De otro lado, como se mencionó previamente, dado a que en gran cantidad de los elementos analizados se presentó una distribución diferente a la normal, se optó por el uso de pruebas no paramétricas. Para esta sección los resultados dan cuenta de lo obtenido mediante la prueba Rho de Spearman, la cual da cuenta de un coeficiente que permite dar una medida de asociación entre variables de estudio.

Dicha prueba permite definir las relaciones halladas como positivas o negativas con valores acorde a valores del coeficiente entre 1 y -1, siendo los valores cercanos a uno relaciones positivas y los cercanos a -1, relaciones negativas. Cabe resaltar que las relaciones aquí presentadas son sólo aquellas que son valoradas como significativas, esto en función de evitar establecer como reales, correlaciones espurias.

De esta manera, mediante la aplicación del Rho de Spearman pudieron identificarse para las dimensiones del CDPC muy variadas relaciones tanto positivas, como negativas, siendo estas en su mayoría significativas, pero con valores bajos a medios. Específicamente, para la dimensión Reconciliación Social se hallaron relaciones negativas con las variables Costes del Conflicto, Diferencias Intergrupales, Amenaza Percibida y Ventaja para los Violentos; por el contrario, se hallaron relaciones positivas con Conocimiento del Otro, Satisfacción de Necesidades, Legitimidad, Imposición Autoritaria, Confianza y Actitud Negociadora.

La dimensión Costes del Conflicto tuvo relaciones negativas con Actitud Negociadora, Confianza, Legitimidad, Satisfacción de Necesidades y Conocimiento del Otro; por otro lado, tuvo relación positiva con el resto de las dimensiones, exceptuando Imagen Negativa, Imposición Autoritaria y Ventaja para los Violentos, con las cuales no tuvo ninguna relación significativa.

Para la dimensión de Actitud Etnocéntrica se observaron relaciones positivas con todas las dimensiones, exceptuando Legitimidad, Actitud Negociadora y Conocimiento del Otro, las cuales no presentaron relación alguna con esta. Por su parte, la variable Actitud Negociadora sólo se relacionó de manera negativa con Diferencias Intergrupales y Amenaza Percibida. Entonces,

presentando relaciones significativas positivas con las dimensiones Confianza, Legitimidad Satisfacción de Necesidades.

La siguiente variable, Diferencias Intergrupales, adicionalmente a las relaciones mencionadas previamente, presentó asociaciones negativas con otras 4 dimensiones; a saber: Confianza, Legitimidad, Satisfacción de Necesidades y Conocimiento del Otro; por el contrario, presentó una relación positiva, pero baja, con Amenaza Percibida.

Las dimensiones restantes, a saber, Amenaza Percibida, presentó relaciones significativas, pero bastante bajas, siendo la más fuerte con Ventaja para los Violentos, para la cual tuvo un coeficiente de correlación de 0,435 con una significancia de 0,00. mientras que la dimensión de Ventajas para los Violentos, además de las relaciones ya mencionadas, sólo presentó otra relación con la dimensión de Legitimidad, aunque esta fue realmente baja.

La dimensión Confianza fue la que más relaciones tuvo, siendo la única dimensión con la que no relaciono, Ventaja para los Violentos. Por otro lado, la dimensión Imposición Autoritaria presentó relaciones positivas con las demás dimensiones evaluadas, exceptuando Costes del Conflicto, Confianza, Diferencias Intergrupales y Actitud Negociadora.

Por último, la dimensión Imagen Negativa, presentó pocas relaciones, siendo las más fuertes con Actitud Etnocéntrica e Imposición Autoritaria, con las cuales tuvo coeficientes de correlación superiores a 0,4.; en cuanto a las dimensiones de Satisfacción de Necesidades y Conocimiento del Otro, estas no presentaron correlaciones fuertes y significativas diferentes a las ya mencionadas.

5.3.2. Barómetro de Capital Social (BARCAS).

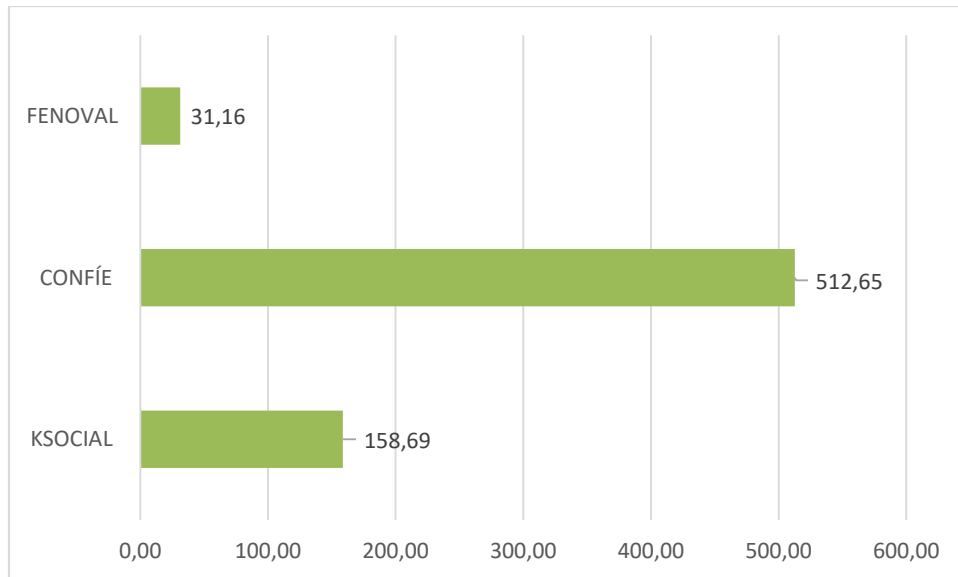
Debido a que el análisis realizado a esta prueba ocupa transversalmente este apartado, sólo resta señalar la comparación entre puntajes por cada dimensión y por cada factor.



Gráfica 2. Relación de promedio de resultados por dimensión para la prueba BARCAS. Fuente:

Elaboración propia

Como se puede apreciar en las gráficas, partiendo de un análisis por dimensión, encontramos puntuaciones altas en participación política, confianza institucional y control social; asimismo, se puede observar que las dimensiones con menores puntajes fueron información y transparencia, medios y republicanismo cívico. Por otro lado, se destaca la puntuación de Confianza en el análisis por factores.



Gráfica 3. Relación de promedio de resultados por factor para la prueba BARCAS. Fuente:

Elaboración propia

5.4. Correlaciones entre dimensiones pertenecientes a la prueba CDPC y el Cuestionario

Continuando con la descripción de las relaciones presentadas, al relacionar las diferentes dimensiones que componen tanto el cuestionario BARCAS, como la prueba CDPC, podemos observar que para la dimensión Solidaridad y Mutualidad del cuestionario mencionado, únicamente se hallaron relaciones positivas con Costes del Conflicto, mientras que se tuvo evidencia de relaciones negativas con Reconciliación Social, Actitud Negociadora, Amenaza Percibida, Imposición Autoritaria e Imagen Negativa.

Para la dimensión de Relaciones Horizontales, se observaron relaciones tanto positivas como negativas, siendo las positivas con Actitud Etnocéntrica, Amenaza Percibida y Satisfacción de Necesidades, mientras que las negativas se dieron con Reconciliación Social y Legitimidad.

La dimensión de Jerarquía, correspondiente al cuestionario BARCAS, tuvo relaciones muy bajas con todas las dimensiones de la prueba CDPC, exceptuando Reconciliación Social, Ventaja para los Violentos y Confianza, dimensiones con las cuales no tuvo relación significativa.

Tabla 23. *Correlaciones entre las dimensiones del factor K-social y las dimensiones constituyentes del CDPC*

	SOLIDARIDAD Y MUTUALIDAD		RELACIONES HORIZONTALES		JERARQUIA	
	Coefficiente de correlación	Sig. (bilateral)	Coefficiente de correlación	Sig. (bilateral)	Coefficiente de correlación	Sig. (bilateral)
RECONCILIACIÓN SOCIAL	-,138	,034	-,140*	,031		
COSTES DEL MANEJO DEL CONFLICTO	,158	,015			-,251	,000*

ACTITUD ETNOCENTRICA			,263**	,000*	-,364	,000*
ACTITUD NEGOCIADORA	-,239	,000*			,198	,002
DIFERENCIAS INTERGRUPALES			,145*	,026	-,276	,000*
AMENAZA PERCIBIDA	-,167	,010	,189**	,003*	-,258	,000*
IMPOSICIÓN AUTORITARIA	-,156*	,016			-,229	,000*
LEGITIMIDAD			-,208**	,001*	,164	,011
IMAGEN NEGATIVA	-,176	,007			-,307	,000*
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES			,174**	,007	-,206	,001*
CONOCIMIENTO DEL OTRO					,188	,004

Nota: *Valores de significancia con un alfa establecido de 0,001

Fuente: Elaboración propia

Por su parte, la dimensión de Confianza Institucional del cuestionario BARCAS, presentó muy pocas relaciones, las cuales fueron negativas con las dimensiones del CDPC Actitud Negociadora y Ventaja para los Violentos, mientras que la dimensión Control Social sólo tuvo relación con 5 dimensiones del CDPC, siendo estas Costes del Manejo del Conflicto, Actitud Etnocéntrica, Diferencias Intergrupales, Actitud Negociadora y Ventaja para los Violentos, de las cuales, las tres primeras fueron positivas y las dos restantes, negativas.

Para Participación Cívica sólo se tuvieron relaciones negativas; dichas relaciones con las dimensiones del CDPC Actitud Negociadora, Amenaza Percibida, Legitimidad e Imagen Negativa. Por otro lado, Participación Política tuvo una relación positiva y dos relaciones negativas, siendo estas con Diferencias Intergrupales, Actitud Negociadora e Imagen Negativa, respectivamente.

Tabla 24. *Correlaciones entre las dimensiones del factor Confíe y las dimensiones constituyentes del CDPC*

CONFIANZA INSTITUCIONA L	CONTROL SOCIAL		PARTICIPACIÓ N CÍVICA		PARTICIPACIÓ N POLÍTICA	
	Coefici ente de correlac ión	Sig. (bilater al)	Coefici ente de correlac ión	Sig. (bilater al)	Coefici ente de correlac ión	Sig. (bilater al)
COSTE						
S DEL						
MANEJ						
O DEL	,128	,049	,167	,010		
CONFL						
ICTOT						
O						
ACTIT						
UD			,134	,039		
ETNOC						

ENTRI

CA

ACTIT

UD

NEGOC	-,203	,002	-,320	,000*	-,201	,002	-,198	,002
-------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	------

IADOR

A

DIFERE

NCIAS

INTER			,169	,009			,135	,038
-------	--	--	------	------	--	--	------	------

GRUPA

LES

AMEN

AZA

PERCIB					-,221	,001*		
--------	--	--	--	--	-------	-------	--	--

IDA

VENTA

JA	-,219	,001*	-,172	,008	-,208	,001*		
----	-------	-------	-------	------	-------	-------	--	--

PARA

LOS

VIOLE				
NTOS				
LEGITI				
MIDAD	-,139	,032		
IMAGE				
N				
NEGAT	-,206	,001	-,176	,007
IVA				

Nota: *Valores de significancia con un alfa establecido de 0,001

Fuente: Elaboración propia

Por último, todas las dimensiones del cuestionario BARCAS pertenecientes al factor de Fenoval, tuvieron relaciones muy bajas o no tuvieron ninguna. Así, Republicanismo Cívico sólo presentó una relación negativa con Diferencias Intergrupales, mientras que Medios presentó dos relaciones negativas y una positiva con Actitud Negociadora, Ventaja para los Violentos y Actitud Etnocéntrica, respectivamente. La restante dimensión correspondiente a Información y Transparencia no presentó ninguna relación con las dimensiones pertenecientes a la prueba CDPC.

Tabla 25. *Correlaciones entre las dimensiones del factor Fenoval y las dimensiones constituyentes del CDPC*

		ACTITUD ETNOCENT RICA	ACTITUD NEGOCIAD ORA	DIFERENCI AS INTERGRU PALES	VENTAJA PARA LOS VIOLENTO S
	Coefficiente				
REPUBLICANISMO CÍVICO	de correlación Sig. (bilateral)			-,145 ,026	
	Coefficiente				
MEDIOS	de correlación Sig. (bilateral)	,131*	-,143*		-,135 ,037

Fuente: Elaboración propia

5.5. Correlaciones entre dimensiones pertenecientes a la prueba CDPC y factores principales del Cuestionario Barcas

En esta sección se buscó dar cuenta de correlaciones existentes entre los principales factores del cuestionario BARCAS y las 12 dimensiones que conforman la prueba CDPC, de este análisis se halló que el factor K-social sólo tuvo relaciones negativas, siendo estas con las dimensiones Actitud Negociadora, Amenaza Percibida, Imposición Autoritaria e Imagen Negativa.

Tabla 26. *Correlaciones entre el factor K-social y las dimensiones de CDPC*

		ACTITUD NEGOCIADORA	AMENAZA PERCIBIDA	IMPOSICIÓN AUTORITARIA	IMAGEN NEGATIVA
KSOCIAL	Coefficiente				
	de	-,149	-,174	-,173	-,210
	correlación				
KSOCIAL	Sig.				
	(bilateral)	,022	,007	,008	,001*

Nota: * Valores de significancia con un alfa establecido de 0,001

Fuente: Elaboración propia

Por su parte, el factor Confíe tuvo relaciones tanto positivas, como negativas, siendo las relaciones positivas presentadas por este factor con Costes del Manejo del Conflicto y Diferencias Intergrupales, mientras que las negativas con Actitud Negociadora y Ventaja para los Violentos. Por último, Fenoval sólo presento una relación positiva muy baja con la dimensión confianza.

Tabla 27. *Correlaciones entre el factor Confíe y las dimensiones de CDPC*

		COSTES			
		DEL	MANEJO	DIFERENC	VENTAJA
		DEL	ACTITUD	IAS	PARA LOS
		CONFLICT	NEGOCIA	INTERGR	VIOLENT
		OTO	DORA	UPALES	OS
CONFÍE	Coefficiente de correlación	,134	-,272	,149	-,210
	Sig. (bilateral)	0,039	,000*	0,022	0,001*

Nota: * Valores de significancia con un alfa establecido de 0,001

Fuente: Elaboración propia

Tabla 28. *Correlaciones entre el factor Fenoval y las dimensiones de CDPC*

		CONFIANZA
FENOVAL	Coeficiente de	
	correlación	,143
	Sig. (bilateral)	,028

Fuente: Elaboración propia

6. Discusión y conclusiones

Históricamente, se ha destacado el rol que han tenido diferentes municipios de la zona caribe en el marco del conflicto armado colombiano, en el cual fueron víctimas de la disputa entre múltiples actores bajo diferentes hechos victimizantes, destacándose el desplazamiento forzado. Así mismo, no es desconocido el nivel de violencia aplicado sobre las poblaciones de los Montes de María que obligó a miles de personas de municipios como Tolú Viejo y Sincelejo a desplazarse forzosamente de su lugar de origen para salvaguardar su integridad.

Con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448, 2011), se ha realizado un arduo trabajo en llevar a la realidad el propósito de justicia, reparación y verdad para las víctimas. Pero, pese a este trabajo, por ejemplo, en cuanto a la reparación, comprendida en términos de la promoción de condiciones aptas para el retorno de las personas desplazadas (RUV, 2015), tal como reporta la RNI (2018) y el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 de Tolú Viejo (2016), aún se encuentran muchas falencias; en primera medida, para obtener una caracterización adecuada de las víctimas de los municipios de Tolú Viejo y Sincelejo y, en segundo lugar, frente al proceso de retorno de víctimas de desplazamiento forzado a sus lugares de origen, ya que se reporta un reducido número de jóvenes de 18 a 28 años víctimas de desplazamiento forzado que retornaron a dichos municipios.

En esa medida, es necesario conocer diferentes variables que pueden incidir en el proceso que estos jóvenes llevan a cabo cuando inician el retorno a sus lugares de origen desde donde fueron desplazados forzosamente, teniendo afectaciones no solo materiales, sino emocionales y

psicológicas, morales, políticas y socioculturales (CNMH, 2013; Hewitt et al., 2013; Villegas, 2011), desencadenando una cierta disposición de las personas para facilitar u obstaculizar la transformación constructiva del conflicto.

Así mismo, se hace pertinente considerar las transformaciones que se generan a partir del proceso de retorno, ya que diferentes autores afirman que, cuando los jóvenes se trasladan a sus territorios originarios, lo suelen hacer con un pensamiento transformado, “lo hacen con un universo sociocultural e identitario que conjuga lo aprendido en los lugares de asentamiento temporal, con la tradición inculcada por sus padres” (CNMH, 2015, p. 449). La misma situación de retorno genera una influencia en el modo en el que los jóvenes perciben el futuro a partir de su pasado (Bonilla, 2015).

Dichas afectaciones y transformaciones adquieren relevancia, no sólo a nivel personal y comunitario, sino a un nivel más amplio; es por esto que se hace relevante hablar del capital social, definido como esas habilidades o recursos con los que cuentan la mayoría de las personas en la vida diaria, es decir, la buena voluntad, el compañerismo, la simpatía mutua y las relaciones sociales entre un grupo de individuos y familias que forman una unidad social (Hanifan, 1916), haciendo esto que la sociedad pueda avanzar además en sus niveles de desarrollo y que, en caso de carencia de este, puede inferirse condiciones de vulnerabilidad en la población (Lunecke y Ruiz 2006, citados en Echeverri et al., 2014).

En razón de lo anterior, resulta relevante establecer las relaciones existentes entre el capital social encontrado en jóvenes víctimas de desplazamiento forzado en proceso de retorno y su disposición frente al conflicto para, de esta forma, conocer el potencial con el que cuentan estos

jóvenes para reintegrarse a la vida social, política y cultural de su lugar de origen después de su experiencia frente al conflicto armado.

En primera instancia, frente al CDPC, se encuentra que existen correlaciones entre las dimensiones que se ajustan a lo propuesto teóricamente por los autores; además, se encuentran diferencias significativas en la dimensión Imagen Negativa por sexo y en Reconciliación Social, Costes del Conflicto, Actitud Negociadora y Ventaja para los Violentos por escolaridad y Reconciliación Social e Imagen Negativa por situación laboral.

En específico, para estos jóvenes, se encuentra que, en general, se orientan más hacia una disposición no constructiva del conflicto, destacándose las puntuaciones altas en las dimensiones Costes del Conflicto, Actitud Etnocéntrica y Diferencias Intergrupales; esto puede ser interpretado como la presencia de orientaciones y procesos (Fisher, 1990, citado en Alzate et al., 2009) tales como la exaltación del propio grupo, el procesamiento selectivo de la información, reafirmando creencias grupales y marginando las disidencias, así como una orientación hacia la competitividad, lo cual obstruiría el reconocimiento de la legitimidad de los intereses y necesidades del otro, como se aprecia en los resultados.

A pesar de que también se destaque la actitud negociadora, la cual estaría orientada a una disposición constructiva del conflicto, tal vez dicha negociación definida como “un sistema de resolución de conflictos mediante el cual dos o más partes con intereses contrapuestos se comunican para llegar a un acuerdo, cediendo en algo cada una de ellas” (San Cristóbal, 2013), sea considerada por los participantes como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos

más bien protocolario, ya que, si no se acepta la legitimidad, no se posee confianza y no se tiene conocimiento del otro; no es posible llevar a cabo una negociación.

Estos resultados resultan preocupantes bajo el foco del objetivo que plantea la Ley de Víctimas (justicia, reparación y verdad), puesto que esos resultados dan cuenta de que “la dinámica del conflicto armado ha terminado por moldear lo sociopsicológico y sus consecuencias [...] lo que ha configurado, a su vez, enmarques emocionales y cognitivos ligados al miedo y la venganza y prácticas culturales violentas de gestión de conflictos [...]” (Castrillón-Guerrero et. al, 2018, p.85).

En esa medida, resulta pertinente cuestionarse si la disposición no constructiva del conflicto obedece sólo a la experiencia de ser víctima de conflicto armado en sí misma, a un inadecuado o insuficiente acompañamiento estatal a estas víctimas o a un erróneo direccionamiento o cumplimiento de la política pública orientada a la construcción de paz, entre otros factores, puesto que, al menos en estos jóvenes, se observa que aún estamos lejos de poseer las herramientas para aprender a convivir en un ambiente de posconflicto, muy a pesar de algunos contar con una reparación material como la vivienda, las soluciones mediatas brindadas por el Gobierno nacional no logran un sólido direccionamiento, encontrándose la desorientación y la carencia de una ruta definida que logre la transformación del conflicto.

Por otro lado, en cuanto a los resultados del BARCAS, se encuentran diferencias estadísticamente significativas, en cuanto a la variable sexo para las dimensiones Relaciones Horizontales, Confianza Institucional, Control Social, Participación Cívica y Participación

Política; con respecto a la escolaridad, sólo se encontraron diferencias en Participación Política y, por situación laboral, en las dimensiones Control Social y Participación Política.

Con respecto a la muestra, se evidencia que posee un gran potencial en lo que se refiere a la relación de la sociedad con la institucionalidad (Confíe), puesto que se destaca una buena relación entre representantes y votantes, actuación en el sistema democrático participativo, legitimidad otorgada a los mecanismos de control al Estado y rendición de cuentas y en general, la confianza en las diferentes instituciones como posibles actores en la solución de problemas.

Los puntajes más bajos, se obtuvieron en las dimensiones Información y Transparencia, Medios y Republicanismo Cívico (factor Fenoval); lo cual podría interpretarse como la creencia de los jóvenes de que la información que reciben a través de los medios no es suficiente y de calidad, que se orientan hacia actitudes clientelistas y el particularismo y que, no son plenamente conscientes del papel de los medios en los asuntos políticos.

De otro lado, en cuando a las dimensiones que componen el factor K-social, se evidencia que los puntajes no son muy elevados; sin embargo, puede encontrarse un buen potencial en la dimensión Solidaridad y Mutualidad, lo cual indicaría que estas personas reconocen en el otro una posibilidad de apoyo y el no sentirse desamparados, es decir, priorizan las relaciones cooperativas y recíprocas, en vez de las oportunistas. Lo anterior resulta de sumo interés, puesto que encontramos aspectos favorecedores para un análisis desde la teoría de transformación de Sudarsky (2009; citado en Hurtado et al., 2013).

Ahora bien, respondiendo al objetivo de la presente investigación, orientado a hallar las correlaciones entre las diferentes dimensiones del barómetro de capital social y el CDPC, se realizó un análisis general y otro de carácter específico.

Referente al análisis general de las correlaciones, pese a que las mencionadas más adelante son estadísticamente significativas, cabe resaltar que no son muy altas. Teniendo presente esta claridad, se evidenciaron correlaciones de cada uno de los factores de BARCAS con al menos una dimensión propuesta en el CDPC.

En cuanto a K-social, este presentó correlaciones negativas con Amenaza Percibida, Imposición Autoritaria e Imagen Negativa, lo cual da cuenta de que, en la medida que la importancia de la solidaridad, la reciprocidad y la capacidad para solucionar asuntos colectivos o comunes aumenta, se disminuye la probabilidad de que se escalen los conflictos debido a la percepción de amenaza, se disminuyen las estrategias de solución de conflictos agresivas y se disminuye la imagen negativa del exogrupo basado en el desconocimiento de este. También presentó correlaciones negativas con Actitud Negociadora, lo cual podría deberse a que la negociación puede implicar un tercero que ayude a resolver el problema, diferente a lo propuesto para las relaciones horizontales.

El factor Confíe presentó correlaciones positivas con Costes del Conflicto y Diferencias Intergrupales, lo cual indica que las relacionales de confianza con la institucionalidad aumentan en la medida que se hacen más visibles las diferencias entre grupos y la percepción de altos costes del conflicto; en cuando a las correlaciones negativas, se identifica que, en la medida en que aumenta Confíe, disminuye la Actitud Negociadora y la Percepción de Ventaja para los Violentos.

Estos resultados generan desconcierto, puesto que, teóricamente, resulta difícil identificar un conector entre este factor y las dimensiones, ya que expresan supuestos que serían contrarios en el caso de las correlaciones positivas y similares en el caso de las correlaciones negativas.

Con respecto al factor Fenoval, sólo se encuentra correlación positiva con la dimensión de Confianza, lo cual sugiere que la creencia en las fuentes de información no validadas aumenta en la medida que también aumenta la confianza, que a su vez permite intercambiar aclaraciones, seguridad y posibles contribuciones para reconstruir la relación.

En cuanto al análisis más detallado, se encuentra que la dimensión Solidaridad y Mutualidad se correlaciona positivamente con Costes del Conflicto; esta correlación podría deberse a una tercera variable: la resiliencia, definida como “la capacidad que tienen las personas para hacer frente al dolor, a experiencias difíciles o traumáticas” (Wilches, 2010, citado en Hewitt, et al., 2016, p. 128), puesto que el apoyo que puede percibir la persona, puede ser mediado por la percepción de los sucesos traumáticos vividos en el conflicto armado; presentando niveles de resiliencia altos más evidentes, aquellas personas que sufrieron más costes del conflicto.

Solidaridad y Mutualidad, también, se correlaciona negativamente con variables como la Amenaza Percibida, la Imposición Autoritaria y la Imagen Negativa, correlación que resulta esperable en la medida en que, a partir de relaciones cooperativas y recíprocas, se puede fomentar la creencia en las buenas intenciones de los otros y la atribución de características positivas, aspecto que se podría estar extrapolando al exogrupo.

A su vez, encuentra correlación negativa con Reconciliación Social y Actitud Negociadora; tal como en los costes con el conflicto, podrían estar mediadas por la presencia o no de hechos

negativos de los cuales hay que recuperarse y al no existir estos o no ser reconocidos, no es posible hacer una medición adecuada, en cuanto a la actitud negociadora.

Por parte de las relaciones horizontales, se observa que esta capacidad de ayudar a los semejantes y resolver problemas colectivamente sin necesidad de un tercero, responda a la satisfacción de necesidades básicas como grupo y puede generar que, en pro de la cohesión grupal, se desarrollen paralelamente actitudes negativas hacia el exogrupo, tales como la actitud etnocéntrica y la amenaza percibida, rechazando la legitimidad del mismo.

La dimensión Confianza Institucional encuentra correlaciones negativas con Actitud Negociadora y Ventaja para los Violentos, lo cual es un buen indicador, teniendo en cuenta el proceso de posacuerdo que Colombia está experimentando en la actualidad, expresado esto en que la confianza en el Estado se va a ver mediada por la percepción de las personas de que no se le da ventaja a los violentos sobre las víctimas.

En cuanto a la dimensión Control Social se encuentra correlación negativa con Costes del Conflicto, Actitud Etnocéntrica y Diferencias Intergrupales, lo que sugiere que, a mayor confianza en los mecanismos de control social del Estado, menor la percepción negativa y poco reflexiva del exogrupo.

Referente a la participación cívica, esta dimensión presentó correlaciones negativas con dimensiones del CDPC orientadas hacia la disposición no constructiva al conflicto, lo cual puede indicar que la participación en organizaciones sociales de distinta índole puede favorecer una disposición más constructiva del conflicto. Por último, la dimensión Jerarquía presenta un

resultado que no permite ser concluyente, ya que correlaciona con diferentes dimensiones del CDPC que aportan, tanto a la disposición constructiva del conflicto, como a la no constructiva.

Así, los hallazgos de esta investigación permiten dar un primer paso en varias vías: la primera, conocer características asociadas a los jóvenes víctimas de desplazamiento forzado en proceso de retorno al departamento de Sucre, que, como se mencionó anteriormente, no ha sido ampliamente estudiado, y, la segunda, explorar las relaciones existentes entre el concepto de capital social y la disposición frente al conflicto.

Se hace referencia a un primer paso, puesto que las correlaciones encontradas, pese a ser estadísticamente significativas, no son muy altas, aspecto que puede estar mediado por el tamaño de la muestra o las características de los participantes, tales como la condición de víctimas de este hecho, el departamento seleccionado o el grupo etario; se hace necesario replicar estas comparaciones en la población colombiana en general y en población víctima del conflicto armado de diferentes hechos victimizantes, esto en la medida de poder explorar más profundamente la relación entre los dos constructos, pese a que Hurtado et al. (2013) afirman que no se encontraron diferencias significativas entre estos dos tipos de población en la medición del 2011.

No obstante, si bien sólo es un primer paso, ofrece importantes conclusiones y abre nuevos cuestionamientos en la exploración del capital social en relación con la disposición frente al conflicto en el marco del posacuerdo en Colombia. En primera instancia, pese a la implementación de lo contemplado en la Ley de Víctimas, se hace necesario aún un acompañamiento a las víctimas que—además de la justicia, reparación y verdad—les permita transformar su visión del conflicto a una más constructiva, donde el conflicto sea considerado una oportunidad de cambio (Escuela

de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia [EJCUN], s.f.), ya que, actualmente, los jóvenes participantes presentan percepciones y actitudes no constructivas hacia el conflicto que facilitarían el escalamiento a violencia en condiciones específicas.

Sin embargo, es allí donde las correlaciones encontradas entre los dos constructos y los destacados puntajes de los participantes en Solidaridad y Mutualidad y varias dimensiones de Confíe se convierten en una potencialidades para la superación de las dificultades en alcanzar la comprensión más constructiva del conflicto, esto debido a que las relaciones cooperativas y recíprocas, como sentirse apoyado tanto por pares como la confianza en las instituciones, pueden ser la base sobre la cual estos jóvenes puedan regresar a sus lugares de origen transformando el conflicto.

De otro lado, resulta de interés el hallazgo de correlaciones que ubican ciertos aspectos del capital social en elementos clave para la disposición más constructiva al conflicto en víctimas de conflicto armado, tales como la solidaridad y la mutualidad, la participación cívica, la confianza institucional, las relaciones horizontales y el control social. Surge, de esta forma, una nueva mirada de atención a las víctimas que fortalece al sujeto como ciudadano y su formación sociopolítica.

Para lo anterior, sería necesario plantear programas que generen el establecimiento de asociaciones cívicas en aprovechamiento de los índices encontrados de solidaridad y mutualidad, y la disposición que tienen los afectados en el conocimiento del otro. Es necesario contrarrestar la falta de interés en la conformación de asociaciones cívicas con el fin de que los jóvenes se involucren en el saneamiento de su entorno y se logre acrecentar el nivel social y económico de la región estudiada.

Por lo tanto, se hace necesario emprender agendas de fortalecimiento de confianza en los entes gubernamentales. Como lo vimos, y a la luz del marco teórico, esto se lograría a través del cumplimiento de los programas de verdad, justicia y reparación, a través de los cuales, al reconocer los derechos de las víctimas, se conseguiría restablecer las relaciones sociales y políticas, indispensables para generar desarrollo socioeconómico de una región.

Por último, cabe recordar que se hace imprescindible que el esfuerzo de parte de los gobernantes se acreciente si se quiere alcanzar los objetivos de los planes de ordenamiento nacional, en aras de lograr una transformación estructural en el marco del posacuerdo en Colombia; esto entra en concordancia con lo encontrado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 2015, p.173) “en el caso colombiano, las actitudes abstractas tienden a evolucionar como resultado de cambios en actitudes más concretas y coyunturales”.

Referencias

- Acevedo Suárez, A. y Rojas Castillo, Z. M. (2016). Generalidades del conflicto, los procesos de paz y el posconflicto. *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – UPB*, 46 (124), Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/v46n124/v46n124a03.pdf>
- Acosta González, M. (2016). *Del desarraigo al retorno: análisis del proceso de retorno de las comunidades desplazadas por el conflicto armado al municipio de La Palma - Cundinamarca 2002-2014*. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Recuperado de: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20555/AcostaGonzalezMauricio2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID]. (2015). Cultura política de la democracia en Colombia y en las Américas, 2014. Dilemas de la democracia y desconfianza institucional en el marco del proceso de paz. Recuperado de: https://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/AB2014_Colombia_Country_Report_v21_revised_W_06042015.pdf
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR]. (2011). *Desplazamiento forzado, tierras y territorios. Agendas pendientes: la estabilización socioeconómica y la reparación*. Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Alzate, M., Durán, M. y Sabucedo, J. M. (2009). Población civil y transformación constructiva de un conflicto armado interno: aplicación al caso colombiano. *Universitas Psychologica*, 8 (3), 703-720. Recuperado de: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/617>

Anaconda, M.O. (2014). *Revisión documental del concepto "Enfoque psicosocial" en atención a víctimas del conflicto armado colombiano particularidades y reflexiones para una acción sin daño*. (Trabajo de especialización.) Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/679?locale=es>

Amaya, G (2015) Medición del Capital Social en el Área Metropolitana de Barranquilla [Diapositivas de PowerPoint]. Recuperado de: <https://www.uninorte.edu.co/documents/71530/9846339/Medici%C3%B3n+del+Capital+Social+en+el+%C3%81rea+Metropolitana+de+Barranquilla.pdf>

Arroyo Angulo, J. E. (2013). *Impacto psicosocial del conflicto armado en familias víctimas de Buenaventura (Estudio de tres casos en Buenaventura)*. (Trabajo de pregrado). Universidad del Valle, Buenaventura, Colombia. Recuperado de: <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10620/1/CB-0503492.pdf>

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1998, febrero 11). Principios rectores de los desplazamientos internos [E/CN.4/1998/53/Add.2]. Recuperado de: <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdmhbm.htm>

- Bar-Tal, D. y Banning, G. (2004). The Nature of Reconciliation as an Outcome and as a Process. En: Y. Bar-Samna-Tov (Ed.). *From Conflict Resolution to Reconciliation* (pp. 11-38). New York: Oxford University Press.
- Barreto Lugo, L., Bechara, S., Bogliacino, F., Chaves Sierra, N., Jiménez, L. M., Martínez, P., ... Vásquez Cruz, O. (2016). *Retos de la integración en comunidades retornadas. Análisis del caso de las Palmas, Bolívar* (Investigaciones y productos CID No. 27). Recuperado de <http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/inv-productos-cid-27.pdf>
- Baskin, T. W. y Enright, R. D. (2004). Intervention Studies on Forgiveness: A Meta-Analysis. *Journal of Counseling & Development*, 82 (1): 79-90. doi: 10.1002/j.1556-6678.2004.tb00288.x
- Babbie, E. (2000). *Fundamentos de la investigación social* (J. F. J. Dávila Martínez, Trad.). México: International Thomson Editores.
- Bello, M.N y Chaparro, R. (2010). *El daño desde el enfoque psicosocial* (Acción sin daño y construcción de paz No. 9). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC). Recuperado de: <http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/595>
- Bejarano, J. A. (1999). Ensanchando el centro: el papel de la sociedad civil en el proceso de paz. En: A. Monsalve Solórzano y E. Domínguez Gómez (Eds.), *Colombia: democracia y paz* (pp. 27-98). Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana – Universidad de Antioquia – CSIC España

- Bonilla Castillo, V. E. (2015). El retorno de población desplazada en contexto con el conflicto armado y los actores en Colombia. *Sociedad y discurso*, 26, 105-125. doi: <https://doi.org/10.5278/ojs..v0i26.1095>
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital (Richard Nice, Trad.). En: J. Richardson (ed.). *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). New York: Greenwood Press.
- Briones, G. (1998). *Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales* (Especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social No. 3). Colombia: Instituto Colombiano de educación superior (ICFES) – Asociación Colombiana de Universidades (ASCUM).
- Bueno Cipagauta, M. A. (2006). La reconciliación como un proceso socio-político. Aproximaciones teóricas. *Reflexión Política*, 8 (15), 64-78. Recuperado de: <https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/616/592>
- Caicedo Rey, V. (2011). *Construcción de confianza y capital social entre la comisión regional de reparación y reconciliación y las víctimas del conflicto armado colombiano*. (Trabajo de pregrado). Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia. Recuperado de: <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/handle/10893/9003>
- Camargo Flórez, M. J. y Rojas Celis, K. A. (2016). *Estrategias de enseñanza para la rememoración, el perdón y la resiliencia de jóvenes en condición de desplazamiento*. (Trabajo de pregrado.) Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/20364>

Cantens, B. (2010) Is Political Forgiveness Possible? En: C. Chakrabarti y S. J. Fairbanks (Eds.) *Politics, Pluralism and Religion* (pp. 213-232). New Castle: Cambridge Scholars Publishing.

Cardozo Rusinque, A. C., Cortés-Peña, O. F. y Castro Monsalvo, M. (2018). Relaciones funcionales entre salud mental y capital social en víctimas del conflicto armado y personas en situación de pobreza. *Interdisciplinaria. Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 34(2), 235-257. Recuperado de: <http://www.ciipme-conicet.gov.ar/ojs/index.php/interdisciplinaria/article/view/331/44>

Castellar Paternina, E., Montes, L. M., Forbes, E. y Martínez, C. (2009). Situación de pobreza extrema: Un caso en Colombia. *Salud Uninorte*. 25 (2), 205-219. Recuperado de: <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/214>

Castrillón-Guerrero, L., Riveros Fiallo, V., Knudsen, M. L., López López, W., Correa-Chica, A., & Castañeda Polanco, J. G. (2018). Comprensiones de perdón, reconciliación y justicia en víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. *Revista de Estudios Sociales*, 63, 84-98. doi: <http://dx.doi.org/10.7440/res63.2018.07>.

Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2014). *La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en el Caribe colombiano (1960-2010)*. Bogotá: Taurus — Semana. Recuperado de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2010/tierra_conflicto/la_tierra_en_%20disputa.pdf

Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2015). *Una nación desplazada. Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia*. Bogotá: Imprenta Nacional.

Recuperado de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/una-nacion-desplazada_accesible.pdf

Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2017). *Campesinos de tierra y agua. Memorias sobre sujeto colectivo, trayectoria organizativa, daño y expectativas de reparación colectiva en la región Caribe 1960-2015*. Bogotá: Imprenta Nacional. Recuperado de:

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/campesinos-de-tierra-y-agua_accesible.pdf

Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP). (2015). *Reconciliación. Perspectivas y aportes conceptuales para su comprensión* (Papeles de paz

No. 10). Recuperado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20161027012002/20150801.Reconciliacion_Ppaz10.pdf

Cerda Gutiérrez, H. (1993). *Los Elementos de la Investigación* (2a ed.). Bogotá: Editorial El Búho.

Chaux, E. (2012). *Educación, convivencia y agresión escolar*. Bogotá: Ediciones Uniandes – Editorial Taurus.

Coleman, J. S. (1988) Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociólogo*, 94 (Suppl.), S95-S120.

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas [CHCV]. (2015). *Contribución al entendimiento*

del conflicto armado en Colombia. Recuperado de

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana%2C%20Febrero%20de%202015.pdf

Consejo Municipal de Toluviéjo. (2016). Plan de desarrollo municipal 2016-2019. “Unidos por

Toluviéjo”. Recuperado de: <http://www.toluviejo-sucre.gov.co/noticias/plan-de-desarrollo-municipal-de-toluviejo-sucre-periodo>

Consejo Municipal de Sincelejo. (2016). Plan de Desarrollo 2016-2019-Sincelejo, Ciudad con

Visión. Recuperado de:

<http://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/Ciudadanos/ProyectosNormatividad/Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal%202016%20-%202019.pdf>

Corte Constitucional, Sala Plena. (13 de septiembre de 2012). Sentencia C-715. Expediente D-

8963. [MP Luis Ernesto Vargas Silva]

Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión. (7 de noviembre de 2009). Sentencia T-1115.

Expediente D-8963. [MP José Cepeda Espinosa]

Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión. (17 de octubre de 2002). Sentencia T-881.

Expediente D-8963. [MP Eduardo Montealegre Lynett]

Cortés Moreno, A. M., y Torres Caballero, A. M. (2013). *Concepciones sobre el perdón y la*

reconciliación en el contexto colombiano. (Trabajo de pregrado.) Pontificia Universidad

Javeriana, Bogotá, Colombia. Recuperado de
[https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15688/CortesMorenoangelaM
aria2014.pdf?sequence=1](https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15688/CortesMorenoangelaMaria2014.pdf?sequence=1)

Cortés, A., Torres, A., López-López, W., Pérez, C., y Pineda-Marín, C. (2015). Comprensiones sobre el perdón y la reconciliación en el contexto del conflicto armado colombiano. *Psychosocial Intervention*, 25 (1), 19-25. doi: <https://doi.org/10.1016/j.psi.2015.09.004>

Cubillos Novella, A. F. & De la Ossa Velásquez, L. S. (2012). *Dinámicas del Conflicto Armado en Colombia. Modelo de análisis del conflicto armado en Montes de María a través del tiempo: Miradas desde los actores involucrados*. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2018). *Pobreza Monetaria Sucre. Año 2017* (Boletín técnico). Bogotá: DANE. Recuperado de:
[https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Sucre_Po
breza_2017.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Sucre_Pobreza_2017.pdf)

Decreto 1480 de 2014 [Presidencia de la República]. Por el cual se declara el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno. Agosto 5 de 2014.

Díaz, A.M., y Sánchez Torres, F. (2005). *Los efectos del conflicto armado en el desarrollo social colombiano, 1990-2002* (Documento CEDE 2005-58). Universidad de los Andes. Recuperado de:
https://economia.uniandes.edu.co/assets/archivos/Documentos_CEDE/d2005-58.pdf

Departamento Nacional de Planeación [DNP] – Grupo proyectos especiales. (2016). *Índice de incidencia del conflicto armado*.

Domínguez de la Ossa, E. (2014). *Un modelo teórico de la resiliencia familiar en contextos de desplazamiento forzado*. (Tesis doctoral). Universidad de Manizales, Manizales, Colombia.

Duncan, G. (2005). Narcotraficantes, mafiosos y guerreros. Historia de una subordinación. En: A. Rangel (Comp.). *Narcotráfico en Colombia: economía y violencia*. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia.

Duque Montoya, M. C. (2014). *Reconciliación y perdón en el posconflicto*. Universidad Santo Tomás – Programa Paz a Tiempo.

Echandía Castilla, C. (1998). El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia. Bogotá: Presidencia de la República de Colombia – Oficina del Alto Comisionado para la Paz – Observatorio de la Violencia.

Echeverri Londoño, M. C., Meneses Ariza, J. R., Restrepo Sierra, M. C. y Marín Pava, P. A. (2014). Diagnóstico psicosocial de un barrio en la ciudad de Armenia. *El Ágora USB*, 14 (1), 127-145.

Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia [EJCUN] (s.f.) Programa de justicia en equidad para Santander. Recuperado de http://cesc.uchile.cl/buenaspracticasenprevencion/bbp_docs/35_justicia_en_equidad_para_santander.pdf

- Faúndez, X., Brackelaire, J. y Cornejo, M. (2013). Transgeneracionalidad del trauma psicosocial: imágenes de la detención de presos políticos de la dictadura militar chilena reconstruida por los nietos. *Psyke*, 22 (2), 83-95. doi: <http://www.psykhe.cl/index.php/psykhe/article/view/563>
- Fehr, E. y Fischbacher, U. (2004). Third-party punishment and social norms. *Evolution and Human Behavior*. 25 (2) 63-87. doi: [http://dx.doi.org/10.1016/S1090-5138\(04\)00005-4](http://dx.doi.org/10.1016/S1090-5138(04)00005-4)
- Foliaco-Gamboa, J. (2013). Capital social: importancia de las mediciones para Colombia. *Respuestas*, 18 (2), 42-59. Recuperado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/45340/1/juliofoliacogamboa_artcs.pdf
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef] (2006). *Proteger a la niñez en los conflictos* (Hojas informativas sobre la protección de la infancia). Recuperado de: https://www.unicef.org/spanish/protection/files/ninez_en_conflictos.pdf
- Forni, P., Siles, M. y Barreiro, L. (2004). *¿Qué es el Capital Social y cómo analizarlo en contextos de exclusión social y pobreza? Estudios de caso en Buenos Aires, Argentina* (Research Report No. 35). East Lansing: Michigan State University – Julian Samora Research Institute. Recuperado de: <https://jsri.msu.edu/upload/research-reports/rr35.pdf>
- Forni, P. y Nardone, M. (2007). ¿Cómo generar capital social en contextos de exclusión?: experiencias de organizaciones comunitarias y sus redes sociales. *Temas Sociológicos*, 12, 145-168. Recuperado de: <http://ediciones.ucsh.cl/ojs/index.php/TSUCSH/article/view/221>

Fundación Antonio Restrepo Barco (2013). *Tercera medición del Capital Social en Colombia –*

Barcas 2011 [diapositivas]. Bogotá. Recuperado de:

<https://es.slideshare.net/JohnSudarsky/tercera-medicin-de-capital-social-en-colombia-barcas-2011>

Gali, G. y Acevedo, L (2004) *(Re)conciliación para la democracia: la articulación entre políticas de reconciliación y proceso de construcción de la democracia*. Lima: IDEA Internacional.

Recuperado de: <https://docplayer.es/19520356-Re-conciliacion-para-la-democracia-la-articulacion-entre-politicas-de-reconciliacion-y-proceso-de-construccion-de-la-democracia-borrador.html>

Gallardo de Parada, Y. y Moreno Garzón, A. (1999). *Recolección de la información* (Serie Aprender a Investigar No. 3). Instituto Colombia para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) – Subdirección General Técnica y de Fomento. Recuperado de: <http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/images/CEUL/mod3recoleccioninform.pdf>

García-Valdecasas Medina, J. I. (2011). Una definición estructural de capital social. *REDES – Revista hispana para el análisis de redes sociales*. 20 (6). Recuperado de: http://revista-redes.rediris.es/pdf-vol20/vol20_6.pdf

Garzón Moreno, D. y Valencia Riaño, J. (2018). Configuración histórica y causas de la violencia en la región de Montes de María. En: Castelblanco, C. A. y Narváez Jaimes, G. E. (Eds.). *La vida me dio otra oportunidad. Dinámicas sociales del conflicto armado en la región de los Montes de María* (pp. 27-86). Bogotá: Universidad Santo Tomás.

Gibson, J. L. (2004). Overcoming Apartheid: Can Truth Reconcile a Divided Nation? *Politikon*, 31 (2), 129-155. doi: <https://doi.org/10.1080/0258934042000280698>

Gordon, S. (2005). Confianza, capital social y desempeño de organizaciones. Criterios para su evaluación. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 47 (143). doi: <http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2005.193.42472>

Grupo de Memoria Histórica [GMH] (2013). *¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Imprenta Nacional. Recuperado de: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/BYColombiaMemoriasGuerraDignidadAgosto2014.pdf>

Guerra, M. y Plata, J. J. (2005). Estado de la investigación sobre conflicto, posconflicto, reconciliación y papel de la sociedad civil en Colombia. *Revista de Estudios Sociales*, 21, 81 – 92. doi: <https://doi.org/10.7440/res21.2005.07>

Gutiérrez Cristancho, Y, V. (2015). *Los dolores del alma y la vida cotidiana: intervención psicosocial y desplazamiento forzado, Montes de María-Sucre, Colombia*. (Tesis de maestría). Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, San Luis Potosí, México. Recuperado de: <http://ninive.uaslp.mx/jspui/handle/i/3769>

Hanifan, L. T. (1916). The Rural School Community Center. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 67 (1), 130-138. doi: <https://doi.org/10.1177/000271621606700118>

Henao Granada, A., Martínez de Meriño, C., y Martínez Pérez, E. (2017). Población de desplazados: de un conflicto armado a un conflicto vecinal. En: Meriño Córdoba, V. H., Chirinos Araque, Y. V., Camejo López, L. H. y Martínez de Meriño, C. Y. (Compa.) *Gestión del conocimiento. Perspectiva multidisciplinaria* (Vol. III). Santa Ana de Coro: Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTFAG).

Hernández Mercado, L. F. (2010). *Procesos de retorno y reubicación de dos comunidades victimizadas por el desplazamiento forzado en los Montes de María. Actores sociales y proyectos políticos*. (Tesis de maestría.) Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://bdigital.unal.edu.co/2719/1/697011.2010.pdf>

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México D.F.: McGraw-Hill (6a ed.). México, D.F.: McGraw-Hill.

Herrera Ruiz, A. L., Nova Villamil, J., y Mejía Celeita, V., (2016) Disposición al cambio sociopolítico del conflicto armado desde la perspectiva de los partidos políticos colombianos. *Conflicto & Sociedad*, 4 (2), 37-50.

Hewitt Ramírez, N., Juárez, F., Parada Baños, A. J., Guerrero Luzardo, J., Romero Chávez, Y. M., Salgado Castilla, A. M., Vargas Amaya, M. V. (2016). Afectaciones psicológicas, Estrategias de Afrontamiento y Niveles de Resiliencia de Adultos Expuestos al Conflicto Armado en Colombia. *Revista Colombiana de Psicología*. 25 (1), 125-140.

Hurtado, D. A., García, D. M., & Copete, A. F. (2013). *Las vicisitudes del capital social de Colombia*. Bogotá: Fundación Antonio Restrepo Barco.

Iosa, E., Iosa, T., Lucchese, M., Burrone, M. S., Alvarado, R., Valencia, E. y Fernández, R. (2013).

Transmisión transgeneracional del trauma psicosocial en comunidades indígenas de argentina: percepción del daño en el pasado y presente y acciones autoreparatorias.

Cadernos Saúde Coletiva, 21 (1), 85-91.

Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC] (2017). Informe mundial sobre desplazamiento interno.

Kalayjian A. y Paloutzian R. F. (2009) *Forgiveness and reconciliation*. New York: Springer. doi:

<https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0181-1>

Kanyangara, P., Rimé, B., Philippot, P. & Yzerbyt, V. (2007). Collective Rituals, Emotional

Climate and Intergroup Perception: Participation in “Gacaca” Tribunals and Assimilation of the Rwandan Genocide. *Journal of Social Issues*, 63 (2), 387-403. doi:

<https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2007.00515.x>

Kelman, H. (2008). Reconciliation from a social-psychological perspective. En: A. Nadler, T.

Malloy & J.D. Fisher (Eds.). *The Social Psychology of Intergroup Reconciliation* (pp. 15-32). New York: Oxford University Press.

Kerlinger, F. N. y Lee, H. B. (2002). *Investigación del comportamiento. Métodos de investigación*

en ciencias sociales (4ª ed.). México: McGraw-Hill.

Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado;

la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los

desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Julio 18 de 1997. DO: 43.091.

Ley 1090 de 2006. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. Septiembre 6 de 2006. DO: 46383.

Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Junio 10 de 2011. DO. No. 48096.

López, A. M. C. (2012). El capital social en la resolución de conflictos y creación de desarrollo: el caso nicaragüense. *Revista de Paz y Conflictos*, 5, 139-156.

López-López, C., Pineda Marín, D., Murcia León, M.C., Perilla Garzón, M.C. y Mullet, E. (2012) Colombian Lay People's Willingness to Forgive Different Actors of the Armed Conflict: Results from a Pilot Study. *Psicológica*, 655-663.

López-López, C., Pineda Marín, M.C., Murcia León, M.C., Perilla Garzón, M.C. y Mullet, E. (2013) Forgiving Perpetrators of Violence: Colombian People's Position. *Social Indicators Research*, 114, 287-301.

Lunecke, A. y Ruiz, J. C. (2006). *Capital social y violencia: Análisis para la intervención en barrios urbanos críticos*. Chile: Instituto de Sociología.

Márquez Quintero, M. (2009). Enseñanza de la historia del conflicto armado en Colombia: Fundamentos para la construcción de propuestas para su enseñanza en el ámbito

universitario. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*, 5 (2), 205-230 Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/1341/134116861009.pdf>

Martín-Baró, I. (1988). La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en el salvador. *Revista de Psicología de El Salvador*, 7 (28), 123-141. Recuperado de: http://www.uca.edu.sv/coleccion-digital-IMB/wp-content/uploads/2015/11/1988-La-violencia-pol%C3%ADtica-y-la-guerra-como-causas-del-trauma-RP1988-7-28-123_141.pdf

Martínez-Cárdenas, R., Ayala-Gaytán, E. A., & Aguayo-Téllez, E. (2015). Confianza y capital social: evidencia para México. *Economía, sociedad y territorio*, 15 (47), 35-59. doi: <http://dx.doi.org/10.22136/est002015553>

Marciales Páez, J. L. (2013) *Datos y voces: Un estudio comparativo del capital social acumulado por la población en situación de desplazamiento perteneciente a organizaciones de base en Bogotá*. (Trabajo de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Recuperado de: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/15855>

Medina Montañez, M. V., Layne Bernal, B., Galeano Heredia, M. P. y Lozada Puerto, C. (2007). Lo psicosocial desde una perspectiva holística. *Tendencias & Retos*, 12, 177-189. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4929306>

Melo Amaya, A. y Castro, C. (2013). Aprendizajes en procesos de acompañamiento psicosocial en contextos de diversidad cultural: tensiones emergentes del enfoque diferencial. En: O. L. Acevedo Montoya y A. Bastidas Beltrán (Eds). *Acción colectiva y transformación. La*

dimensión política del acompañamiento psicosocial (pp. 179-199). Bogotá: Corporación AVRE.

McCullough, M. E. y Root L. M. (2005). *Forgiveness as Change*. En: Worthington, E. L. *Handbook of Forgiveness* (pp. 91-107).

Mejía Avilés, A. E. (2017). *Reconciliación y perdón en medio del conflicto político y armado colombiano conceptos en tensión 2015*. (Trabajo de pregrado). Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia. Recuperado de <http://190.242.62.234:8080/jspui/handle/11227/4760>

Méndez Méndez, N. (2014). *Una propuesta metodológica para la medición de capital social en víctimas de conflicto armado*. (Tesis de maestría.) Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Recuperado de: <https://egob.uniandes.edu.co/index.php/es/component/abook/book/12-documentos-de-trabajo/50-una-propuesta-metodologica-para-la-medicion-de-capital-social-en-victimas-del-conflicto-armado>

Oficina de Promoción Social. (2012). *Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas en el Marco de la Ley 1448 de 2011*. Manuscrito sin publicar, Ministerio de Salud y Protección Social, Bogotá, Colombia.

Misión de Observación Electoral. (s.f.). Monografía político electoral. Departamento de Sucre 1997 a 2007. Recuperado de https://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/sucre.pdf

Moser, C. O. N. (1998). The asset vulnerability framework: Reassessing urban poverty reduction strategies, *World Development*, 26 (1), pp. 1–19. doi: [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(97\)10015-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)10015-8)

Movimiento por la Paz, el Desarrollo y la Libertad [MPDL] y la Oficina Humanitaria de la Unión europea [ECHO]. (2004). Atención psicosocial a desplazados. Ayuda humanitaria en Colombia. Recuperado de http://www.disaster-info.net/desplazados/documentos/mpdl/psicosocial/index_print.htm#_Toc91396753

Murillo, E. (2012). Hacia una política pública de reconciliación social: tipología y casos. *Papel Político*, 17 (2), 423-467. Recuperado de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/papelpol/article/view/6534>

Murphy, J. G. (2005). *Getting Even: Forgiveness and its Limits*. Oxford University Press. doi: 10.1093/acprof:oso/9780195178555.001.0001

Narváez Jaimes, G. E. (2018). Dinámicas de la violencia en Montes de María (1970-2010). En: Castelblanco, C. A. & Narváez Jaimes, G. E. (Eds.). *La vida me dio otra oportunidad. Dinámicas sociales del conflicto armado en la región de los Montes de María* (pp. 87-181). Bogotá: Universidad Santo Tomás.

Navarro González (2008). *Determinantes de la pobreza y el desplazamiento en los departamentos de la costa Caribe: Sucre, Córdoba y Bolívar, durante 1990-2006*. (Trabajo de grado). Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10784/553>

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario [DIH] (2003). *Panorama actual de la región de Montes de María y su entorno* (Serie Geográfica 19). Bogotá: Vicepresidencia de la República. Recuperado de: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/montes/montes.pdf

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario [DIH] (2004). Algunos indicadores sobre la situación de Derechos Humanos en el Departamento de Sucre. Bogotá: Vicepresidencia de la República.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario [DIH] (2006). *Panorama Actual de Sucre* (Serie Geográfica No. 27). Bogotá: Vicepresidencia de la República. Recuperado de: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/sucre.pdf

Palacio, J., Correa, A., Díaz, M. y Jiménez, S. (2003) La búsqueda de la identidad social. un punto de partida para comprender las dinámicas del desplazamiento - Restablecimiento forzado en Colombia. *Investigación & Desarrollo*, 11 (1), 26-55. Recuperado de: <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/1135/711>

Palacio, J., Sabatier, C., Abello, R., Amar Amar, J., Madariaga, C. y Gutiérrez, K. (2001). El capital social como apoyo a la superación de problemas en la población desplazada por la violencia en Colombia. *Investigación & Desarrollo*, 9 (2), 514 – 525. Recuperado de <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/3046/2108>

Rojas López, M. D. y Pérez Ortega, G. (2006). *Capital social: en las universidades públicas de Medellín*. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de: <http://bdigital.unal.edu.co/10285/>

Polo Imbachi, A. Y. (2017). *Retorno y/o reubicación de las víctimas de desplazamiento forzado en condiciones de dignidad en el marco de la Ley 1448 de 2011*. (Tesis de maestría.) Pontificia Universidad Javeriana, Santiago de Cali, Colombia. Recuperado de: http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10006/Retorno_reubicaci%C3%B3n_v%C3%ADctimas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Portafolio (2017, abril 9). 8.376.463: las víctimas del conflicto armado en Colombia. *Portafolio*. Recuperado de: <https://www.portafolio.co/economia/gobierno/el-numero-de-victimas-del-conflicto-armado-en-colombia-504833>

Portela, M., y Neira, I. (2002). Capital social: concepto y estudio econométrico sobre el capital social en España. *Estudios Económicos de Desarrollo Internacional*, 2(2), 25-52. Recuperado de: https://ideas.repec.org/a/ea/eedein/v2y2002i2_2.html

Polit, D. F. y Hungler, B. P. (2000) *Investigación científica en ciencias de la salud* (6ª ed.) México: McGraw-Hill.

Portales, L. y García, C. (2009). Capital social: conceptualización, enfoques y mediciones. *XLIV Asamblea Anual*. Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración. Quito, Ecuador. Recuperado de http://www.ascolfa.edu.co/web/archivos/conferencia2009/memorias/MemoriasCladea2009/upac01_submission_77.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2010). *Los Montes de María: Análisis de la conflictividad*. PNUD – Área de paz, desarrollo y reconciliación. Recuperado de https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20conflictividad%20Montes%20de%20Maria%20PDF.pdf

Puertas, G., Ríos, C., y Del Valle, H. (2006). Prevalencia de trastornos mentales comunes en barrios marginales urbanos con población desplazada en Colombia. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 20(5), 324-330. Recuperado de <http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7912/05.pdf;sequence=1>

Putnam, R. D., Leonardi, R. y Nonetti, R.Y. (1993). *Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy*. New York: Princeton University Press.

Real Academia Española. (2018). Disposición. En: *Diccionario de la lengua española* (23.2a ed.). Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=DxgWzK0>

Rangel, A. (Comp.) (2005). *Narcotráfico en Colombia: economía y violencia*. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia.

Red Nacional de Información [RNI] (2018). Reporte de víctimas registradas. Recuperado de: <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/>

Redacción Justicia. (2016, abril 15). Víctimas del conflicto en Colombia ya son ocho millones. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16565045>

Registro Único de víctimas [RUV] (2014-2017). Registro Único de Víctimas - RUV. Recuperado de <http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV>

Rotter, J. B. (1980). Interpersonal trust, trustworthiness and gullibility. *American Psychologist*, 35 (1), 1-7. doi: <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.35.1.1>

Rouhana, N. N. (2011). Key Issues in Reconciliation: Challenging Traditional Assumptions on Conflict Resolution and Power Dynamics. In D. Bar-Tal (Ed.). *Intergroup Conflicts and Their Resolution. A Social Psychological Perspective* (pp. 291-314). New York: Psychology Press.

Sabucedo, J. M., Rodríguez, M. y López, W. (2000). Movilización social contra la violencia política: sus determinantes. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 32 (2), 345-359. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80532205>

Salazar, B. & Castillo, M. P. (2001). *La hora de los dinosaurios: conflicto y depredación en Colombia* (Serie Textos No. 36). Bogotá: Universidad del Valle.

Sánchez, R. y Jaramillo, L. E. (1999). Impacto del desplazamiento sobre la salud mental. *Universitas Humanística*, 22 (47), 87-101. Recuperado de: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/9590>

Sánchez Turcios, R. A. (2015). t-Student. Usos y abusos. *Revista Mexicana de Cardiología*, 26 (1), 59-61. Recuperado de: <http://www.medigraphic.com/pdfs/cardio/h-2015/h151i.pdf>

San Cristóbal Reales, S. (2013). Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación, conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil. *Anuario Jurídico y*

Económico Escurialense, 46, 39-62. Recuperado de:
<http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/145>

Schreiter, R. J. (2000). *El ministerio de la reconciliación: espiritualidad y estrategias*. Barcelona: Sal Terrae.

Shnabel, N., y Nadler, A. (2010). A Needs-Based Model of Reconciliation: Perpetrators Need Acceptance and Victims Need Empowerment to Reconcile. En: M. Mukulincer, y P. Shaver (Eds.). *Prosocial Motives, Emotions and Behavior: The Better Angels of Our Nature* (pp. 409-429). Washington: American Psychological Association.

Ruiz Silva, A. y Chaux Torres, E. (2005). *La formación de competencias ciudadanas*. Bogotá: Ascofade.

Sudarsky, J. (2007). *La evolución del capital social en Colombia, 1997-2005. Los cambios en el capital social (Ksocial), confianza y control indirecto del estado (Confíe) y fe en fuentes de información no validadas (Fenoval)*. Bogotá: Fundación Antonio Restrepo Barco.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas [UARIV]. (2015a). *Mi derecho al retorno y a la reubicación como víctima del desplazamiento forzado*. Recuperado de:
<http://www.unidadvictimas.gov.co/es/escuela-de-reparaciones/mi-derecho-al-retorno-y-la-reubicaci%C3%B3n-como-v%C3%ADctima-del-desplazamiento>

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas [UARIV]. (2015n). *Retornos y reubicaciones hacia la reparación integral a víctimas del desplazamiento forzado*.

Recuperado de: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/escuela-de-reparaciones/retornos-y-reubicaciones-hacia-la-reparaci%C3%B3n-integral-las-v%C3%ADctimas-del>

Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas [UARIV]. (2016) *Informes Regionales 2016*.

Ury, W. L. (2005). *Alcanzar la paz. Resolución de conflictos y mediación en la familia, el trabajo y el mundo*. Barcelona: Paidós.

Urteaga, E. (2013). La teoría del capital social de Robert Putnam: Originalidad y carencias. *Reflexión Política*, 15 (29), 44-60. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/110/11028415005.pdf>

Valencia, L. (2007). Los caminos de las alianzas entre los paramilitares y los políticos. En: M. Romero (Ed.). *Parapolítica. La ruta de la expansión militar y los acuerdos políticos* (pp. 11-58). Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris.

Vargas Londoño, A. L. y Rodríguez Quitian, J. L. (2016). *Experiencias formativas en paz y reconciliación. Aproximación a un estado del arte* (Trabajo de pregrado). Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10185/18638>

Varela Betancur, A. C. Y Godoy Rodríguez, K. (2018). *Aproximación al concepto de víctima y su inclusión social frente al conflicto armado en Colombia* (Trabajo de pregrado). Universidad de San Buenaventura, Santiago de Cali, Colombia. Recuperado de: https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/5703/1/Aproximaci%C3%B3n_Concepto%20_V%C3%ADctima_Godoy_2017%20.pdf

Villagrán Valenzuela, L. (2016). *Trauma Psicosocial: Naturaleza, dimensiones, y medición*. (Tesis doctoral). Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10486/672523>

Villegas Patiño, M. (2011). *Niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, educación en derechos humanos y derecho a la educación*. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10554/1550>

Walsh, C. (2000). *Propuesta para el tratamiento de la interculturalidad en la educación*. Lima: Ministerio de Educación – Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria – Unidad de Educación Bilingüe Intercultural (UNEBI). Recuperado de: <https://centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/propuesta-para-el-tratamiento-de-la-interculturalidad-en-la-educaci%C3%B3n>

Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy framework. *Theory and Society*, 27(2), 151-208. doi: 10.1023/A:1006884930135

Yáñez Gallardo, R., Ahumada Figueroa, L. y Cova Solar, F. (2006). Confianza y desconfianza: dos factores necesarios para el desarrollo de la confianza social. *Universitas Psychologica*, 5 (1). Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64750102>